



Universidad
Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
Curso académico 2015 – 2016

Trabajo Fin de Máster

“Muros invisibles. Sistemas legales coexistentes o crimen de Apartheid contra el pueblo palestino”

Ana Sánchez Mera

Tutor

Rafael Escudero Alday

Getafe [31 de Mayo 2016]

Palabras clave: Seguridad, derechos humanos, Israel, Palestina, sistemas legales, crimen de Apartheid.

Resumen: El trabajo explora la situación de coexistencia de sistemas legales en Israel y Palestina, planteando la existencia de un posible crimen de Apartheid contra el pueblo palestino. Se analiza también el rol de concepto de seguridad y su impacto en el diseño de los sistemas legales y en la aplicación de la ley tanto en Israel como en el territorio palestino ocupado.



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons
Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada

<u>0</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>5</u>
<u>1</u>	<u>LA FALACIA DE LA SEGURIDAD</u>	<u>7</u>
1.1	ACEPCIONES Y USOS DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD	7
1.1.1	SEGURIDAD JURÍDICA	8
1.1.2	SEGURIDAD CIUDADANA	9
1.1.3	SEGURIDAD NACIONAL	9
1.1.4	SEGURIDAD HUMANA.	11
1.2	¿QUÉ ENTIENDE ISRAEL POR SEGURIDAD?	12
1.3	CARÁCTER JUDÍO DEL ESTADO DE ISRAEL COMO ELEMENTO CENTRAL DE PROTECCIÓN.	14
1.4	ESTADO DE EMERGENCIA EN ISRAEL: PRIMACÍA DE LA SEGURIDAD SOBRE LA LIBERTAD	19
<u>2</u>	<u>MARCOS LEGALES EN ISRAEL</u>	<u>25</u>
2.1	DESARROLLO DEL SISTEMA POLÍTICO ISRAELÍ: DESDE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL HASTA LA ACTUALIDAD	26
2.1.1	LOS AÑOS 50	27
2.1.2	AÑOS 60 HASTA LOS 90	30
2.1.3	DE LOS 90 A LA ACTUALIDAD	34
2.2	LA APLICACIÓN DE LA LEY Y SUS DIFERENCIAS. DISCRIMINACIÓN FORMAL Y MATERIAL	37
2.2.1	DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES	39
2.2.2	DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS	40
2.3	DERECHOS SILENCIADOS: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA PROTESTA DE LA POBLACIÓN PALESTINA QUE RESIDE EN ISRAEL.	41
2.4	EL ROL DE TRIBUNAL SUPREMO DE ISRAEL: ¿USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA?	46
2.4.1	DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA	48
2.4.2	DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y OPINIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LOS ASESINATOS EXTRAJUDICIALES.	52
2.4.3	DERECHO A LA FAMILIA	55

<u>3</u>	<u>MARCOS LEGALES EN CISJORDANIA Y GAZA</u>	<u>58</u>
3.1	ACUERDOS DE OSLO:	
¿FRONTERAS TERRITORIALES O LÍMITES A LOS DERECHOS?		59
3.1.1	ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS: LOS ENFOQUES DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y DE DERECHOS HUMANOS.	64
3.1.2	CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA ERA POST-OSLO	68
3.2	SISTEMAS LEGALES APLICABLES A POBLACIÓN PALESTINA DE CISJORDANIA Y DE LA FRANJA DE GAZA	71
3.2.1	EL SISTEMA LEGAL PALESTINO	72
3.2.2	EL CÓDIGO MILITAR ISRAELÍ	76
3.3	SISTEMAS LEGALES APLICABLES A POBLACIÓN ISRAELÍ.	85
3.3.1	MECANISMOS DE APLICACIÓN DE LA LEY Y RENDICIÓN DE CUENTAS: IMPUNIDAD, SILENCIO Y COMPLICIDADES.	85
3.3.2	LOS ASENTAMIENTOS Y SU JUSTIFICACIÓN ¿SITUACIÓN LEGAL?	93
<u>4</u>	<u>¿SISTEMAS LEGALES COEXISTENTES O CRIMEN DE APARTHEID?</u>	<u>97</u>
4.1	ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CRIMEN DE APARTHEID	100
4.2	CRIMEN DE APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO: VULNERACIONES POR PARTE DE ISRAEL DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID.	103
4.2.1	EL DERECHO A LA VIDA Y A LA LIBERTAD DE LA PERSONA	107
4.2.2	IMPOSICIÓN DE CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE ACARREN LA DESTRUCCIÓN FÍSICA, TOTAL O PARCIAL DE UN GRUPO RACIAL	115
4.2.3	DISCRIMINACIÓN RACIAL Y RECORTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES	118
4.2.4	SEGREGACIÓN RACIAL	119
4.2.5	EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO FORZOSO	121
4.2.6	PERSECUCIÓN DE LAS VOCES CRÍTICAS.	122
<u>5</u>	<u>CONCLUSIONES</u>	<u>133</u>
<u>6</u>	<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	<u>137</u>

0 INTRODUCCIÓN

“This is a court of law, young man, not a court of justice”

Oliver Wendell Holmes.

El presente trabajo gira en torno a la ley, la seguridad y la justicia en una de las zonas más convulsas del planeta: Israel y el territorio palestino ocupado. A lo largo de las páginas de este estudio, estos tres conceptos se relacionan entre sí de diferentes maneras para acercar a la persona lectora a uno de los aspectos más desconocidos y centrales del mal llamado conflicto palestino: la organización de los diferentes sistemas legales que coexisten en Israel y el territorio palestino ocupado.

Actualmente el mapa legal de Israel y el territorio palestino ocupado presenta una amalgama de códigos y reglamentos militares, civiles y religiosos que crea un entramado complejo y opaco. Los sistemas legales se han convertido en una suerte de muros invisibles que separan a la población en función de su origen, religión o lugar de residencia. El objeto de este trabajo será analizar si esta coexistencia de sistemas no oculta en realidad un crimen de Apartheid contra el pueblo palestino.

A toda esa amalgama de sistemas hay que añadirle otro elemento más: el concepto de seguridad, al que se dedica el primer capítulo del trabajo. En un contexto tan securitizado como el israelo-palestino es esencial definir a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad, qué es lo que se quiere proteger, cómo se pone en práctica y con qué consecuencias. En este aspecto es esencial el rol de valor de Israel como un Estado judío y democrático a la hora de analizar qué valores prevalecen en el diseño de mecanismos de protección, en la clasificación de las amenazas y en el desarrollo de estrategias. Estudiaremos cómo el concepto de seguridad permea el diseño de los sistemas legales, convirtiéndose en uno de los aspectos claves de su articulación.

Los capítulos segundo y tercero describen los sistemas legales que se aplican dentro de Israel y en el territorio palestino ocupado, respectivamente. A través de textos legales, sentencias judiciales e informes de diferentes agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, se clarificará el funcionamiento de estos sistemas desde un punto de vista tanto teórico, qué dicen las leyes, y desde una

aproximación práctica, qué dicen los Tribunales cuando aplican o interpretan esas leyes y cómo afecta esto a la población en su día a día. Esta descripción servirá para determinar si efectivamente, podemos hablar de unos sistemas legales que coexisten, o si esta simultaneidad conlleva un crimen de Apartheid, como veremos en el último capítulo.

Determinar si es posible o no hablar de un crimen de Apartheid contra el pueblo palestino es un elemento fundamental en el diseño de futuras estrategias de construcción de paz en Palestina. Romper la lógica equitativa, la de dos partes enfrentadas, la lógica de las negociaciones y de la paz por territorios, que reduce la situación de Palestina y la situación de su pueblo a una situación de ocupación militar prolongada es un imperativo cada vez más necesario para conseguir esa tan ansiada paz. Para poder acabar con la impunidad es necesario poder acabar con el silencio y con sus complicidades, para poder luchar contra la injusticia es necesario ponerle nombre y utilizar las herramientas adecuadas para combatirla. Todo esto es necesario para poder construir, por fin, una paz justa y duradera, para Israel, para Palestina y para todas las personas que allí habitan.

1 LA FALACIA DE LA SEGURIDAD

En este capítulo voy a defender la tesis de que Israel hace un uso político de la seguridad, utilizándola como pretexto para justificar flagrantes vulneraciones del Derecho internacional humanitario (DIH) y del Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), como en el caso del ilegal e ilegítimo bloqueo a la Franja de Gaza o la construcción del Muro. Las instituciones de Israel utilizan la seguridad para llevar a cabo sus políticas coloniales y expansionistas, recortando gravemente para ello los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, especialmente de la población palestina que reside tanto en el territorio ocupado (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este) como en las fronteras de Israel.

Para ello voy a definir brevemente cuáles son las distintas acepciones del concepto de seguridad en el marco del lenguaje político-jurídico, para después centrarme en cómo entiende y desarrolla Israel el concepto. En el siguiente apartado me centraré en definir cuáles son los valores que Israel quiere proteger y cuál es la finalidad de la seguridad para el Estado hebreo, analizando la protección del valor del Estado de Israel como un Estado judío y democrático. Finalmente, revisaré las implicaciones del estado de emergencia permanente en el que el Estado se ha visto sumido desde su creación, qué problemas conlleva y qué impacto tiene sobre las libertades y derechos fundamentales de sus habitantes.

1.1 Acepciones y usos del concepto de seguridad

La Constitución española reconoce hasta 5 adjetivos distintos para el concepto de seguridad: jurídica (art. 9.2), personal (Art. 17.1), social (Art. 41), ciudadana (Art.104.1) y pública (Art. 149.1.29). Esta multiplicidad de acepciones plantea problemas a la hora de definir el concepto, de fundamentar qué es lo que se pretende proteger y de señalar qué medidas son necesarias para garantizar esa protección. Antes de entrar a analizar el uso político que Israel hace de la seguridad, considero necesario hacer un breve repaso por estos distintos enfoques y conceptualizaciones del término, en el marco del discurso jurídico-político. No quiero ignorar que éste es un concepto controvertido y que adoptar una u otra definición conlleva implicaciones políticas, al ser un término cargado de connotaciones que varía en función de las personas, culturas y situaciones. Como veremos

más adelante, la decisión de situarse en un marco teórico u otro no es una decisión baladí, ya que los distintos enfoques tienen impactos directos y variables en la protección de los derechos fundamentales.

De entre los distintos conceptos de seguridad voy a definir -por ser los que más se relacionan con el tema que nos atañe. los de: seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad humana y seguridad nacional.

1.1.1 Seguridad Jurídica

“Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene”¹.

El artículo 5º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 recoge ya la idea de la seguridad jurídica. En el Estado español el principio de seguridad jurídica se recoge en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, a pesar de que, como señala Escudero², en ningún momento se define en qué consiste dicho principio, teniendo que acudir a la interpretación de los tribunales y a la doctrina para definir este principio. Escudero define la seguridad jurídica como “la capacidad que debe ofrecer el derecho a sus destinatarios para que éstos puedan prever las consecuencias jurídicas de sus acciones”³ Es decir, las personas deben saber qué acciones están permitidas, cuáles no y cuáles son las consecuencias de llevar a cabo éstas últimas. Para ello, las normas tienen que ser públicas, duraderas, comprensibles, prospectivas y aplicadas por parte de los órganos judiciales. Lo contrario a la seguridad jurídica sería la arbitrariedad, el desconocimiento de qué consecuencias legales pueden tener nuestros actos, o cómo serán los procedimientos o procesos legales a los que podríamos enfrentarnos en caso de infringir la ley.

¹ Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Disponible online http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf [Consultado el 22 mayo 2016]

² Escudero Alday, R., “La seguridad humana: una propuesta conceptual”, en Escudero, R. (ed), *Segregados y reclusos: los palestinos y las amenazas a su seguridad*, Catarata, Madrid, 2008, p. 21

³ *ibidem*

1.1.2 Seguridad ciudadana

La Constitución española asume el concepto de seguridad ciudadana en el artículo 104.1 y el concepto de seguridad pública en el 149.1.29ª. Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado ambos conceptos como sinónimos, con algunos matices. Tal como se expresa en la exposición de motivos⁴ de la Ley del ordenamiento jurídico español asume un concepto material de seguridad ciudadana, entendida como la actividad dirigida a la protección de las personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.

El binomio libertad-seguridad está muy presente en esta acepción de seguridad. En la LO 4/2015 se reconoce este dilema, que resuelve así mismo en la exposición de motivos señalando que la jurisprudencia constitucional hace admisibles ciertas limitaciones de los derechos y libertades de la ciudadanía, siempre y cuando se amparen en un principio de proporcionalidad con una triple dimensión: 1) juicio de idoneidad, 2) juicio de necesidad y 3) juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha limitación⁵.

1.1.3 Seguridad nacional

La seguridad nacional ha estado centrada tradicionalmente en el Estado, es decir, el Estado y sus valores son el objeto de protección. Centra su justificación en el conocido como paradigma realista de las relaciones internacionales (*realpolitik*). En este paradigma prioriza la seguridad y el poder por encima de otras consideraciones. A falta de una autoridad mundial efectiva, las relaciones internacionales estarían caracterizadas por el caos y la guerra. Por tanto, sería responsabilidad de cada Estado defender su territorio y fronteras de dichas amenazas⁶.

⁴ BOE 17/11/2015. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442 [Consultado el 22 mayo 2016]

⁵ Ver también Robert Alexy, “Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, traducción de Carlos Bernal Pulido, *REDC*, núm. 66, 2002, p. 32.

⁶ Pérez Armiño, K. y Areizaga, M. “Seguridad Humana” Diccionario de HEGOA. Disponible online <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/204> [Consultado el 17 noviembre 2015]

G. Kennan define la seguridad nacional como “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras”⁷. Se trataría pues, en última instancia, de proteger los intereses nacionales.

Este concepto de seguridad nacional fue ampliamente desarrollado y estudiado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser, como he indicado anteriormente, un concepto con muchas acepciones, la mayoría de los autores hace referencia en sus definiciones a dos ideas: la defensa de las fronteras territoriales y la protección de su núcleo de valores (Thomas, 1996).

Gene Sharp indicaba que el hecho de utilizar términos tan abstractos en cuanto a la protección de valores se refiere, podía conllevar a situaciones de represión a grupos internos que supuestamente atenten contra los intereses y valores del país.

“Si se incluye ‘interés nacional’ dentro de ‘seguridad nacional’, se deja abierta la posibilidad de la represión de grupos internos que supuestamente ponen en peligro los intereses del país, así como de la intervención militar en países con los que se tengan diferencias económicas, políticas o de cualquier índole. Si también se incluye, como lo hace Richard Ullman, cualquier “amenaza drástica que degrade la calidad de vida’ o ‘que reduzca el rango de opciones políticas del gobierno de un Estado o de entidades privadas no gubernamentales”, esto eleva el interés económico de la iniciativa privada al nivel de prioridad nacional y se abre la puerta a diversos tipos de intervención militar en otros países, en nombre de la seguridad nacional.”⁸

⁷ Iglesias, L., “Seguridad nacional y estrategia. La protección de los intereses y valores de España en un mundo globalizado”, *Escenarios Actuales*, nº 3, 2013, p. 7. Disponible online http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/MLI_EjercitoChile_ESIM_Num.3_dic2013.pdf [Consultado el 22 mayo 2016]

⁸ Gene Sharp, “En torno a la definición de seguridad nacional”, en Aguayo, S. y Bagley, B (ed) *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*, Siglo veintiuno editores, México, 1990, p. 91

1.1.4 Seguridad humana.

Hacia finales de los 80 y principios de los 90 comienza a desarrollarse un nuevo paradigma de las relaciones internacionales que relacionan la inseguridad con la insatisfacción de las necesidades básicas de gran parte de la población⁹. Boutros Ghali, el Secretario General de NNUU, presenta en 1992 a petición del Consejo de Seguridad la llamada “Agenda para la Paz: diplomacia preventiva, construcción y mantenimiento de la paz”¹⁰. En ese documento ya se hacen referencias a la necesidad de que la seguridad debe englobar aspectos que trasciendan a las amenazas militares. Fue dos años después, en 1994, en el Informe de Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)¹¹ de ese mismo año cuando se acuña y sientan las bases para la definición actual del concepto de seguridad humana:

“La seguridad humana promueve la adopción de medidas centradas en las personas, exhaustivas, apropiadas a cada contexto y orientadas a la prevención, que intentan reducir la posibilidad de que se produzcan conflictos, ayudan a superar los obstáculos que entorpecen el desarrollo y promueven los derechos humanos de todos.”¹²

Kofi Annan, 11 años después (en 2005), señalaba los tres elementos principales de la seguridad humana en su informe “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos (A/59/2005)”¹³:

⁹ Thomas, C. *In Search of Security: The Third World in International Relations*, Lynne Rienner, Boulder Colorado, 1987.

¹⁰ NNUU doc. Ghali, B. “An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping”. 1992

Disponible online

http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf [Consultado el 22 mayo 2016]

¹¹ NNUU doc. PNUD, “Informe de Desarrollo Humano”, 1994, p. 27.

Disponible online http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹² NNUU doc. “La seguridad humana en las Naciones Unidas.” 2015 p. 5 Disponible online http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_booklet_-_spanish.pdf [Consultado el 22 mayo 2016]

¹³ NNUU doc. A/59/2005. Annan, K. “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” 2005. Disponible online <http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf> [Consultado el 22 mayo 2016]

- i. Libertad para vivir sin temor.
- ii. Libertad para vivir sin miseria.
- iii. Libertad para vivir en dignidad.

Esta nueva aproximación al concepto de seguridad es una conceptualización holística y centrada en el individuo, en contraposición con la aproximación hegemónica de seguridad nacional que sigue estando vigente en la mayoría de los Estados. No plantea la seguridad como un concepto defensivo, sino integrador, basado en un desarrollo humano sostenible, y en la “solidaridad entre la gente. No se puede provocar por la fuerza, de un ejército opuesto a otro ejército”¹⁴.

El concepto de la seguridad humana señala como amenazas a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la contaminación, afirmando que no son conceptos aislados, sino globales e interconectados: la falta de seguridad humana en una parte del mundo repercutirá en otras. Propone por último un enfoque preventivo frente a intervenciones a posteriori.

1.2 ¿Qué entiende Israel por seguridad?

La seguridad, entendida como seguridad nacional, es un elemento prioritario en la política del gobierno hebreo. Ocupa un lugar clave tanto en la elaboración de políticas como en el desarrollo legislativo y tiene un claro reflejo en la asignación presupuestaria. Israel en 2014 destinó un 5,23% de su PIB a defensa, comparable al porcentaje de países como Libia, Eritrea o Arabia Saudí y 5 veces mayor que países como España (0,91% en la misma fecha). Esta cantidad supone un 12,81% del gasto público del Estado¹⁵, cantidad nada desdeñable.

Shay Shabtai¹⁶, investigador especializado en temas de seguridad en Israel, asegura en una de sus publicaciones que Israel no ha conseguido definir de manera consensuada objetivos nacionales de seguridad desde los tiempos de Ben Gurion. En ese mismo

¹⁴ NNUU doc. PNUD (1994) Informe de Desarrollo Humano. P. 27 Disponible online http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁵ Gastos Públicos Defensa Disponible online <http://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa> [Consultado el 22 mayo 2016]

¹⁶ Shabtai, S. *Israel's National Security Concept: New Basic Terms in the Military-Security Sphere* Strategic Assessment, Volume 13 No. 2. August 2010. p 13-16

informe, Shabtai lista una serie de principios sobre los cuales, en su opinión, deberían asentarse las estrategias de seguridad nacional del Gobierno de Israel, siendo estos:

- 1) Decisión: referida a la imposición por fuerza militar de una política deseada en un estado enemigo o en sus líderes. Aquí se englobarían todas las ofensivas militares.
- 2) Resiliencia: término que viene a sustituir al concepto de defensa civil¹⁷. Este concepto invoca al derecho del pueblo israelí de defenderse de ataques y amenazas a través de todos los medios posibles.
- 3) Desincentivos: referido al uso de técnicas militares que alienten al enemigo a abandonar su lucha. En esta categoría entran por ejemplo las detenciones y arrestos “preventivos”, como el autor los denomina en el artículo.
- 4) Prevención: referida al uso de medidas que prevengan al enemigo de desarrollar posibles amenazas. Un ejemplo claro de esto sería la construcción del Muro, del que se hablará con extensión más adelante.
- 5) Eliminación: constituye un daño a las capacidades existentes. Ataques a bases u objetivos militares entran en esta categoría. Sorprende la inclusión a modo de ejemplo en esta categoría el ataque a la flotilla “Free Gaza” (Shabtai, 2010). La llamada Flotilla de la Libertad era una embarcación civil que se dirigía a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo marítimo al que lleva sometida la Franja desde 2006. El ejército de Israel atacó la embarcación en aguas internacionales matando a 9 personas de ciudadanía turca¹⁸.
- 6) Parálisis: consistiría en la expansión de las acciones de desincentivos (incremento de la violencia en la mayoría de los casos) aunque no vayan a terminar en un ataque militar (decisión).
- 7) Aprobación: se refiere a la aprobación de la comunidad internacional. La búsqueda de apoyo de actores internacionales clave en la área política que den el beneplácito a las acciones promovidas por el Gobierno de Israel. Se entiende que es necesario contar con el apoyo de actores internacionales para legitimar sus acciones. Claro ejemplo es la relación con el Gobierno de los EEUU.

¹⁷ La defensa civil es un sistema preventivo de defensa de la población ante desastres naturales o conflictos, promovido desde la propia sociedad civil para proteger tanto a la población como su patrimonio. Para una definición del término más extensa ver Sharp, G. *National security through civilian based defence*. Association for Transarmament Studies. Nebraska, 1970, p.47

¹⁸ Rengel, C. “Una travesía a golpes de esperanza y desaliento” *Periodismo Humano*, 2011. Disponible online <http://periodismohumano.com/temas/ataque-de-israel-a-la-flotilla-humanitaria> [Consultado 22 mayo 2016]

- 8) Cooperación en seguridad: referida en este caso al establecimiento de alianzas contra enemigos comunes. Un ejemplo sería la coordinación con la Autoridad Palestina en su lucha contra Hamas.

Shabtai le otorga una gran importancia al ámbito de las intervenciones militares o a la búsqueda de apoyos para las mismas como estrategias para garantizar la seguridad. No se hace referencia a la protección de los derechos ni de los intereses de las personas que habitan en los territorios que se pretenden defender, aunque sí hace referencia a la protección de los valores e intereses del Estado, así como de sus fronteras y territorio.

1.3 Carácter judío del Estado de Israel como elemento central de protección.

En 1999 Israel crea el *National Security Council*¹⁹ (Comité de Seguridad Nacional) Es un comité que depende directamente del Primer Ministro y que se encarga de todos los temas relativos a la seguridad nacional, siendo muchos de ellos (tal como apuntan en su página web) asuntos clasificados y secretos.²⁰ Su misión es la de asesorar al Primer Ministro en aquellos temas relacionados con la seguridad nacional. En su visión, reflejan que su objetivo es el de promocionar la seguridad en el Estado de Israel de la manera más profesional posible, atendiendo a las bases estipuladas en la Declaración de Independencia del Estado de Israel en 1948²¹.

En la Declaración del Establecimiento de Estado de Israel, del 14 de Mayo de 1948 puede leerse lo siguiente:

“El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución llamando al establecimiento de un Estado Judío en Eretz-Israel (...) Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho del pueblo judío a establecer su propio Estado es irrevocable. Este derecho es el

¹⁹ National Security Council. Disponible online <http://www.nsc.gov.il/he/Pages/home.aspx> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁰ *idem*.

²¹ Declaration of Establishment of State of Israel. Disponible online <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx> [Consultado 22 mayo 2016]

derecho natural del pueblo judío a ser los dueños de su propio destino, como todas las otras naciones, en su propio Estado soberano”.

El carácter judío de Israel es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el Estado, siendo uno de los principales valores a proteger. Esto, como apunta Sharp²², se ha traducido en una represión y discriminación para todos aquellos grupos que no comparten este valor. No apoyar la idea de Israel como un Estado judío se percibe como una amenaza para la seguridad nacional. Cualquier persona que se oponga o no reconozca el carácter judío del Estado de Israel es considerado un enemigo del mismo.

Un claro ejemplo de esto es el caso de Haneen Zoabi, parlamentaria de la *Knesset* palestina ciudadana de Israel. Zoabi fue suspendida de sus privilegios parlamentarios en 2010 por su participación en la Flotilla de la Libertad, que pretendía romper el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo al que está sometida la Franja de Gaza desde que Hamás ganase las elecciones en 2007²³. Dos años después, en 2012 el comité electoral planteó descalificar a Zoabi, alegando que descalificaba el Estado de Israel de manera constante y que incitaba públicamente contra el Estado, sus instituciones y contra su ejército²⁴. La petición señalaba que Zoabi negaba la existencia de Israel como un Estado Judío y democrático y que sobre la base del art. 7 A de la Ley Básica de la *Knesset*²⁵, podía ser descalificada como miembro de este órgano.

“Art.7-(a)- “La lista de un candidato no participará en las elecciones a la *Knesset* y una persona no podrá ser candidata a la *Knesset*, si los objetivos o actos de lista o de la persona, de manera expresa o implícita, incurren en uno de los siguiente supuestos:

- 1) Negación de la existencia del Estado del Israel como un Estado Judío y democrático.

²² Gene Sharp, “En torno a la definición de seguridad nacional”, en Aguayo, S. y Bagley, B (ed) *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*, Siglo veintiuno editores, México, 1990, p. 91.

²³ Lis, J and Khoury, J. “Knesset Panel Recommends Revoking Arab MK's Privileges” *Haaretz*, 2012. Disponible online <http://www.haaretz.com/israel-news/knesset-panel-recommends-revoking-arab-mk-s-privileges-1.294669> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁴ Yahav, T. “Elections Committee to discuss Zoabi's disqualification”. *Y-Net*, 2012. Disponible online <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4317728,00.html> Consultado 22 mayo 2016]

²⁵ Basic Law, the Knesset, 1958. Disponible online https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

- 2) Incitación al racismo.
- 3) Apoyo a la resistencia armada de un estado hostil o de un grupo terrorista en contra del Estado de Israel.”

Israel ha desarrollado a lo largo de los años un complejo sistema legal centrado en la protección de la seguridad del Estado hebreo y de su carácter judío. La primacía otorgada a la protección de la seguridad nacional se ha contrapuesto y antepuesto en muchas ocasiones a la seguridad jurídica y humana.

La construcción del Muro es un claro ejemplo de esta primacía, constituyendo además en este caso en una grave vulneración del DIH y del DIDH. En 2004, la Corte Internacional de Justicia emitía una opinión consultiva en la que negaba que la construcción del Muro estuviese justificada por motivos de seguridad, como alegaba Israel:

“La construcción del Muro y su régimen asociado no pueden ser justificadas por exigencias militares o por motivos de seguridad nacional u orden público”²⁶.

La Corte, además, declaró ilegal tanto la construcción del muro como del régimen de ocupación asociado:

“La construcción del muro y su régimen conexo contravienen el derecho internacional.”²⁷

Recordando a los Estados parte de la Convención de Ginebra que son responsables de asegurar el cumplimiento de la misma y garantizar la protección de las personas protegidas tal como establece la Convención:

“Consecuencias jurídicas para Estados distintos de Israel - Carácter *erga omnes* de algunas de las obligaciones violadas por Israel - Obligación de todos los Estados de no reconocer la situación ilícita resultante de la construcción del muro

²⁶ Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Disponible online http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²⁷ *idem*, p. 4

y de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por esa construcción - Obligación de todos los Estados de velar, dentro del respeto a la Carta y al derecho internacional, por que se ponga fin a los impedimentos para el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación resultantes de la construcción del muro - Obligación de todos los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra de asegurar, dentro del respeto a la Carta y al derecho internacional, de hacer que Israel respete las reglas de derecho internacional humanitario incorporadas al Convenio - Necesidad de que las Naciones Unidas, y especialmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, examinen las nuevas medidas que sea necesario adoptar para poner fin a la situación ilícita emanada de la construcción del muro y su régimen conexo, teniendo debidamente en cuenta la Opinión Consultiva”²⁸.

Las principales herramientas con las que cuenta Israel para proteger el carácter judío de su Estado y garantizar la seguridad a través del sistema jurídico son las Leyes Básicas²⁹ y las Regulaciones de Emergencia³⁰. Las Leyes Básicas son lo más parecido que Israel tiene a una Constitución y es el documento que define y establece los valores identitarios y prioritarios del Estado, así como su forma de Gobierno, protección de derechos humanos, etc. Otra herramienta con gran peso y poder en el desarrollo legislativo de la seguridad es el Tribunal Supremo de Israel. Tal como señala Schmidt, el Tribunal Supremo casi siempre ha renunciado a interferir en los llamados “Asuntos de seguridad” y/o en casos relacionados con violaciones de derechos fundamentales de la población palestina residente en el territorio ocupado o en Israel³¹.

Las Leyes Básicas hacen múltiples referencias al carácter judío del Estado, como podemos ver por ejemplo, el ya mencionado art. 7A de la Ley Básica sobre la *Knesset* (el Parlamento israelí) o el art. 1 de la Ley Básica de Dignidad Humana³².

²⁸ *ibidem*

²⁹ Los textos de las Leyes Básicas están disponibles online

https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod.htm [Consultado 22 mayo 2016]

³⁰ The Defence (Emergency) Regulations, 1945. Disponible online

<http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil02> [Consultado 22 mayo 2016]

³¹ Schmidt, Y. *Foundation of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories*, 2001. Tesis doctoral, p. 115. Disponible online

[http://www.academia.edu/1967765/Foundations of civil and political rights in Israel and the occupied territories](http://www.academia.edu/1967765/Foundations_of_civil_and_political_rights_in_Israel_and_the_occupied_territories) [Consultado 22 mayo de 2016]

³² Basic Law Human Dignity, 1992. Disponible online

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm [Consultado el 22 mayo 2016]

Art. 1 “El propósito de esta ley fundamental es la protección de la dignidad humana y la libertad, con el fin de establecer en una Ley Básica los valores del Estado de Israel como un Estado judío y democrático”.

Esto supone un claro conflicto en un Estado en el que aproximadamente un 25% de su población no es judía³³ y que, por tanto, no se identifica con este valor. Este artículo está excluyendo a toda esa franja de la población, ciudadanos y ciudadanas palestinas de Israel que no se definen como judíos y que no quieren ser parte de una teocracia judía³⁴.

También existe un porcentaje, muy reducido, de israelíes ateos que no quieren que su Estado se conforme como un Estado religioso, sino como un verdadero Estado democrático, laico y plural. Es más, según los datos obtenidos por el Israel Democracy Institute en una encuesta realizada en 2014, un 40% de la población judía de Israel cree que reconocer a Israel como un Estado Judío perjudicaría la imagen del país³⁵.

Esta estrategia de intentar hacer de Israel un Estado puramente judío se ha visto reforzada en los últimos años del presente Gobierno de Netanyahu, con el lanzamiento de la controvertida propuesta conocida como la Ley Básica de Israel como Estado-Nación del pueblo judío³⁶. Este tema ha centralizado muchos de los debates de la esfera pública hebrea, tanto en las calles como en la *Knesset*.

Los problemas que se desprenden de este anhelo de imponer en Israel un Estado judío van más allá de un problema de falta de libertad religiosa. Crean una situación de desigualdad tanto formal como material entre las personas que habitan dentro de las

³³ Central Bureau of Statistics, “Israel's Population on the 67th Independence Day - 2015 (Hebrew only)” Consultado el 11/09/2015

http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511099

³⁴ Este grupo se corresponde con la población palestina que residía en las actuales fronteras de Israel antes de la creación del Estado en 1948 y que decidió quedarse tras la Declaración de Independencia de Israel. Es un colectivo que como veremos más adelante sufre graves discriminaciones y es frecuentemente tratado como una ciudadanía de segunda clase.

³⁵ Sharon, J. “Poll: 40% of Israelis think 'Jewish State' law would damage the country” *Jerusalem Post*, 2014 Disponible online <http://www.jpost.com/Israel-News/Poll-40-percent-of-Israelis-think-Jewish-State-law-would-damage-the-country-384109> [Consultado el 22 mayo 2016]

³⁶ Más información sobre la propuesta de Ley en <http://www.adalah.org/en/law/view/585> Traducción no oficial de la propuesta de ley al inglés disponible online [http://index.justice.gov.il/StateIdentity/InformationInEnglish/Documents/Basic%20Law%20110911%20\(1\).pdf](http://index.justice.gov.il/StateIdentity/InformationInEnglish/Documents/Basic%20Law%20110911%20(1).pdf) [Consultados ambos enlaces 22 mayo 2016]

fronteras del Estado de Israel³⁷ que podría implicar un crimen de apartheid. En los siguientes capítulos me centraré en analizar este aspecto y las diferencias de aplicación e interpretación de la ley en los distintos territorios en función de la nacionalidad del sujeto.

1.4 Estado de emergencia en Israel: primacía de la seguridad sobre la libertad

Continuando con el análisis de las implicaciones que tiene el desarrollo de una política centrada en la seguridad nacional, dedicaré el resto del capítulo a examinar otro aspecto intrínsecamente ligado al concepto de seguridad israelí: su estado de emergencia permanente y los argumentos legales que se utilizan para justificarlo.

El estado de emergencia es un régimen de excepción que puede ser decretado por un Estado para controlar o sobrellevar una situación, como su propio nombre indica, de emergencia o excepcional³⁸. Israel decretó el estado de emergencia el día de su constitución y no lo ha derogado hasta la fecha. La excepcionalidad se ha convertido en la norma en este caso y ha llevado al país la paradójica situación de la normalización de la emergencia.

En 1945 el Mandato Británico en Palestina decreta las *British Mandate Defense (Emergency) Regulations* (Regulaciones de Emergencia) e Israel incorpora dichas regulaciones a su sistema legal tras su creación en 1948. En aquellos momentos la aplicación de una regulación de emergencia no era muy cuestionada, ya que hablamos de un Estado incipiente con alta inestabilidad política. Pasados unos años, en 1951 se plantea en la *Knesset* un debate sobre las mismas, en el que se argumenta que las regulaciones contradicen los principios democráticos básicos y se crea un comité, el Comité de

³⁷ Israel nunca ha definido sus fronteras. Para el fin de este trabajo se entienden como fronteras de Israel las marcadas por la UNSCR 242 en 1967 y suscritas posteriormente en los Acuerdos de Oslo en el 1993. Disponibles en UNSCR 242 (1967)

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136> y Acuerdos de Oslo, 1993 <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/48/486>

³⁸ En España los estados de alarma, excepción y sitio “Tienen vigencia “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”, según establece la Ley Orgánica. 4/1981, de 5 de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que establece las competencias y limitaciones correspondientes aunque también son recogidos por la Constitución Española en su artículo 116.”

Disponible online <http://www.defensa.gob.es/defensa/cadenamando/situaciones/> [Consultado 22 mayo 2016]

Constitución y Ley³⁹, para que redacte una propuesta de ley para su eliminación. A pesar de esto, las regulaciones no fueron abolidas, ya que, según argumentaron los parlamentarios, estas servían de base para justificar el sistema militar impuesto a la población palestina que residía en Israel⁴⁰.

El comienzo de la guerra de los Seis Días en junio de 1967 paraliza cualquier tipo de avance en este sentido e Israel, tras ganar la guerra, se anexiona el territorio hasta ahora controlado por Jordania⁴¹. Una de las primeras medidas es “congelar” la situación legal en el territorio recientemente ocupado y mantener las regulaciones de emergencia de 1945 emitidas por el Mandato Británico.

Este es un punto clave y controvertido a la hora de cuestionar la validez de dichas regulaciones, ya que uno de los argumentos en los que Israel se basa para justificar la aplicación de las mismas es que formaban parte del código legal vigente en el territorio en el momento de su ocupación. Este argumento es erróneo por dos motivos:

1. Sobre la base de lo establecido por la Ley de Defensa Jordana promulgada en 1935, que hace extensible su legislación a cualquier territorio en el que su ejército se halle presente, Jordania mantiene el control sobre el territorio que hoy se conoce como Cisjordania, hasta su derrota frente a Israel en la guerra de Junio de 1967. Esto es, desde el fin del mandato británico hasta el comienzo de la ocupación militar israelí.

Durante el mandato jordano en Palestina, el rey de Jordania revoca todas aquellas leyes y regulaciones que contradigan aquellas emitidas por su gobierno, incluyendo la Regulación de Defensa (Emergencia) emitida por el mandato británico en 1945. Ambas regulaciones de emergencia compartían gran parte del articulado, pero diferían en cuestiones fundamentales, como el derecho a apelación o la jurisdicción de los tribunales locales. Estas contradicciones son

³⁹ Roadstrum Moffet, M. *Perpetual Emergency: a legal analysis of the British Defence Regulations, 1945 in the occupied territories*, Al Haq. 1989, p. 22.

Disponible online <http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/perpetual-emergency-a-legal-analysis-of-israel-s-use-of-the-british-defense-emergency-regulations-1945-in-the-occupied-territories> [Consultado 22 mayo 2016]

⁴⁰ *idem*

⁴¹ Israel se anexiona en la Guerra de los Seis Días el territorio que hoy corresponde a Cisjordania (gobernado por Jordania en esos momentos) la Franja de la Gaza y península del Sinaí (bajo control egipcio) y los Altos del Golán (Siria).

motivos suficientes para que prevalezca la regulación jordana sobre aquella emitida por el mandato británico⁴².

2. El 12 de mayo de 1948, el rey de Inglaterra promulga la Orden de Anulación, por la que anula todos los poderes del mandato sobre Palestina⁴³. Dado que la Regulación de Emergencia emitida por el mandato en 1945, basa su validez y aplicabilidad en el poder que le otorga este, una vez que deje de tener poder, todas las órdenes, promulgaciones y regulaciones derivadas dejarían de tenerlo. Si esto es así, la Regulación de Emergencia habría quedado anulada por la Orden de Anulación de 1948 y, al contrario de lo que argumenta Israel, ya no forma parte en consecuencia del sistema legal local⁴⁴.

Israel utiliza esta Regulación de Emergencia para servir a los intereses de la ocupación y sus ansias de expansión colonial. La dilatada aplicación de esta regulación, que limita seriamente derechos y libertades de la población palestina, hace poner en cuestión que la mejora de la seguridad sea el motivo último de la misma.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (en adelante ACRI) presentó en 1999 una petición⁴⁵ al Tribunal Superior de Justicia de Israel en contra de la Regulación de Emergencia, desafiando la constitucionalidad de un estado de emergencia permanente y solicitando su anulación⁴⁶. Su argumento se basaba en que la renovación constante de las Regulaciones de Emergencia es un aspecto contrario a la propia legislación interna israelí, así como al Derecho internacional. La situación de la seguridad en Israel no era

⁴² Roadstrum Moffet, M. *Perpetual Emergency: a legal analysis of the British Defence Regulations, 1945 in the occupied territories*, Al Haq. 1989, p. 9-10. Disponible online <http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/perpetual-emergency-a-legal-analysis-of-israel-s-use-of-the-british-defense-emergency-regulations-1945-in-the-occupied-territories> [Consultado 22 mayo 2016]

⁴³ *idem*, Anexo I

⁴⁴ Roadstrum Moffet, M. *Perpetual Emergency: a legal analysis of the British Defence Regulations, 1945 in the occupied territories*, Al Haq. 1989, p. 11-16. Disponible online <http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/perpetual-emergency-a-legal-analysis-of-israel-s-use-of-the-british-defense-emergency-regulations-1945-in-the-occupied-territories> [Consultado 22 mayo 2016]

⁴⁵ HCJ 3091/99, *The Association for Civil Rights in Israel v. The Knesset and the Government of Israel*, judgment, 8 May 2012, separate opinion of Chief Justice (Retired) D. Beinisch. Resumen en inglés disponible en <http://en.idi.org.il/analysis/terrorism-and-democracy/issue-no-41/hcj-rejects-petition-to-end-israels-state-of-emergency/> [Consultado 22 mayo 2016]

⁴⁶ Reynolds, J. "Intenet to regularise: The Israeli Supreme Court and the Normalisation of Emergency" *Adalah's newsletter*, Vol. 104. 2013, p.4-6

una situación excepcional. Por tanto, la aplicación de una norma como la Regulación de Emergencia, que coarta de manera severa derechos fundamentales de gran parte de la población, no está justificada. Añaden que esta practica se contradice con una concepción liberal del Estado de derecho y de la separación de poderes.

El Tribunal Supremo israelí, presidido entonces por Aaron Barak, desestimó⁴⁷ la petición basándose en la situación excepcional de aquel año 2000: el comienzo de la segunda intifada. En 2003, ACRI vuelve a presentar otra petición algo modificada, solicitando que las medidas de recorte de derechos en pos de la seguridad fueran proporcionadas y mínimas.

La respuesta del Gobierno a esta petición de ACRI que incluía ahora a la *Knesset* como parte demandada, consistió en alegar que suspender las regulaciones de emergencia crearían un vacío legal que recortaría las competencias de las autoridades a la hora de determinar qué medidas eran necesarias para garantizar la seguridad nacional. Asimismo, el Gobierno reconoció que era necesario transformar dichas regulaciones y adaptarlas al contexto. Las autoridades israelíes declararon que, a pesar de que el estado de emergencia siguiese existiendo, el mismo estado de emergencia “legal” debería ir poco a poco eliminándose.⁴⁸

ACRI respondió nuevamente en 2006 afirmando que la situación de Israel no podía definirse como la de un estado de emergencia. El Tribunal Supremo decidió darle un margen de tiempo al ejecutivo para que modificase parte de las legislaciones de emergencia. En 2011 el Tribunal alegó que el Gobierno había tomado medidas en esta dirección, que había modificado partes de las regulaciones y que aún se estaba trabajando en ello. Por todo esto, en 2012 y después de doce años de audiencias, el Tribunal Supremo sentenció que la petición debía ser desestimada, que Israel se encontraba aún en el día de hoy en una situación de amenaza tanto interna como externa y que, por tanto, el estado de emergencia y sus regulaciones están justificados.

⁴⁷ *ibidem*

⁴⁸ *ibidem*

Según la opinión del magistrado Rubinstein la situación de Israel es un tanto excepcional “Israel es un país normal que no es normal”.⁴⁹ Es un país normal, según el magistrado, porque es una democracia en la que se salvaguardan los derechos fundamentales de su población, pero, al tiempo, no es un país normal por las amenazas a las que está constantemente sometido. Siendo esto así, la adopción de ciertas medidas excepcionales sería necesaria para proteger a su población y garantizar la seguridad nacional. Reitera de este modo una postura habitual en el Tribunal Supremo Israelí, que es la no interferencia de esta corte en asuntos relacionados con la seguridad del Estado. La sentencia contó con un voto particular, el del magistrado- Beinisch, quien afirmó que el estado de emergencia declarado por ley en Israel era el resultado de una visión política.⁵⁰ Es decir, que Israel estaría utilizando el pretexto de la seguridad para justificar o legitimar una serie de acciones con fines políticos.

Aaron Barak, antiguo presidente del Tribunal Supremo, afirmó en relación al uso de torturas en los interrogatorios que el Tribunal no podía posicionarse sobre las formas de llevar a cabo un combate. Barak ha defendido que el Tribunal no debe nunca reemplazar ni cuestionar las decisiones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, ya que el rol del Tribunal no es el de ser expertos en seguridad, si no el de legitimar las decisiones de quiénes si lo son.⁵¹

El uso político del concepto de la seguridad por parte de las autoridades israelíes también es señalado por Raja Shehadeh -abogado palestino- quien afirma que las actividades que el Ejército de Israel lleva a cabo en el territorio ocupado de Palestina bajo el pretexto de la seguridad tienen detrás los siguientes objetivos políticos⁵²:

- El control de los residentes locales palestinos/as por el ejército de Israel.
- La prevención de acciones hostiles contra el Estado de Israel.
- Prevención de un levantamiento del liderazgo político árabe hostil a Israel.

⁴⁹ ídem p. 1

⁵⁰ *ibidem*

⁵¹ Barak, A. *Israeli Supreme Court, Judgements of the Israeli Supreme Court: fighting terrorism within the Law*, The Supreme Court of Israel, Tel Aviv (s.f.), p. 20

⁵² Shehadeh, R. *Occupier's Law. Israel and the West bank*, Institute for Palestine Studies, Washington DC, Revised Edition, 1988, p. 41-47

- Prevención de contactos con la Organización por la Liberación de Palestina y control de sus actividades.
- Implementación de las políticas de colonización del Gobierno de Israel, supresión de cualquier resistencia de la población palestina árabe en contra de las mismas y protección de los colonos judíos.

El estado de emergencia permanente permite que prácticas tales como la detención administrativa, la demolición punitiva de casas o la confiscación de tierras de cultivo por motivos de “seguridad”. Estas prácticas limitan severamente los derechos fundamentales de la población palestina, siendo además abusivas y desproporcionadas. En los capítulos siguientes expondré casos concretos de cómo el sistema legal y los órganos de justicia, incluyendo al Tribunal Supremo de Israel, legitiman dichas prácticas.

2 MARCOS LEGALES EN ISRAEL

El sistema legal israelí forma parte de lo que podemos llamar la cultura legal occidental. El respeto al *rule of law* sería la ideología que inspira la forma de gobierno, con un enfoque secular⁵³, liberal y racional⁵⁴. Presenta un sistema mixto, influido tanto por la doctrina y enfoque europeo continental como por los principios del *common law* inglés. Estos últimos son aplicados cuando existía alguna laguna en el desarrollo de la legislación local. Las fuentes del derecho que inspiran al sistema legal israelí son la legislación, el estudio de casos, uso de analogías, la herencia de Israel (entendida como la tradición judía) los usos y costumbres y la ley judía⁵⁵.

El sistema político es una combinación del modelo europeo continental de democracia parlamentaria con los sistemas presidencialistas norteamericanos⁵⁶. El parlamento, *Knesset*, se compone de una sola cámara, por lo general muy fragmentada ya que todas las listas que superen un 2%⁵⁷ de los votos obtienen un espacio en la *Knesset*. Esto hace que los partidos mayoritarios casi siempre dependan de otros más pequeños para tomar cualquier decisión. La *Knesset* no sólo aprueba la legislación, sino que también sirve como Asamblea Constituyente⁵⁸, además de elaborar y aprobar las Leyes Básicas, que serían el equivalente a una constitución no codificada. Este es precisamente uno de los aspectos en dónde mejor se aprecia la influencia inglesa del *common law*.

El sistema judicial tiene un papel primordial en Israel debido a la ausencia de Constitución y a la influencia del *common law* inglés antes mencionada. Se divide en dos grandes categorías⁵⁹ que se establecen en función de la jurisdicción que tiene cada una de

⁵³ El aspecto secular de la cultura legal israelí es uno de los más controvertidos, por lo que lo retomaré para analizarlo de manera separada más adelante.

⁵⁴ Barak, A. "Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary." *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁵⁵ Tamir, M and Snyder, M "Update: a guide to legal reserach in Israel." Hauser Global Law School Program. 2011. Disponible online <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Israel.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁵⁶ *idem.*

⁵⁷ *idem.*

⁵⁸ *idem.*

⁵⁹ Schmidh, Y. *Foundation of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories*, 2001. Tesis doctoral, p. 108-110. Disponible online http://www.academia.edu/1967765/Foundations_of_civil_and_political_rights_in_Israel_and_the_occupied_territories [Consultado 22 mayo de 2016]

ellas. La primera categoría la conforman los tribunales generales, que tendrían jurisdicción generalizada sobre cualquier los asuntos y por otro estarían las autoridades investidas con determinados poderes judiciales, que cuentan con una jurisdicción limitada bien en cuanto al territorio o a los sujetos a los que se aplica la ley.

En este capítulo me voy a centrar en la definición del sistema judicial y de cómo éste es utilizado para discriminar de manera sistemática a la población palestina que reside dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel y para reprimir y acallar a las voces críticas con estas políticas y prácticas discriminatorias.

2.1 Desarrollo del sistema político israelí: desde la creación del Estado de Israel hasta la actualidad

Para enmarcar el sistema legal vigente en Israel, voy a hacer primero un recorrido histórico, detallando cómo se han ido formando y cómo han evolucionando los distintos sistemas para adaptarse a las distintas etapas y necesidades del Estado de Israel desde su creación hasta la actualidad.

Cuando en 1948 Israel declara su independencia tiene que construir todo un nuevo sistema de gobierno para el recién creado país. Para ello, y con el fin de no crear vacíos legales, decide mantener los sistemas legales existentes hasta la fecha: el británico y el otomano⁶⁰. A partir de estos dos sistemas pre-existentes desarrollará un nuevo modelo, que continúa en desarrollo y evolución hasta la fecha. A continuación haré un breve recorrido por las distintas etapas, siguiendo un modelo sugerido por Aaron Barak (ex presidente del Tribunal Supremo de Israel) resaltando las leyes que resultaron más significativas, bien por el impacto que tuvieron en desarrollo del sistema o por el impacto en el modelo actual.

⁶⁰ Barak, A. "Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary." *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

Barak establece tres periodos en el desarrollo del sistema legal israelí: los años 50, de los 60 a los 90 y de los 90 hasta la actualidad⁶¹. Veamos a continuación cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos.

2.1.1 Los años 50

Durante los años 50 se construyeron los cimientos del Estado de Israel. Barak lo define como un “periodo de estabilización”. Tras la llamada guerra de independencia, que conllevó la expulsión de más de 700,000 personas palestinas de sus hogares, el crecimiento demográfico de la población judía era una de las principales preocupaciones del Gobierno de Ben Gurión por lo que una de las primeras Leyes Básicas que se redacta es la conocida como Ley del Retorno (1950)⁶² que reconoce el derecho a cualquier persona judía y a su familia de optar a la ciudadanía israelí. Más adelante volveremos sobre los problemas que plantea esta controvertida ley que permanece aún vigente a día de hoy.

La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 181⁶³ establece la creación de un Consejo Provisional de Gobierno⁶⁴. Este Consejo, en 1948, aprobó en Tel Aviv la Declaración de Establecimiento del Estado de Israel⁶⁵ (conocida como Declaración de Independencia).

La Declaración de Independencia se divide en cuatro secciones: 1) la que describe la historia del pueblo judío y su lucha por el reconocimiento internacional de sus derechos; 2) la que proclama la creación del Estado (más operativa); 3) una declaración

⁶¹ *idem*.

⁶² Law of Return 5710 – 1950. Disponible online <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/lawofreturn.htm> [Consultado el 21 de may. de 16]

⁶³ NNUU doc. “Resolución 181 aprobada sobre la base de, informe de la comisión ad hoc encargada de estudiar la cuestión de Palestina.” 1947. Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible online [https://www.uclm.es/profesorado/affernandez/ARCHIVOS/JUEGOS_DE_ROL/palestina/resolucionessamableageneral/Asamblea%20General%20resoluci%C3%B3n%20181%20\(II\).pdf](https://www.uclm.es/profesorado/affernandez/ARCHIVOS/JUEGOS_DE_ROL/palestina/resolucionessamableageneral/Asamblea%20General%20resoluci%C3%B3n%20181%20(II).pdf) [Consultado el 21 de may. de 16]

⁶⁴ *idem*, punto B.4. Se ordena la creación de un Consejo similar en Palestina, estando ambos supeditados a la Comisión compuesta por los representantes de cinco Estados Miembros de NNUU, elegidos por la Asamblea General (punto B.1 de la misma Resolución 181)

⁶⁵ State of Israel “Declaration of the Establishment of the State of Israel”. 1948. Disponible online <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israel.aspx> [Consultado el 21 de may. de 16]

de principios que servirán de guía para el futuro estado y 4) una llamada a las NNUU, los estados árabes y al pueblo judío⁶⁶.

La Declaración de Independencia constituye una fuente de autoridad para el nuevo Estado⁶⁷ y las secciones primera y terceras han sido utilizadas por el Tribunal Supremo de Israel con fines de interpretación normativa. Aún así, es importante señalar que no es ni una ley ni un documento legal ordinario⁶⁸.

El Tribunal Supremo de Israel se ha pronunciado en varias ocasiones sobre validez de la Declaración de Independencia como norma jurídica, la primer de ellas en 1948 en el caso *Zvi Zeev v. Gubernik*⁶⁹. En la sentencia de caso el Tribunal se refiere a la Declaración afirmando que ésta no representaba ningún elemento de validez constitucional, sino que era una declaración de contenido político que expresaba la visión de la gente, su fe y sus valores⁷⁰.

Algunos años después, en 1953, el Tribunal cambiará de opinión y considerará la Declaración como un instrumento de interpretación en el caso *Kol Ha'am Company Limited v. Ministry of Interior* (1953)⁷¹, marcando una nueva línea interpretativa con respecto al valor de la Declaración de Independencia que se mantiene hasta la fecha⁷².

⁶⁶ State of Israel, "The Proclamation of Independence". 1948. Disponible online https://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/megilat_eng.htm [Consultado el 21 de may. de 16]

⁶⁷ Rosenne, S. "Estructura del sistema jurídico y constitucional del Estado de Israel." Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. (s.f) p. 123. Disponible online <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/27/dtr/dtr6.pdf> [Consultado el 21 de may. de 16]

⁶⁸ State of Israel, "The Proclamation of Independence". 1948. Disponible online https://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/megilat_eng.htm [Consultado el 21 de mayo de 16]

⁶⁹ *Zvi Zeev v. District Commissioner of the Urban Area of Tel Aviv*. En el caso en cuestión el Comisario de Distrito de Tel Aviv en funciones emitió una orden de confiscación sobre un apartamento de propiedad privada para que fuera utilizado por un oficial del Gobierno. La confiscación se hace sobre la base de la Regulación 48 (1) del la Regulación de Emergencia británica, de 1939. El dueño del apartamento presenta una queja ante la Corte de Distrito de Tel Aviv y Moshe Smoira, en nombre del Tribunal Supremo rechaza la petición en una sentencia muy formalista – esto es, sin centrarse en aspectos sustanciales de la misma – alegando que la Regulación de Emergencia seguía en vigor y que el apartamento debe ser entregado. Disponible online <http://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Zeev%20v.%20Acting%20District%20Commissioner%20of%20the%20Urban%20Area%20of%20Tel%20Aviv.pdf> [Consultado el 21 de may. de 2016]

⁷⁰ *idem*.

⁷¹ El caso también supuso un hito en el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión <https://www.article19.org/resources.php/resource/3307/en/israel>

⁷² State of Israel, "The Proclamation of Independence". 1948. Disponible online https://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/megilat_eng.htm [Consultado el 21 de mayo de 16]

Durante este periodo se promulgan también otra serie de medidas relacionadas con el funcionamiento de distintas instituciones, organismos y poderes públicos, siendo algunas de ellas la Ley Básica de la *Knesset* (1958)⁷³, la Ordenanza del Ejército de Israel⁷⁴ (1948) o la Ordenanza sobre Áreas de Jurisdicción y reparto de poderes⁷⁵ (1948).

Además, se aprobaron leyes que regulan el uso de las tierras estatales y la conocida como la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950⁷⁶, que servirá como base legal para la confiscación de tierras y propiedades de la población palestina. Según esta legislación, cualquier persona que resida en un "país hostil"⁷⁷ o en el área de la "Tierra de Israel"⁷⁸ que no esté bajo el control del Estado de Israel, y que posea una propiedad en el Estado, es considerada un propietario ausente y su propiedad podría ser transferida al Custodio de Propiedades Ausentes.

Esta ley sigue estando vigente hoy en día y representa uno de los ejemplos más claros de discriminación legal en Israel y Palestina, ya que no se aplica a aquellas personas de nacionalidad israelí aunque vivan en el territorio palestino ocupado, como ocurre con la población colona. Por ejemplo, un colono que haya decidido residir en los asentamientos ilegales del territorio palestino ocupado, es decir, en una "zona hostil" tal como lo define la propia legislación israelí, puede tener la titularidad de tierras, casas o de cualquier otra propiedad dentro de las fronteras de Israel, sin correr el riesgo de que estas propiedades sean confiscadas. Por el contrario, una persona palestina refugiada que se haya visto obligada a huir a Siria, por ejemplo, que tenga propiedades en Jaffa, porque

⁷³ Basic Law The Knesset, 1958. Disponible online <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/basiclawknesset.htm> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

⁷⁴ Defence army of Israel Ordinance, 1948. Disponible online <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/defencearmyordinance.htm> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

⁷⁵ Area of jurisdiction and powers Ordinance, 1948. Disponible online <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/areaofjurisdictionpowersord.htm> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

⁷⁶ Absentees Property Laws, 1950. Disponible online <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/absenteepropertylaw.htm> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

⁷⁷ Se consideran países hostiles: el Líbano, Egipto, Siria, Arabia Saudí, Cisjordania, Iraq o Yemen

⁷⁸ Alusión al concepto de "Eretz Israel", que delimita un territorio mucho más amplio que el contemplado por la delimitación de fronteras del Estado de Israel en base a la legislación internacional. En este caso, se refiere a todas las personas palestinas que fueron expulsadas de sus casas en el 1948 en la conocida como la *Naqba* (la catástrofe) y se vieron obligadas a desplazarse a las fronteras de Cisjordania, hoy bajo ocupación militar israelí desde la Guerra de los 6 Días del 1967.

fuese su tierra natal, será considerada como una “ausente” y podrá ver sus propiedades confiscadas en base a Ley de Propiedad de los Ausentes.

Recientemente el Tribunal Supremo de Israel ha decretado que la Ley también es aplicable en Jerusalén Este y ha reconocido lo peligrosa que puede resultar la aplicación literal de la ley, ya que podría conllevar a la expropiación de las propiedades de la población colona⁷⁹, aunque hasta la fecha sólo se ha aplicado a población de origen palestino.

2.1.2 Años 60 hasta los 90

Este segundo periodo se corresponde con un mayor desarrollo legislativo. Los cambios esbozados durante los años 50 comienzan a tomar forma y empieza a dibujarse el sistema actual. Se abolen casi todas las leyes otomanas y el proceso de codificación del Derecho privado sufriría un gran avance. Se promulgan más de veinte leyes que cubrieron casi todas las áreas del Derecho privado, exceptuando las áreas del Derecho de Familia (que sigue estando regido a día de hoy por códigos religiosos), Derecho Laboral y Comercial. Barak señala que, a pesar de este gran esfuerzo de codificación, el resultado carece de unicidad, estando orientado a proporcionar soluciones más prácticas que de carácter analítico. Lo que se buscaba con esta nueva codificación era romper finalmente el lazo formal con el *common law* inglés para comenzar a desarrollar el sistema de *common law* israelí⁸⁰.

Al mismo tiempo, se desarrollan ocho Leyes Básicas⁸¹, que sentarían las bases para los capítulos de una futura constitución, aunque hasta la fecha ésta no haya sido aún redactada. Las Leyes Básicas que se aprobaron durante estos años fueron:

- Ley Básica: Tierras de Israel (1960).

⁷⁹ Europa Press “El Supremo de Israel falla que la Ley de Propiedad de Ausentes es aplicable en Jerusalén Este” *Europa Press*, 2015. Disponible online <http://www.europapress.es/internacional/noticia-supremo-israel-falla-ley-propiedad-ausentes-aplicable-jerusalen-20150417074917.html> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

⁸⁰ Barak, A. “Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary.” *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁸¹ Textos completos disponibles online https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod1.htm [Consultado 22 mayo 2016]

- Ley Básica: Presidente del Estado (1964).
- Ley Básica: el Gobierno (1968).
- Ley Básica: la economía del Estado (1975).
- Ley Básica: Las Fuerzas de Defensa de Israel (1976).
- Ley Básica: Jerusalén (1980).
- Ley Básica: el poder judicial (1984).
- Ley Básica: el interventor del estado (1988).

En estas Leyes Básicas se define el funcionamiento del Estado y la organización de los poderes públicos, tal como veremos a continuación.

En cuanto a la forma de gobierno, está definida en la “Ley fundamental: el Gobierno”⁸² (1968): Israel se presenta como un modelo cuasi-presidencial. Cuenta con un parlamento, *Knesset*, de 120 asientos que se eligen de manera proporcional, a través del sistema de único distrito electoral para todo el país⁸³. El Primer Ministro no es elegido en la *Knesset*, sino que, al igual que en los modelos presidenciales, es elegido en las urnas, aunque la *Knesset* puede revocar su investidura a través del voto de no confianza de 61 o más miembros de la *Knesset*, proceso más típico de los sistemas parlamentarios⁸⁴.

El poder judicial queda regulado a través de la "Ley Básica: el poder judicial"⁸⁵ (1984) y se organiza sobre la base de diferentes instituciones que podrían agruparse en dos grandes categorías⁸⁶:

- a) Tribunales ordinarios de justicia, que disfrutan de una jurisdicción general y que cuentan con tres instancias, a saber: Tribunales de Primera Instancia, Tribunales

⁸² Basic Law: The Government (2001) Disponible online

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

⁸³ Barak, A. “Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary.” *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁸⁴ Tamir, M and Snyder, M “Update: a guide to legal reserach in Israel.” *Hauser Global Law School Program*. 2011. Disponible online <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Israel.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁸⁵ Basic Law: The Judiciary. Disponible online

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

⁸⁶ Schmidh, Y. *Foundation of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories*, 2001. Tesis doctoral, p. 108-110. Disponible online http://www.academia.edu/1967765/Foundations_of_civil_and_political_rights_in_Israel_and_the_occupi_ed_territories [Consultado 22 mayo de 2016]

de Distrito y Tribunal Supremo. Los dos primeros (primera instancia y de distrito) tienen jurisdicción en temas civiles y penales. El Tribunal Supremo funciona como última instancia de apelación para cualquier asunto. Además, el Tribunal Supremo es el único competente para todos los temas relacionados con Palestina y las acciones de Israel en el territorio ocupado.

- b) Tribunales y Autoridades Investidas con poderes judiciales, que serían los Tribunales Militares, los Religiosos y los Laborales. Esta segunda categoría tiene una jurisdicción más restringida, tanto en cuanto a los sujetos como las materias sobre los que tienen competencias.

Los Tribunales Religiosos lidian con cuestiones relativas a la persona, familia y sucesiones, (matrimonio, custodia de los hijos, herencia...etc.) Estos Tribunales a su vez se dividen en hasta nueve grupos en función de las diferentes comunidades religiosas oficialmente reconocidas en Israel, siendo estos: los Tribunales Rabínicos, los Musulmanes (Sharia), los Drusos y las instituciones jurídicas de las nueve comunidades Cristianas oficialmente reconocidas, así como aquellas de la comunidad Bahai residente en Israel⁸⁷.

En cuanto a los Tribunales Militares israelíes, nos encontramos nuevamente con dos tipos: los que se ocupan de aplicar la ley marcial en Israel a ciudadanos/as israelíes y aquellos que se establecen en el territorio palestino ocupado. Dada la especial relevancia de estos tribunales en el mantenimiento del sistema de ocupación, opresión y discriminación de la población palestina en el territorio ocupado, serán tratados dentro del capítulo siguiente en un apartado específico.

El nombramiento de los jueces se hace del mismo modo que en los sistemas basados en el *common law* inglés⁸⁸: de entre el cuerpo de abogados. Esta selección de jueces y magistrados se hace a través del nombramiento de los mismos por el Jefe del Estado aconsejado por un Comité de Nombramientos. El Comité está formado por nueve

⁸⁷ *idem.*

⁸⁸ Barak, A. "Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary." *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

miembros: dos ministros/as (nominados/as por el ejecutivo); dos miembros de la *Knesset* (nominados/as por la *Knesset*, uno de ellos debe ser de la coalición de Gobierno y otro de la oposición); dos abogados/as (nominados/as por el Colegio de Abogados de Israel); y tres jueces del Tribunal Supremo⁸⁹ (el Presidente exoficio y dos jueces elegidos por el resto de integrantes del Tribunal).

Dada la controversia que desató en el momento de su aprobación, cabe resaltar también este apartado la "Ley Básica Jerusalén, Capital de Israel"⁹⁰ (1980), que establece en su artículo 1 a Jerusalén como capital única e indivisible del Estado de Israel. Esta declaración unilateral es la culminación de un proceso de anexión *de facto*, condenado por la totalidad de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, socio tradicional de Israel. Desde que en 1967 Israel ocupase militarmente Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, el proceso de anexión de este último territorio ha ido *de facto* avanzando gradualmente a través de medidas concretas: la retirada de la Puerta de Mandelbaum, que funcionaba como un punto de cruce entre el Este y el Oeste de la ciudad de Jerusalén; la aprobación de legislación y regulaciones administrativas que extendían la jurisdicción del Ayuntamiento de Jerusalén Este al Oeste y la aplicación de la ley Israelí a la población palestina residente en Jerusalén Este⁹¹. La aprobación de la Ley Jerusalén, como es conocida la Ley Básica de 1980, otorgó una nueva dimensión legal a la situación de anexión de facto que había hasta el momento.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su Resolución 478, del 20 de Agosto de 1980, afirma que “la promulgación de la ley básica por Israel constituye una violación del derecho internacional y no afecta a la continua aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra”⁹² Afirma

⁸⁹ Basic Law: The Judiciary. Disponible online

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

⁹⁰ Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel. Disponible online

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

⁹¹ Halabi, U. “Israeli Laws and Judicial System as tools for accomplishing political objectives in Jerusalem. Main stages in consolidating Israeli control over Jerusalem contrary to International Law.” *The Civic Coalition for Defending Palestinian’s Rights in Jerusalem*. 2007, p. 5. Disponible online

http://civiccoalition-jerusalem.org/system/files/documents/israeli_laws_and_judicial_system_as_tools_for_accomplishing_political_objectives_in_jerusalem_06-2007.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

⁹² NNUU doc. “United Nations Security Council Resolution 478, of 20 August 1980.” par. 2 Disponible online

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/DDE590C6FF232007852560DF0065FDDB> [Consultado 22 mayo 2016]

que la aprobación de dicha Ley supone un obstáculo para el logro de una paz “completa, justa y duradera” en Oriente Medio y decide por estos motivos no reconocer la Ley Básica, ni el resto de medidas que se derivan de la misma, instando al resto de Estados Miembros a que acaten la decisión.

2.1.3 De los 90 a la actualidad

Durante este tercer periodo comienza una nueva fase de codificación centrada en la compilación de un nuevo Código Civil. Se decide que las Leyes Básicas deben actuar como la norma suprema del sistema jurídico israelí y que todas las leyes deben ser interpretadas de acuerdo a éstas. Barak define éste como el comienzo del proceso de constitucionalización del Estado de Israel⁹³.

Destaca asimismo durante este periodo la aprobación en la *Knesset* de las dos Leyes Básicas que constituyen la Declaración de Derechos en Israel:

- Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad⁹⁴ (1992).
- Ley Básica de Libertad de Ocupación⁹⁵ (1994).

Estas dos últimas Leyes Básicas recogen en su declaración de principios y objeto de la ley (Art. 1 y 1.A) el establecimiento de los valores de Israel como un Estado judío y democrático:

“Art. 1 Principios Básicos: Los derechos fundamentales en Israel se fundamentan sobre el reconocimiento del valor del ser humano, la santidad de la vida humana y el principio de que todas las personas son libres; estos derechos deben mantenerse en el espíritu de los principios establecidos en la Declaración del Establecimiento del Estado de Israel.

⁹³ Barak, A. “Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary.” *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

⁹⁴ Basic Law: Human Dignity and Liberty. Disponible online https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

⁹⁵ Basic Law: Freedom of Occupation. Disponible online https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic4_eng.htm [Consultado 22 mayo 2016]

Art.1ª Objeto: El objeto de esta Ley Básica es el de proteger la dignidad humana y libertad, para establecer en una Ley Básica los valores del Estado de Israel como un estado judío y democrático”.

Una puntualización que merece ser señalada es la tipificación del derecho a salir y a entrar en Israel, recogido en el Art. 6.b de la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad (1992):

“Art. 6. Entrar y Salir de Israel

a.- Todas las personas son libres de salir de Israel.

b.- Todos los nacionales israelíes tienen el derecho de entrar en Israel desde el extranjero.”

La manera de redactar este artículo excluye de manera directa a las personas que tienen la residencia permanente en Israel, pero que no son nacionales israelíes, como es el caso de la mayoría de la población palestina que vive en Jerusalén, dejando a este grupo en una situación de mayor vulnerabilidad. La denegación de entrada y revocación de permisos de residencia a la población palestina que vive en Israel es una de las prácticas más denunciadas por la población palestina de Jerusalén Este. Richard Falk, alertó en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio Palestino ocupado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que estas prácticas constituyen un proceso de limpieza étnica silencioso⁹⁶.

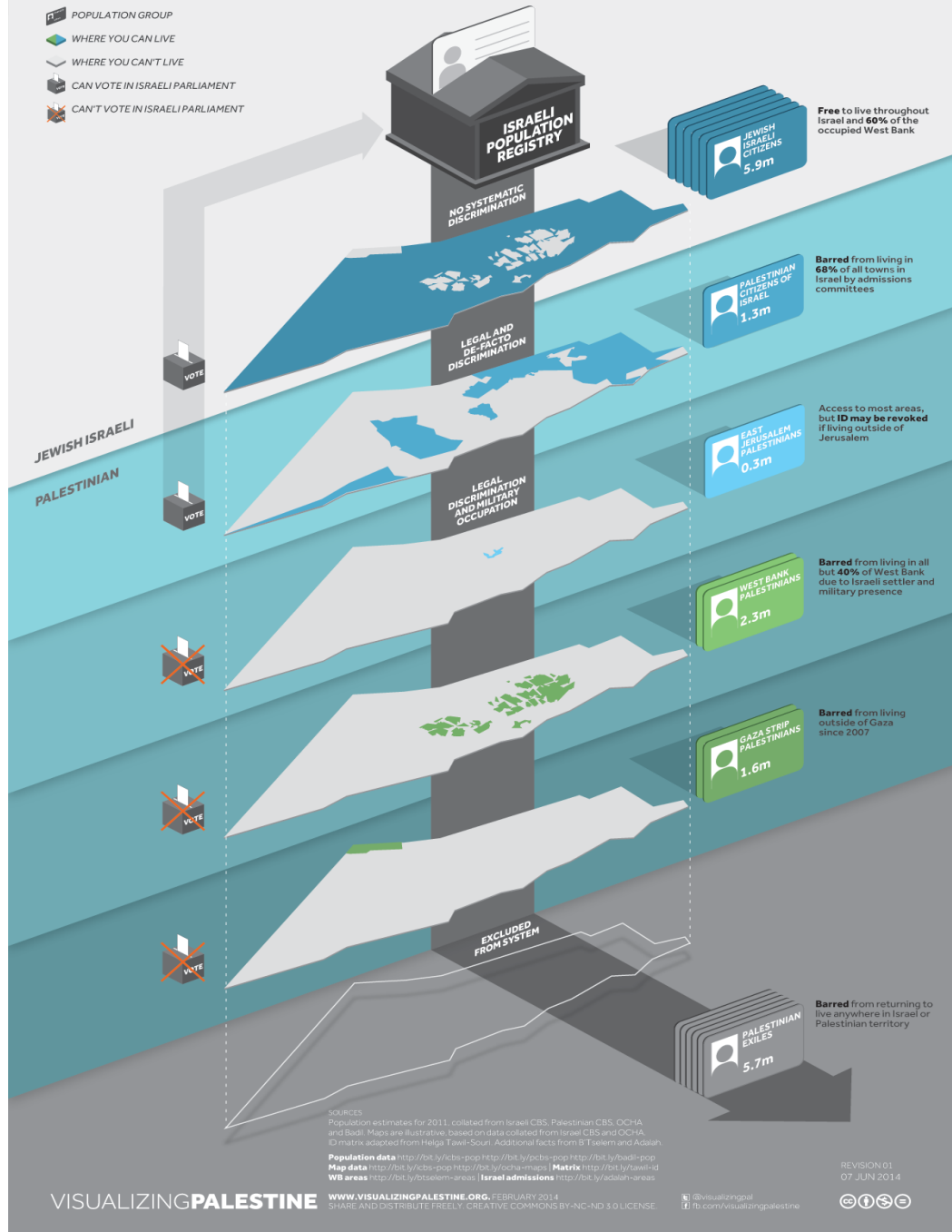
⁹⁶ NNUU doc A/HRC/25/67 “Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories” parr. 34

IDENTITY CRISIS THE ISRAELI ID SYSTEM

SINCE 1967, THE ISRAELI GOVERNMENT HAS BEEN THE DE-FACTO SOVEREIGN POWER IN CONTROL OF THE WHOLE OF HISTORIC PALESTINE, INCLUDING GAZA, THE WEST BANK AND ISRAEL.

ISRAELI AUTHORITIES CONTROL THE POPULATION REGISTRY AND ID SYSTEM, RESTRICTING WHERE PALESTINIANS CAN LIVE, THEIR ACCESS TO SERVICES AND THEIR PARTICIPATION IN THE POLITICAL SYSTEM.

- POPULATION GROUP
- WHERE YOU CAN LIVE
- WHERE YOU CAN'T LIVE
- CAN VOTE IN ISRAELI PARLIAMENT
- CAN'T VOTE IN ISRAELI PARLIAMENT



Fuente: Visualizing Palestine

2.2 La aplicación de la ley y sus diferencias. Discriminación formal y material

Pese a que dentro de las fronteras de Israel hay un único sistema legal⁹⁷, su aplicación muestra un tratamiento diferencial muy marcado con respecto a la población palestina que reside entre dichas fronteras, existiendo pautas discriminatorias tanto desde el punto de vista formal como material. En muchos casos esta discriminación se deriva de la concepción de Israel como un Estado judío. En el capítulo anterior presentaba la idea de cómo esta concepción del Estado y sus valores afectaban al desarrollo e implementación de la seguridad en el Estado de Israel. Ahora me centraré en cómo afecta esta concepción – de Israel como estado judío - en el ámbito legislativo, de protección de derechos y de protección del principio de igualdad ante la ley.

Ya que formalmente el Estado de Israel se define como un Estado judío y democrático, voy a comenzar presentando algunas reflexiones sobre la compatibilidad entre un estado religioso (judío en este caso) y un Estado democrático, señalando las limitaciones que existen para reconocer como democrático a un estado que lleva ocupando militarmente a un territorio durante 49 años y vulnerando de manera sistemática los derechos de la población que allí habita.

La relación del valor judío con el valor democrático del estado es tensa, incluso incompatible según algunas opiniones⁹⁸. Si definimos la democracia aludiendo sólo a su aspecto formal o procedimental y la entendemos como “un conjunto de reglas (primarias o básicas) que establecen quién tiene autorización para tomar decisiones colectivas y qué procedimientos se han de emplear”⁹⁹ y asumimos que estas reglas tienen que facilitar y garantizar la más amplia participación posible de la mayoría de las personas en las decisiones que afectan el conjunto de la sociedad¹⁰⁰, podemos afirmar que no hay una democracia formal plena en Israel.

⁹⁷ Se entiende que hay un único sistema legal civil que se aplica a la población para todos los asuntos, excepto para aquellos relacionados con temas de familia, que como señalaba anteriormente se tratan desde los tribunales religiosos.

⁹⁸ Dieckhoff, A. *The Invention of a Nation: Zionist Thought and the Making of Modern Israel*, Columbia University Press. 2003, p. 286

⁹⁹ Bobbio, N. *El futuro de la democracia*. Fondo de la Cultural Económica. S.A de C.V. México. 1986, p. 14. Disponible online [Consultado 22 mayo 2016]

<https://socialesenpdf.files.wordpress.com/2013/09/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-1986.pdf>

¹⁰⁰ Barboza, A. “Democracia y derechos humanos en la teoría política de Norberto Bobbio.” *Co-herencia No. 2 Vol.* 2005. p. 3.

Nos basta sólo con tomar el ejemplo de Jerusalén Este, en donde residen 300,200¹⁰¹ personas palestinas que por su condición de residentes permanentes (y no de ciudadanos/as) no tienen derecho al voto, no pueden elegir ni tampoco ser elegidos como representantes políticos. Constituyen el 36,8% de la población de Jerusalén, capital y ciudad más poblada de Israel.

Si adoptamos una definición sustancial de democracia y la entendemos como un concepto más general, que implica que todas las personas son moralmente iguales¹⁰², tendremos aún más dificultades para defender la idea de que un estado puede a su vez ser judío y democrático. Si dividimos a la población en subgrupos en función de la religión profesa cada individuo y le damos un trato preferencial a uno de esos grupos, tal como hemos visto que ocurre en Israel con el grupo de personas judías, no podemos hablar de un estado democrático porque no estamos reconociendo el principio de igualdad entre todas las personas. Al definir al Estado como judío estamos reconociendo una primacía de este valor sobre otros, creando una diferencia plausible de trato y de derechos, determinando quiénes pueden disfrutar de determinadas garantías en función de su condición religiosa y no de su condición como ciudadano o ciudadana de un territorio. Si además ligamos, como es el caso de Israel, la obtención de la ciudadanía a la profesión de la religión judía, nos resultará totalmente imposible defender la tesis de que un Estado puede ser judío y democrático en los términos planteados.

Barak considera que el Estado de Israel como estado judío y democrático se define por dos características¹⁰³. La primera se corresponde con la razón de ser del Estado de Israel: una solución al problema judío, un estado al que todo judío tenga el derecho de estar. La segunda de estas características se refleja en el patrimonio judío de Israel, no tan relacionado con asuntos de fe si no con cuestiones culturales, de valores y costumbres

¹⁰¹ Association for Civil Rights in Israel, "East Jerusalem 2015: Facts and Figures" 2015. Disponible online <http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁰² Entrevista a Roberto Gargarella por Esteban Rodríguez. "No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja." Disponible online http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/No_hay_derecho_sin_protesta_Entrevista_a_Roberto_Gargarella.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁰³ Barak, A. "Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary." *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1. Disponible online <http://www.ejcl.org/61/art61-1.html> [Consultado 22 mayo 2016]

judías. Barak reconoce que existe una discriminación formal hacia las personas judías en cuanto al derecho a migrar a Israel. La Ley de Retorno, aprobada el 5 de Julio del 1950 reconoce este derecho en su Artículo 1 que “Toda persona judía tiene el derecho de venir a este país como *oleh*¹⁰⁴”. Además, a en 1970 se reformó la Ley extendiendo el derecho a migrar a hijos, nietos y cónyuges de una persona judía. Barak, a pesar de reconocer esta discriminación, afirma que una vez dentro de Israel todas las personas disfrutan de los mismos derechos.

Esta tesis sin embargo no se corresponde con la realidad que vive día a día la población palestina de Israel. Adalah¹⁰⁵, una organización palestina con sede en Haifa, recoge en su base de datos¹⁰⁶ más de 50 leyes en vigor que discriminan a la población palestina, más otras 18 propuestas de ley aún no aprobadas por la *Knesset*. Estas leyes limitan los derechos tanto civiles y políticos como económicos sociales y culturales de la población palestina. Cito algunos ejemplos de estas iniciativas a continuación.

2.2.1 Derechos económicos, sociales y culturales

Éstas son algunas de las leyes vigentes en el Estado de Israel que discriminan a la población palestina en el ámbito de los Derechos económicos, sociales y culturales.

- *Contributors to the State Bill – 2013* (Ley de Contribuyentes al Estado).

Esta ley otorga privilegios a aquellas personas que contribuyan de manera activa al desarrollo del Estado de Israel, por ejemplo, a través de su participación en el ejército. Las personas de origen palestino no suelen enrolarse en el ejército por motivos históricos y políticos, por lo que quedarían discriminadas de manera indirecta por esta ley. Los beneficios incluyen mejores salarios, ventajas a la hora de acceder a un empleo o prioridad en alojamiento para estudiantes, becas, etc. La ley establece que esto no debe ser considerado como un acto discriminatorio, ya que la discriminación estaría prohibida por ley, si no que se trata sólo de un “trato preferencial”.

¹⁰⁴ Judío que inmigra a Israel

¹⁰⁵ Adalah, The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel www.adalah.org

¹⁰⁶ Se puede encontrar una sistematización de las leyes discriminatorias en la base de datos de la ONG Palestina Adalah.

Disponible online <http://www.adalah.org/en/law/index> [Consultado el 21 de mayo de 2016]

- *Child Vaccinations and Child Allowances - Economic Efficiency Law - 2009* (Ley de vacunas y ayudas a la infancia).

Esta ley establece que aquellos menores que no sean vacunados de acuerdo al plan recomendado por el Ministerio de Salud no tendrán derecho a recibir beneficios sociales o ayudas. Esta medida discrimina de manera indirecta a la población beduina, que tiene un acceso prácticamente nulo al sistema de salud nacional.

- *National Priority Areas - The Economic Efficiency Law - Legislative Amendments for Implementing the Economic Plan for 2009-2010* (Ley de áreas de prioridad nacional)

Esta ley extiende las competencias gubernamentales para declarar a determinadas áreas como zonas prioritarias y asignar en consecuencia una mayor distribución de recursos estatales. La medida contradice una sentencia del Tribunal Supremo de Israel del año 2006, según la cual declaraba inconstitucional la decisión del Gobierno de señalar como áreas de prioridad nacional en temas educativos a 554 ciudades judías, frente a tan sólo 4 pueblos de mayoría palestina¹⁰⁷ en la misma categoría.

2.2.2 Derechos civiles y políticos

Aquí señalo algunas de las leyes discriminatorias en relación a los derechos civiles y políticos de la población palestina.

- *"Nakba Law" - Amendment No. 40 to the Budgets Foundations Law 2011* (Ley de la *Naqba*).

Esta ley autoriza al Estado a recortar los fondos gubernamentales a aquellas organizaciones que lleven a cabo actividades que contradigan o nieguen la existencia del Israel como un Estado judío y democrático o que conmemoren el día de la creación del Estado de Israel (15 de Mayo) como un día de luto. La población palestina conmemora el 15 de Mayo la *Naqba* (el desastre o la catástrofe en árabe) fecha de inicio del mayor éxodo forzado de población palestina de su historia, creando una nueva población de más 700,000 personas refugiadas que siguen a día de hoy, sin poder regresar a sus hogares.

¹⁰⁷ Adalah. "In Landmark Decision, Supreme Court Cancels Long Standing Governmental Socio-Economic Plan as it Discriminates against Arab Citizens of Israel" 2006. Disponible online <http://www.adalah.org/en/content/view/6496> [Consultado el 22 de mayo 2016]

- *"Pardon Law" or "Amnesty Law" - Termination of Proceedings and Deletion of Records in the Disengagement Plan Law, 2010* (Ley de Perdón o Amnistía).

Esta ley absuelve de cualquier sanción legal a todas aquellas personas que fueron condenadas por su oposición al Plan de Retirada de Gaza¹⁰⁸ en el año 2005, siempre y cuando no hubieran recibido una pena de prisión. Esta ley establece un proceso legal separado para aquellas personas que se manifestaron para mostrar su oposición al Plan de Retirada frente a todas aquellas otras que se manifiestan por cualquier otro motivo, constituyendo por tanto un acto de discriminación basado en la ideología política del sujeto en cuestión. Este caso es especialmente relevante dado el alto grado de represión que sufre la población palestina en el ejercicio del derecho a la protesta dentro de las fronteras de Israel, como veremos con más detalle en el siguiente epígrafe.

2.3 Derechos silenciados: Libertad de expresión y derecho a la protesta de la población palestina que reside en Israel.

Gargarella afirma que el derecho a la protesta podría ser llamado como el “primer derecho”¹⁰⁹. Este autor defiende que las sociedades democráticas se definen más por el disenso que por el consenso. En los sistemas democráticos la sociedad delega en el gobierno la toma de decisiones sobre muchos de los aspectos más importantes (uso de la fuerza, reparto presupuestario...etc.) Si no se puede disentir, si no podemos protestar por aquello que no nos gusta o con lo que no estamos conformes, no podemos hablar de un sistema democrático.

¹⁰⁸ Decisión del Gobierno de Israel de retirar sus efectivos de la Franja de Gaza, así como los 17 asentamientos que se encontraban en la misma. Para más información sobre sus consecuencias ver Abu Tarbush, J (2005) *El alcance israelí del repliegue de la Franja de Gaza*. Pensamiento Crítico. Disponible online <http://www.pensamientocritico.org/josabua1105.htm> [Consultado el 21 de mayo de 2016] Acceso al plan oficial de retirada publicado por el Gobierno de Israel online en http://www.mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/disengagement_sp.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁰⁹ Entrevista a Roberto Gargarella por Esteban Rodríguez. No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja. Disponible online http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/No_hay_derecho_sin_protesta_Entrevista_a_Roberto_Gargarella.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

Israel ha ratificado los principales instrumentos internacionales que regulan y protegen el derecho a la protesta, incluido el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos¹¹⁰ que recoge este derecho en su artículo 21. Igualmente, el mismo instrumento afirma en el artículo 4 que este derecho no es absoluto y que puede estar restringido en determinadas circunstancias, como por ejemplo, en un estado de emergencia. Tal como se presentó en el capítulo 1 de este trabajo, Israel lleva bajo un estado de emergencia desde su constitución como Estado; hecho cuestionado e incluso denunciado por sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y por el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la revisión periódica de Israel ante el comité en el 2003¹¹¹. Como ya se explica en ese capítulo, este estado de emergencia permanente se utiliza de manera recurrente para recortar derechos y libertades; entre ellos, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

A pesar de las muchas recomendaciones de varios comités de NNUU y otros organismos¹¹², el derecho a la protesta o el derecho a la libertad de expresión no está protegido específicamente por ninguna de las Leyes Básicas, al igual que tampoco lo está el principio de igualdad¹¹³. En este caso ha sido el Tribunal Supremo el encargado de proteger estos derechos fundamentales para todos los residentes de Israel.

El caso más significativo en cuanto a libertad de expresión se refiere fue el de *Sa'ar versus Minister of Interior and Police (1980)*. En la sentencia del caso Aaron Barak, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Israel, reconoce la libertad de asociación como un derecho fundamental en el marco legal israelí.

¹¹⁰ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible online

<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx> [Consultado 22 mayo 2016]

¹¹¹ NNUU doc. CCPR/CO/78/ISR “Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant: Concluding observations of the Human Rights Committee, 78th sesión”. 2003, par. 12. Ver también NNUU doc. CCPR/C/ISR/CO/3 “Human Rights Committee, 99th Session” 2003 par. 7.

¹¹² Euro-Mediterranean Human Rights Network. “Regional Study. The right to freedom of assembly in the Euro-Mediterranean region – Part I: Legislation Review”. Published by Euro-Mediterranean Human Rights Network. 2013. Disponible online

http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/03/FOA2013_EN_FULL-REPORT_WEB_26NOV2013.pdf. [Consultado 22 mayo 2016]

¹¹³ En Enero del 2016 MK Jamal Zahalka, en nombre la coalición de partidos árabes de la Knesset, presentó una propuesta para enmendar la Ley Básica de Dignidad y Libertad Humana. La enmienda pretendía incluir el principio de igualdad y de no discriminación, declarando al país como un estado de toda su ciudadanía. La propuesta fue rechazada en el voto preliminar por casi todos los partidos que conforman la Knesset, a excepción de la Coalición de partidos árabes, (Joint List), Meretz y la Unión Sionista, que votaron a favor.

“Al igual que con otras libertades, aquí debe lograrse un equilibrio entre la voluntad de el individuo - y de los individuos - a expresar sus opiniones por medio de reunión y manifestación, la voluntad del individuo para proteger su propio bienestar y el de su propiedad, y la voluntad del público para proteger el orden público y la seguridad. Sin orden no hay libertad. La libertad de reunión no significa el abandono de todo el orden público, y la libertad de manifestación no significa la libertad de disturbios”¹¹⁴

Desde el punto de vista procedimental, hay dos leyes que regulan la organización de manifestaciones o asambleas en Israel: la *Police Ordinance, 1971* (Ordenanza de Policía) y el *Penal Code, 1977* (Código Penal)¹¹⁵.

Dichos instrumentos establecen que no es necesario solicitar un permiso y/o notificar una convocatoria, excepto si: 1) se espera que participen más de 50 personas, 2) es una manifestación al aire libre o 3) cuando incluye una marcha y/o un discurso político. Si la manifestación es en la *Knesset*, el permiso será siempre requerido. Asimismo, en base al artículo 153 del Código Penal, las manifestaciones podrán ser dispersadas si: 1) no cuentan con el permiso requerido, 2) las condiciones establecidas por las autoridades del orden son ignoradas, 3) la manifestación supone una amenaza para el orden público o 4) los manifestantes son violentos y se convierte en una amenaza real para la seguridad pública¹¹⁶.

Cualquier persona que continúe participando en una manifestación cuando ésta haya sido dispersada puede ser condenada hasta a 5 años de prisión (Artículo 155 del Código Penal). El uso de la violencia también está regulado y aceptado en determinadas circunstancias, tales como cuando haya resistencia durante el arresto, la violencia se use para prevenir un crimen o sea utilizada para dispersar una manifestación que pueda considerarse una amenaza para el orden público¹¹⁷.

¹¹⁴ Referencia tomada de Euro-Mediterranean Human Rights Network. “Regional Study. The right to freedom of assembly in the Euro-Mediterranean region – Part I: Legislation Review”. Published by Euro-Mediterranean Human Rights Network. 2013. Disponible online http://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/03/FOA2013_EN_FULL-REPORT_WEB_26NOV2013.pdf. [Consultado 22 mayo 2016]

¹¹⁵ *idem*

¹¹⁶ *idem*

¹¹⁷ *idem*

En el verano de 2014, Israel llevó a cabo en la Franja de Gaza una de las ofensivas militares más devastadoras de sus 47 años de ocupación, la conocida como operación Margen Protector. Durante los 51 días que duró la operación sobre la Franja 2,131 personas murieron como consecuencia de los bombardeos. 1,473 de estas personas eran civiles, 501 menores y 257 mujeres¹¹⁸. Además, según datos de la Oficina de Coordinación para asuntos humanitarios de Naciones Unidas, se destruyeron más de 18,000 hogares, hubo más de 100,000 personas desplazadas internamente y casi medio millón de personas fueron privadas de acceso al agua por el daño a las estructuras municipales.

Ante esta situación, la población palestina tanto en Cisjordania como la residente en Israel y Jerusalén Este salieron a la calle casi a diario para protestar contra la masacre que el ejército de Israel estaba cometiendo contra la población civil de Gaza. La respuesta de las autoridades israelíes frente a la participación de población palestina en estas manifestaciones fue de “tolerancia cero”¹¹⁹: unas 1,500 personas fueron arrestadas en Israel durante los 51 días que duraron los bombardeos en Gaza, casi todas ellas de origen palestino.

En muchos casos, las manifestaciones fueron dispersadas de manera ilegítima alegando que no tenían los permisos necesarios para llevarse a cabo y las personas que allí se manifestaban fueron arrestadas consecuentemente.¹²⁰ También se llevaron a cabo arrestos ilegales, deteniendo a activistas el día antes de la manifestación o de camino hacia las mismas¹²¹. La organización Adalah denuncia el uso de “arrestos preventivos”, prohibido por el Código Penal israelí en sus artículos 23 y 67 que estipula que un arresto

¹¹⁸ NNUU doc. “Occupied Palestinian territory: Gaza emergency. Situation report (as of September 2014)” OCHA. 2014. Disponible online.

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_04_09_2014.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

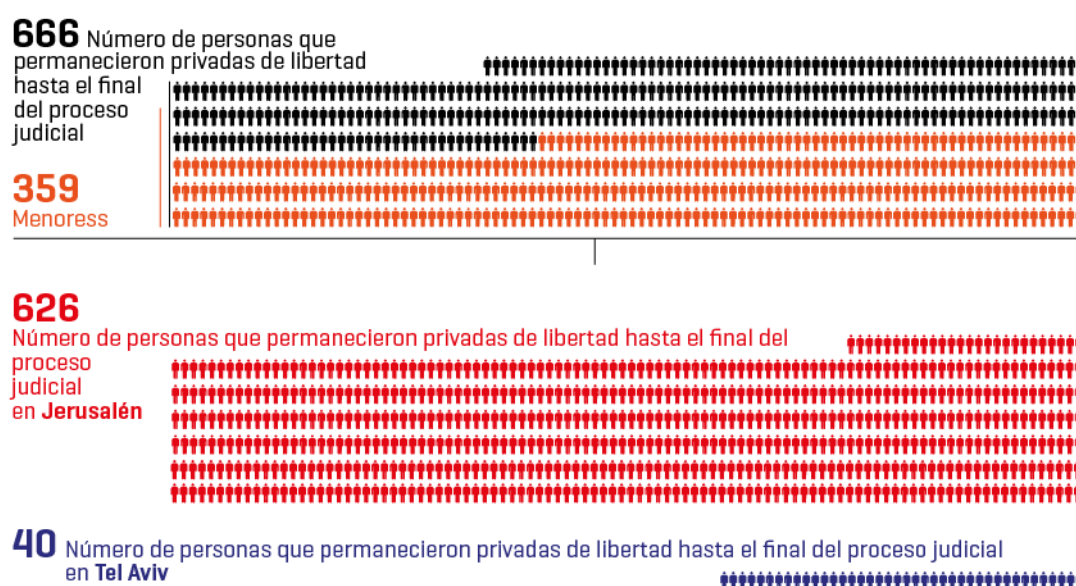
¹¹⁹ Adalah, “Silencing the opposition. Israeli Law Enforcement’s Restrictions on Freedom of Expression in Israel during “Operation Protective Edge” in Gaza, 8 July – 26 August 2014” 2015. Disponible online <http://www.adalah.org/uploads/Adalah-Report-Silencing-the-Opposition-11-Aug-2015.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

¹²⁰ Uno de los ejemplos citados en la carta que Adalah envía al Abogado General del Estado, Yehuda Weinstein el 15 de septiembre de 2014 es de la manifestación del 13 de Junio convocada en la calle Ben Gurion de Haifa a la que acudieron unas 40 personas. La policía dispersó la manifestación alegando que era ilegal, arrestando a las personas participantes. En base a las regulaciones israelíes la manifestación no necesitaba ningún permiso para llevarse a cabo, según alega Adalah en su carta. Disponible online <http://www.adalah.org/en/content/view/8329> [Consultado 22 mayo 2016]

¹²¹ En la misma carta, hecho referido a arresto de activistas en la ciudad de Akka (Acre) el 7 de julio 2014.

sin orden judicial sólo puede ser efectuado si existe una sospecha razonable de que el sujeto haya cometido o vaya a cometer un crimen. El derecho a la protesta no puede ser restringido en base a que se prevea una ofensa futura. Estas actuaciones contradicen incluso las propias directivas internas de la policía, descritas en párrafo 22 del documento de “Competencias de la policía durante concentraciones ilegales” (*Police authority regarding unlawful congregation*) ya que los arrestos preventivos no se encuentran entre las medidas autorizadas.

ARRESTOS DENTRO DE ISRAEL DURANTE LA OPERACIÓN “PLOMO FUNDIDO” DIVIDIDOS POR ÁREA GEOGRÁFICA.



Fuente: Adalah

Según un informe publicado por la organización israelí *Coalition of Women for Peace* (CWP)¹²², sobre acoso sexual en organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de los casos de acoso a mujeres activistas se dan en dependencias policiales y son

¹²² Coalition of Women for Peace “Sexual harassment in Civil Society Organisations and groups of political activism” 2013. Disponible online <http://www.coalitionofwomen.org/wp-content/uploads/2013/09/SexualHarrasment-web-2.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

cometidos por “hombres uniformados”, sobretodo hacia mujeres palestinas. Además de soportar el excesivo y desproporcionado uso de violencia que las autoridades policiales israelíes ejercen contra manifestantes pacíficos, las mujeres, y más las mujeres palestinas, están expuestas a acoso, intimidación e incluso violencia sexual en los centros de detención. En la mayoría de los casos los policías no llevan identificación, por lo que el proceso de denuncia y rendición de cuentas es extremadamente dificultoso. Según la CWP, se puede afirmar que la “continua y sistemática violencia sexual – que en ningún caso supone casos aislados e irregulares – constituye una vulneración mayor del derecho de libertad de expresión de las mujeres y de su derecho a la participación política.”¹²³

2.4 El rol de Tribunal Supremo de Israel: ¿uso político de la justicia?

El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial para todos los asuntos: constitucionales, administrativos, civiles y penales. Es el tribunal de cierre incluso para aquellos asuntos dictados en los Tribunales Militares que administran justicia en el territorio ocupado.

El Tribunal está compuesto por doce magistrados que deben ser nacionales de Israel. Antes de continuar analizando el rol de este alto Tribunal, máxima autoridad de justicia en Israel, cabe señalar que resulta cuanto menos llamativo la exigencia del requisito de ser nacional israelí para optar a ser nombrado como juez en el mismo. Este requisito de nacionalidad excluye directamente a la población palestina de Jerusalén Este, que no tienen el rango de nacionales de Israel sino de residentes permanentes¹²⁴, lo cual constituye una practica de discriminación por origen¹²⁵. La distinción entre nacionalidad

¹²³ *idem*.

¹²⁴ Ver infografía con los diferentes tipos de estatus legal en Israel y Palestina en p.34 de este trabajo.

¹²⁵ En base a este requisito, una persona de religión judía de Estados Unidos, por ejemplo, tendría una ventaja significativa sobre una persona no judía nativa de Palestina a la hora de optar a un puesto como Magistrado en el Tribunal Supremo de Israel. La de Ley de Retorno le garantiza el derecho a la nacionalidad israelí por su condición de persona judía, y esta nacionalidad, le garantiza el derecho a optar a este puesto, todo esto, sin necesariamente tener que renunciar a su nacionalidad americana. Tampoco requiere haber residido antes en Israel. Una persona palestina residente en Jerusalén tendría que pasar por el proceso de solicitud de nacionalidad por residencia o nacionalización, haber residido más de 5 años en Israel y enfrentarse a un procesos largo y complejo que además implica realizar un juramento de lealtad hacia el Estado de Israel y sus leyes. Obliga a la población indígena del lugar a pasar por un proceso de naturalización mientras garantiza la nacionalidad a personas extranjeras, y sus familias, sólo en base a la religión que profesan, a pesar de que las primeras o sus ascendientes hubieran nacido en el actual Israel o Palestina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un contexto muy diferente pero similar a su vez en cuanto a discriminación en procesos de nacionalización de población indígena y autóctona en la sentencia del 2014 “Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana” dictamina que “el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación

y ciudadanía se encuentra principalmente en los derechos que se derivan de una u otra condición. Mientras que la segunda la ostentan todos los nacidos en Israel (independientemente de su religión), la nacionalidad varía en función de las raíces étnicas o religiosas de las personas. El grupo de nacionales israelíes disfruta, como hemos visto anteriormente, de un abanico mucho más amplio de derechos que cualquier de los grupos o colectivos que viven en el territorio israelí.¹²⁶

A falta de un-marco constitucional que sirva como referencia para la protección y defensa de los derechos humanos (más allá de la mini-carta de derechos que conforman las Leyes Básicas del 1992 y 1994), el Tribunal Supremo es el organismo encargado de su protección. Su jurisdicción la determina la mencionada Ley Básica del Poder Judicial de 1994. Sobre la base de la misma, el Tribunal tiene dos funciones principales: 1) Servir como tribunal de apelación¹²⁷ y 2) Servir como Tribunal Supremo de Israel para escuchar aquellas demandas del individuo contra el Estado¹²⁸.

El Tribunal ha sido especialmente activo en temas relacionados con la libertad de expresión, libertad de manifestación o expresión, como hemos visto en el apartado anterior, aunque tiene un papel altamente cuestionado en lo que respecta a la imparcialidad que espera de sus decisiones como último Tribunal o Tribunal de cierre en materias relacionadas con la igualdad de derechos de la población palestina, tanto aquella que vive como ciudadanía israelí dentro del territorio de Israel como aquella que vive en el territorio palestino ocupado¹²⁹. Para subrayar esta imparcialidad con respecto a la protección de derechos de la población palestina, detallaré algunas de las sentencias más relevantes dictadas por el Tribunal con respecto al derecho a la propiedad privada, el

determina que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos” así como “que los Estados tienen la obligación de garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación independientemente del estatus migratorio de una persona en un Estado, y dicha obligación se proyecta en el ámbito del derecho a la nacionalidad.” Ver sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia del 28 agosto 2014, par. 264. Disponible online http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹²⁶ Escudero, R. “Los tribunales israelíes y la cultura de la legalidad.” en Escudero, R. y Pérez González, C (ed.) *La Responsabilidad penal por crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009

¹²⁷ Sección 15.b. de la Ley Básica, 1984.

¹²⁸ Sección 15.c. de la Ley Básica, 1984.

¹²⁹ Schmidt, Y. “Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories”. Tesis Doctoral, 2001 p. 20 Disponible online http://www.academia.edu/1967765/Foundations_of_civil_and_political_rights_in_Israel_and_the_occupied_territories [Consultado 22 mayo de 2016]

derecho al debido proceso y la posición del Tribunal con respecto a los asesinatos extrajudiciales, derecho a la familia y en cuestiones relativas a la seguridad del Estado de Israel.

2.4.1 Derecho a la Propiedad Privada

Con respecto a la protección del Derecho a la propiedad hay numerosos ejemplos de la interpretación más bien restrictiva a la que Tribunal se acoge cuando se trata defender los intereses de la población palestina. En Abril de 2015, el Tribunal aprobó la aplicación de la Ley de Propiedad de los Ausentes¹³⁰ en Jerusalén Este, mediante la cual, las propiedades de personas palestinas residentes en Cisjordania o Gaza sitas en Jerusalén Este eran objeto de ser confiscadas por el Estado. La ONG Adalah denunció este hecho ante el Tribunal Supremo en 2013¹³¹ alegando que la imposición de la ley sólo en la población palestina de Jerusalén Este y no en sus co-residentes judíos, suponía un claro ejemplo de discriminación contra los primeros, siendo este, según Adalah, el verdadero motor y objeto de la ley. Esta decisión contraviene la tomada en el caso de la familia Ka'adam¹³², que consiguió que el Tribunal reconociera su derecho a residir en Katzir, una zona residencial construida sobre tierras estatales por la Agencia Judía. El Supremo, en aquella decisión histórica, revocó la orden de expulsión de la familia alegando que no se podía llevar a cabo en base únicamente a que la familia no era judía. Fue la primera vez que la comunidad de personas palestinas residentes en Israel consiguieron desafiar de manera positiva la legalidad de las comunidades únicamente judías. La sentencia de abril de 2015 acaba con esta “ilusión” de igualdad ante la ley para la población palestina que reside en Israel.

¹³⁰ Ver explicación en este mismo trabajo p.30

¹³¹ Adalah, “Amicus Curiae Opinion by Adalah Submitted to the Israel Supreme Court. Civil Appeal 2250/06, Custodian of Absentees’ Property et al. v. Daqaq Nuha et al” 2013. Disponible online http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Legal_Advocacy/Adalah-Amicus-Absentee-Property-Jerusalem-English-Aug-2013.pdf [Consultado 22 mayo de 2016]

¹³² Greenberg, J. “Israeli Court Rules Arab Couple Can Live in Jewish Area”. The New York Times. 2000. Disponible online <http://www.nytimes.com/2000/03/09/world/israeli-court-rules-arab-couple-can-live-in-jewish-area.html> [Consultado 22 mayo de 2016]

En el territorio ocupado, uno de los casos más significativos fue el conocido como caso Beth El¹³³. Los demandantes eran dos palestinos residentes en Cisjordania cuyas tierras fueron confiscadas en 1970 y 1975 a través de órdenes emitidas por el Comandante Militar de la zona. Las tierras, confiscadas originalmente por motivos de seguridad para fines militares, acabaron siendo utilizadas para la construcción de un asentamiento para población civil israelí judía. Los demandantes, en vista de la situación, presentaron una demanda basada en dos argumentos. El primer de ellos se refería a que la confiscación no había sido necesaria por motivos de seguridad ya que no servía a ningún fin en este sentido. El segundo argumento se basaba en el principio de que incluso en el caso de que desde el punto de vista militar hubiera alguna justificación para confiscar sus tierras, ésta sería ilegal bajo el paraguas de la legislación internacional. El Tribunal rechazó ambos argumentos.

Con respecto al primero de ellos -el no cumplimiento del fin militar último y medidas de seguridad-, el Tribunal lo rechaza porque no encuentra diferencia entre supuestos motivos de seguridad y necesidades militares, ya que, según entiende el Tribunal, “el aspecto militar y de seguridad son uno y el mismo”¹³⁴.

Dada la situación beligerante y la responsabilidad de Israel como potencia ocupante de mantener el orden y la seguridad en la zona, el Estado está obligado, en visión del magistrado Witkon, a tomar todas las medidas necesarias a su alcance para hacerlo. El magistrado considera que en este contexto de guerra,—los asentamientos judíos contribuyen de manera “indiscutible al mantenimiento de la seguridad en el área, ayudando al ejército a cumplir con dicha tarea. Uno no necesita ser un experto en defensa militar para entender que el elemento terrorista opera con mayor facilidad en áreas solamente habitadas por una población que es indiferente o que simpatiza con el enemigo que en otra zona en la que también puedes encontrar gente que observe a este último y que informe de movimientos sospechosos a las autoridades. Los terroristas no tendrán ningún escondite, ayuda o suministros por ese tipo de personas (los colonos)”¹³⁵ El razonamiento que hace el Tribunal pasa por admitir que los asentamientos en Cisjordania

¹³³ H.C. 606/78, Ayub et al v. Minister of Defence, et al. (The Beth el Case) 1978. Disponible online <https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/israel-ayub-defence-case-study.htm> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹³⁴ *idem* par. 1 traducción de la autora.

¹³⁵ *idem* par. 3

responden a necesidades militares y de seguridad y que, por tanto, se hacen de acuerdo a la ley interna municipal.

Sobre el segundo argumento relacionado con la aplicación del Derecho internacional, los demandantes argumentaban que la confiscación de tierras suponían un incumplimiento de la Convención de la Haya de 1907 N. IV de respecto a las Normas de la Guerra y una vulneración del IV Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra sobre los Derechos de las Personas Protegidas (Art. 49)¹³⁶.

El Tribunal resuelve que, en este caso, la legislación internacional supuestamente vulnerada no es jurisprudencia del Tribunal Supremo de Israel. En la sentencia diferencia entre si estas normas pueden ser entendidas como Derecho internacional consuetudinario o como derecho internacional convencional. La principal diferencia señalada se basaba en que este ultimo (el derecho internacional convencional) solo sería vinculante para los estados firmantes. Israel no ratificaría el IV Protocolo de la Convención hasta el año 2007, por tanto, en base al razonamiento que hizo en Tribunal en el momento de esta sentencia, este Tribunal no tendría jurisdicción para juzgar ese crimen.

El Tribunal Supremo se posicionó en otras ocasiones a este respecto, afirmando que tanto la Convención de la Haya como el IV Protocolo de la Convención de Ginebra forman parte del Derecho internacional convencional y que los individuos no podían acudir a tribunales israelíes internos, ya que como señalaba antes, Israel en ese momento

¹³⁶ Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones

Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo. Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector. La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y que no se separe, unos de otros, a los miembros de una misma familia. Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto como tengan lugar. La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo requieran. La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado Disponible online IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949. Disponible online <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm> [Consultado 22 mayo 2016]

no había ratificado aún el IV Protocolo y dichos instrumentos no formaban parte de su sistema legal.

En este caso, el magistrado Witkon cambia ligeramente su posicionamiento y considera que la Convención de La Haya está generalmente aceptada como parte del derecho internacional consuetudinario y que por tanto, sí que forma parte del sistema legal israelí, pero rechaza igualmente la petición porque se fundamentaba principalmente en la vulneraciones del Artículo 49 del IV Protocolo, no teniendo por tanto la corte competencias para juzgarlo.

Por último, quería hacer referencia en este apartado también a los casos de demoliciones punitivas, que no sólo vulneran el derecho a la propiedad, sino que constituyen también una grave forma de castigo colectivo¹³⁷. Desde 1967 hasta 2005 Israel demolió cientos de estructuras. Supuestamente, las demoliciones tenían un efecto disuasorio: los “futuros terroristas” verían a las casas de sus familias destruidas y esto tendría, entendía el Gobierno de Israel, un efecto disuasorio en los ataques. En 2005 el Ministro de Defensa, aconsejado por una comisión militar y en vista de que estas demoliciones no producían ningún efecto disuasorio sino más bien lo contrario, decide congelar este tipo de demoliciones. En octubre de 2015, en vista de la nueva oleada de violencia en Israel y Palestina, el Gobierno decide reactivar las demoliciones punitivas.

El 4 de abril de 2016, el ejército de Israel derriba las casas de tres palestinos en el distrito de Jenin, en Cisjordania. Las demoliciones eran una medida punitiva derivada del ataque perpetrado por estas tres personas dos meses antes en Jerusalén, en el que murió un oficial israelí. Estas tres personas murieron en el ataque como consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad israelíes. Esto es, el gobierno de Israel ordena la demolición de las casas de tres personas que ni siquiera están vivas en el momento de la demolición, como “medida disuasoria”, siendo este argumento respaldado por el Tribunal Supremo, que rechaza la petición de los demandantes de parar la demolición de sus casas¹³⁸. Lejos de ser un hecho aislado, las demoliciones punitivas se han convertido en

¹³⁷ Samuel, M. “Punitive House Demolitions in the West Bank: The Hague Regulations, Geneva Convention IV, and a Jus Cogens Bypass” 6 Berkeley J. Middle E. & Islamic L. 1. 2014 Disponible online <http://scholarship.law.berkeley.edu/jmeil/vol6/iss1/3> [Consultado 22 mayo 2016]

¹³⁸ HCJ 1938/16; HCJ 1999/16; HCJ 2002/16. Traducción no oficial de Hamoked. Disponible online http://www.hamoked.org/files/2016/1160394_eng.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

una realidad más del día a día de la población palestina que reside en el territorio ocupado (incluyendo a Jerusalén Este). Naciones Unidas¹³⁹ ha alertado de este hecho afirmando que las demoliciones punitivas son contrarias a la legalidad internacional y un hecho “inherentemente injusto que castiga a personas inocentes por los actos de otras”

2.4.2 Derecho al debido proceso y opinión del Tribunal sobre los asesinatos extrajudiciales.

En el caso anterior también se plantea una situación profundamente grave que ha sufrido un alarmante incremento en los últimos meses: los asesinatos extrajudiciales.

Las “situaciones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” incluyen “todas las acciones y omisiones de representantes de los Estados que constituyan una violación del reconocimiento general del derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 6, 2, párrafo 2 del artículo 4, 26 y los artículos 14 and 15).”¹⁴⁰

Amnistía Internacional denuncia en su informe de 2015/16¹⁴¹ el asesinato a manos del soldados y policías israelíes de 124 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, 22 en la Franja de Gaza y 10 dentro de Israel. Muchas de estas muertes, según Amnistía Internacional, serían consideradas como “homicidios ilegítimos”¹⁴², siendo habitual que las fuerzas de seguridad israelíes dispararan contra palestinos que sospechosos de cometer apuñalamientos o ataques contra militares o civiles israelíes.

¹³⁹ NNUU doc. Israeli punitive demolitions of Palestinian homes violates international law – senior UN relief official” Disponible online <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52567#.VxibyZN97dQ> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁴⁰ Instrumentos internacionales de protección sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Disponible online <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Executions/Pages/InternationalStandards.aspx> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴¹ Amnistía Internacional, “Informe anual 2015/2016. Israel y los territorios palestinos ocupados” 2016. Disponible online <https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴² Aquí empleo el término “homicidios ilegítimos” por ser el utilizado por Amnistía Internacional en el informe citado.

En lugar de garantizar el acceso a un juicio justo e independiente, que respete los principios de un debido proceso¹⁴³, es cada vez más frecuente la práctica de disparar a las personas sospechosas en el momento de los ataques. El uso de la fuerza y más aún de munición real debería ser siempre un último recurso y en caso de ser utilizada, debe hacerse de manera proporcional, buscando siempre el menor daño posible. Sin duda uno de los casos más impactantes ha sido el asesinato de Abed al Fatah al Sharif, residente de Hebrón. Un voluntario de la organización israelí de derechos humanos, B'tselem grabó en vídeo como un soldado israelí disparaba en la cabeza a la víctima, que yacía herido en el suelo tras, presuntamente, haber intentado agredir con un arma blanca a los soldados.¹⁴⁴ El soldado ha sido condenado en un Tribunal Militar por homicidio involuntario, no por asesinato, ya que el equipo jurídico alegó que el soldado actuaba en defensa propia¹⁴⁵ y que hizo un uso “razonable de la fuerza”¹⁴⁶.

El caso desató una fuerte polémica, tanto a nivel político como social. Los resultados de una encuesta realizada por un canal de noticias israelí que muestra que tan sólo un 5% de las personas israelíes preguntadas consideraba el suceso como un asesinato. El 42% de la población consideró que el soldado había actuado de una manera responsable¹⁴⁷.

¹⁴³ El concepto de debido proceso que aplico es el definido en el sistema constitucional español: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Disponible online <http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/DEBIDO%20PROCESO.htm> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴⁴ Amnistía Internacional. “Israel / Territorios Palestinos Ocupados: Presunta ejecución extrajudicial de palestino grabada en vídeo” 2016. Disponible online <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/03/israel-suspected-extra-judicial-execution-of-palestinian-caught-on-video/> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴⁵ Beaumont, P. “Israeli soldier who shot wounded Palestinian charged with manslaughter” *The Guardian*. 2016. Disponible online <http://www.theguardian.com/world/2016/mar/31/israeli-soldier-shot-palestinian-manslaughter-abed-al-fatah-al-sharif> [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴⁶ Cohen, G. “Soldier Who Shot Subdued Palestinian Assailant in Hebron to Be Charged With Manslaughter” *Haaretz*. 2016. Disponible online <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.714379>

¹⁴⁷ Beaumont, P. “Most Israelis support soldier accused of shooting Palestinian, says poll” *The Guardian*. 2016. Disponible online <http://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/most-israelis-support-soldier-accused-of-shooting-palestinian> [Consultado 22 mayo de 2016]

Saed Ekerat, de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) solicitó que Naciones Unidas abriera una investigación independiente sobre los asesinatos extrajudiciales. Según Ekerat, 186 palestinos habrían sido víctimas asesinatos extrajudiciales entre Septiembre del 2015 y Marzo del 2016.¹⁴⁸

Otro caso que cabe señalar en esta misma línea, por su especial relevancia en el contexto español, es el caso *Al Daraj*, archivado definitivamente por la Audiencia Nacional española mediante el voto particular al Auto 1/2009, de 9 de Julio, en el que se estimaba el recurso del Ministerio Fiscal para el archivo definitivo del caso¹⁴⁹.

En este caso Salah Shehada, supuesto integrante de Hamás, y otras 14 personas – todas ellas civiles – murieron como consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada lanzada por el ejército de Israel en la Franja de Gaza, una de las zonas más pobladas del planeta. Más de 150 personas resultaron heridas en el ataque, cuyo objetivo era el de acabar con el supuesto líder de Hamás. Tras el lanzamiento de la bomba, el 22 de julio de 2002, el ejército de Israel crea una comisión de investigación para determinar porqué la cantidad de personas muertas y heridas es mucho más alta de lo esperado, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de la acción en sí misma¹⁵⁰.

Tampoco puede decirse que la constitución de la comisión de investigación ofreciera muchas garantías, ya que este tipo de comisiones son de carácter secreto e impiden la exposición del material informativo que recopilen, el cual tampoco puede ser utilizado posteriormente en un juicio. El carácter de la investigación era meramente operativo, no criminal. Se pretendía recabar información sobre los hechos para “evitar fracasos y errores futuros”¹⁵¹ La comisión la conformaban tres ex militares o miembros de las fuerzas de seguridad israelí, que eran nombrados por el Primer Ministro, con lo que a la falta de vinculación legal y transparencia de la comisión, se le añade la objetividad, cuanto menos dudosa, de sus miembros. Tras analizar los hechos, la conclusión que se

¹⁴⁸ State of Palestine “Israel’s aggression against occupied Palestine. Special report highlights: extrajudicial killings” 2015. Disponible online http://nad-plo.org/userfiles/file/media%20brief/NAD_ViolationsReport_ENG_1MAR16.pdf [Consultado 22 mayo de 2016]

¹⁴⁹ Para más información sobre el proceso en la AN véase Escudero, R. “Los tribunales israelíes y la cultura de la legalidad.” en Escudero, R. y Pérez González, C (ed.) *La Responsabilidad penal por crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009

¹⁵⁰ *idem*

¹⁵¹ *idem*

deriva de la parte pública de la investigación es que la información con la que contaba el ejército era incompleta e incorrecta y que de haber tenido acceso a toda la información, no se hubiera actuado de aquella manera. Al no haber intencionalidad ni premeditación, la comisión concluye que no cabe imputarle ninguna conducta criminal a los soldados que llevaron a cabo la operación.

Este tipo de comisiones, tal como recuerda el propio Tribunal, no dependen del poder judicial sino del legislativo, y es el Gobierno quién decide cómo se conforma y cuáles son las funciones de las mismas. Al no ser parte del sistema penal, carece de las facultades que tienen los organismos judiciales competentes y no puede practicar pruebas, ni obligar a testigos a declarar o a no mentir.

Con todo esto, resulta bastante evidente que este tipo de comisiones y este tipo de investigaciones tienen una función más propagandística que esclarecedora de los hechos y que buscan más que hacer justiciar, legitimar ciertas acciones difícilmente justificables en un estado democrático y de derecho.

2.4.3 Derecho a la familia

Una de las leyes más discriminatorias y racistas que existe en el Israel de hoy es sin lugar a dudas la conocida como Ley de Ciudadanía de 1952¹⁵².

En el año 2003, a la ley existente, ya de por sí discriminatoria, se le añade una modificación¹⁵³ que conlleva la prohibición de reunificación familiar a una pareja en la que uno de los miembros sea un residente de Israel y otro del territorio palestino ocupado, excepto si este miembro es un colono judío que viva en algún asentamiento. En 2005 se plantea una modificación menor, consintiendo algunas excepciones (para casos en los que le marido sea mayor de 35 y la mujer mayor de 25, en situaciones médicas o laborales especiales, o autorizar a los menores de 14 años para vivir con el progenitor en el territorio israelí. En 2007 una nueva modificación restringe también a las personas de Irán, Líbano,

¹⁵² Citizenship and Entry into Israel Law (Temporary Provision), 5763-2003 Disponible online https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁵³ Citizenship and Entry into Israel Law (Temporary Provision), 5763-2003 Disponible online <http://www.adalah.org/en/law/view/511> [Consultado 22 mayo 2016]

Siria e Iraq de solicitar la reagrupación familiar con sus parejas residentes en Israel y en 2008 se incluyó a la población gazatí.

La ley fue demandada ante el Tribunal Supremo por varias organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la constitucionalidad de la ley, arguyendo que era claramente discriminatoria y que no respetaba el principio de igualdad de la población palestina que residía en Israel, vulnerando además su derecho a vivir en familia.

En la sentencia emitida por el Tribunal en el 2006, después de múltiples peticiones y extensiones de la ley (supuestamente temporal) los magistrados reconocen que efectivamente la ley vulnera de manera desproporcionada el principio de igualdad y recomienda al Gobierno a enmendar la legislación para asegurar un tratamiento individualizado de las peticiones de reunificación familiar, valorando de este modo aquellas que pudieran suponer una amenaza para la seguridad del Estado y rechazándolas individualmente en consecuencia. A pesar de este reconocimiento, el Tribunal desestima la petición de los demandantes, quedando a la espera de que la *Knesset* haga las modificaciones pertinentes. Cinco años más tarde, con una votación ajustada, (6 jueces a favor y 5 en contra) la ley obtiene el respaldo del Tribunal, que entiende que a pesar de que si bien la ley vulnera el derecho a la igualdad de algunos ciudadanos de Israel (la ciudadanía palestina) esta vulneración es proporcional y no constituye una vulneración las Leyes Básicas de Israel.

Adalah, una de las organizaciones demandantes, alega que con esta sentencia el Tribunal está estableciendo tres canales¹⁵⁴ para la naturalización de personas extranjeras en el Estado de Israel:

- a) Uno para la población de origen judío (en base la Ley de Retorno de 1950) que obtendrían la nacionalidad de manera inmediata.
- b) Otro para personas extranjeras, a través de un proceso de naturalización gradual, quienes obtendrían la residencia en 5 años.
- c) Y un tercero para las parejas de ciudadanos/as palestinos de Israel del territorio palestino ocupado, Siria, Líbano, Irán o Iraq, que tendrían prohibido el derecho a la reunificación familiar.

¹⁵⁴ Adalah, “Israeli Supreme Court Upholds Ban on Family Unification” 2012. Disponible online <http://www.adalah.org/en/content/view/7185> [Consultado 22 mayo 2016]

Adalah remarca en sus comunicaciones con el Tribunal que esta ley constituye una clara vulneración del principio de igualdad y la equipara a las leyes promovidas en la Sudáfrica del apartheid.

A modo de resumen y como cierre de este segundo capítulo, podemos concluir en base a los argumentos presentados, que el sistema legal israelí es un sistema vivo y cambiante, que se adapta a las necesidades e intereses políticos de los poderes hegemónicos que gobiernan del Estado de Israel. Este servicio del sistema jurídico a los intereses políticos del Estado se aprecia en el rol del Tribunal Supremo de Israel. Complementando esto con algunas de las ideas presentadas en el capítulo 1 de este trabajo, también se aprecia una fuerte securitización en el enfoque aplicado por las distintas instituciones jurídicas de Israel.

La influencia de la religión a la hora de interpretar la ley establece grandes diferencias en la aplicación de la misma, creando barreras infranqueables entre los distintos grupos de población.

La población palestina que reside en Israel, que representa aproximadamente un 20% de la misma, está relegada a ser una ciudadanía de segunda clase, privada en muchos casos de los derechos más fundamentales típicos de cualquier estado democrático y de derecho, como el derecho al voto, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protesta, a la familia o el derecho a la propiedad privada, entre otros.

3 MARCOS LEGALES EN CISJORDANIA Y GAZA

Unos de los aspectos sin duda más característicos de la organización del sistema legal en el territorio palestino ocupado es la falta de homogeneidad y equidad en aplicación de la ley: mientras que las personas palestinas se rigen por una amalgama de sistemas que combinan el militar israelí, el propio establecido por la Autoridad Palestina y el religioso –a su vez dividido en los distintos credos–, la población israelí que reside en el territorio ocupado se rige por el mismo sistema legal que sus conciudadanos israelíes residentes dentro de las fronteras de Israel.

El contraste entre las garantías de las que dispone la población palestina, sometida a un contexto de ocupación prolongada, con un gobierno que tiene una soberanía más que limitada sobre el territorio que gobierna, y las de la población colona, que disfruta de las mismas garantías que las de la población israelí que vive dentro de las fronteras de Israel, crea unas barreras jurídicas difícilmente franqueables.

Los acuerdos de Oslo han creado una fragmentación en el terreno no sólo desde una perspectiva estrictamente territorial sino también desde el punto de vista de la protección, disfrute y respeto a los derechos fundamentales. La división geográfica establecida ha creado un sistema de guetos legales, haciendo mucho más plausible el desequilibrio de poder entre ambos grupos – el ocupante y el ocupado – dejando a esto último en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta situación de fragmentación jurídica no sólo tiene consecuencias sobre la protección de derechos individuales, si no que tiene un impacto directo en la protección del derecho del pueblo palestino a la paz, tal como explicaré en este capítulo.

Si basamos nuestro ideal de paz en el concepto de “paz positiva” propuesto por Galtung¹⁵⁵, y entendemos la paz de una manera más comprehensiva, casi como un sinónimo de justicia social; frente a un concepto de “paz negativa” definida únicamente como la ausencia de violencia física, podremos afirmar que los acuerdos de Oslo, en tanto y cuanto no han conseguido proteger y promocionar una idea de justicia en Palestina, representan un intento fallido para alcanzar la paz.

¹⁵⁵ Galtung, J. “Violence, peace and peace research” *Journal of Peace Research*, Vol. 6 No. 3. 1969, pp. 167-191,

El enfoque de paz y justicia ha sido ampliamente trabajado por muchos autores¹⁵⁶, las Naciones Unidas y figuras de remarcado prestigio en la defensa de los derechos humanos como Martin Luther King Jr., quien afirmaba que “La paz verdadera no es la ausencia de tensión, es la presencia de justicia”.

Antes de entrar a describir cómo se organizan los distintos sistemas legales en el territorio palestino ocupado voy a referirme brevemente al impacto que han tenido los Acuerdos de Oslo en la protección de derechos de las personas palestinas, fijándome en la protección de del derecho a la paz como derecho colectivo del pueblo palestino.

3.1 Acuerdos de Oslo: ¿fronteras territoriales o límites a los derechos?

En 1993 se firman los Acuerdos de Oslo¹⁵⁷ como resultado de un largo proceso de negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Estos acuerdos constituyen a día de hoy la base del fallido proceso de paz entre Israel y Palestina.

Los Acuerdos, inicialmente diseñados para acabar con la ocupación de Israel en Palestina, han acabado contribuyendo a una intensificación de la misma, reforzando un creciente proceso de securitización, alimentando la desigualdad entre la población judía israelí y la palestina y afianzando la negativa del derecho al retorno de la población palestina refugiada¹⁵⁸.

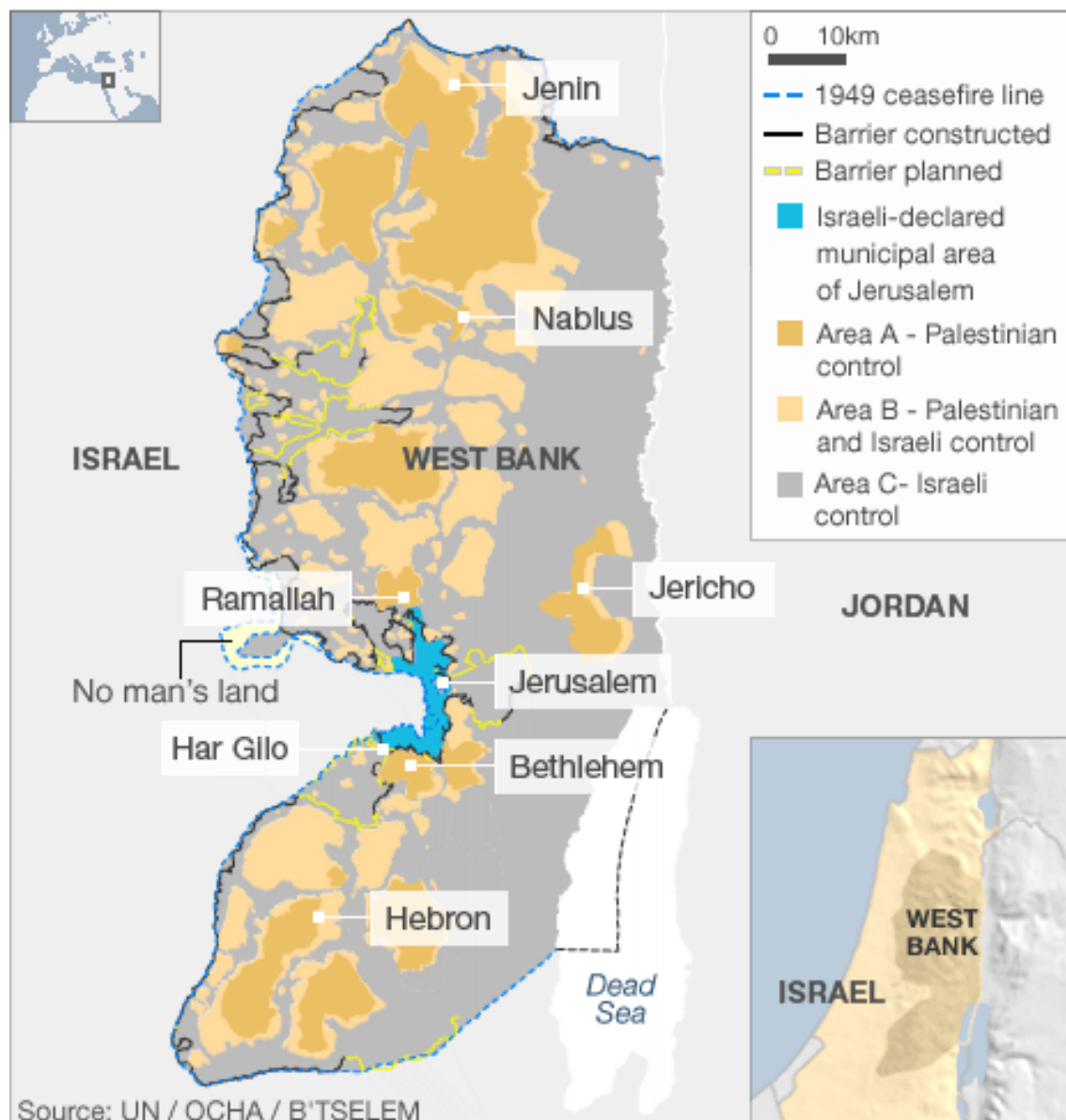
Además de los impactos derivados de la aproximación y enfoque de los Acuerdos de Oslo en las relaciones de poder entre ambos grupos y en el respeto y promoción de los derechos humanos que analizaré más adelante, si nos fijamos en la parte procedimental y práctica de los Acuerdos, los cambios más significativos y consecuencias más destacadas han sido por un lado, la creación de la figura de la Autoridad Palestina (AP) en 1995 y la división del territorio ocupado en las conocidas como Áreas A, B o C.

¹⁵⁶ Ver Kelsen, H. *Peace through Law*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944; o también NNUU doc. S/2009/189 “Enhancing Mediation and its Support Activities, Report of the Secretary General.” 2009, par. 35; también Chomsky N. *Ilusiones de Oriente Medio. ¿Paz en Oriente Medio? Reflexiones sobre justicia y nacionalidad*. Editorial Popular. España. 2003.

¹⁵⁷ NNUU doc. A/48/486 “Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas” 1993
Disponible online <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/48/486> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁵⁸ Sanchez, A y Sellick, P. “Human Rights as a tool for conflict transformation: The case of BDS movement and local unarmed popular resistance.” Sin publicar, cortesía de las autoras.

Control of the West Bank under Oslo Accords



Mapa de Cisjordania tras los Acuerdos de Oslo. Fuente OCHA oPt.

El establecimiento de la AP supuso la formación de una nueva estructura de Gobierno para la población palestina¹⁵⁹. Esta recién creada figura de autogobierno presenta una soberanía con profundas limitaciones, que tiene una autoridad delimitada a ciertas zonas del territorio.

Los Acuerdos de Oslo dividen a Cisjordania en tres zonas distintas¹⁶⁰ – A, B y C – con el objetivo de facilitar una retirada progresiva del territorio ocupado militarmente en 1967 por parte de Israel. La división de las zonas se corresponde con los diferentes niveles de jurisdicción que la AP tenía sobre el territorio, del que Jerusalén Este estaba específicamente excluido. El Área A comprendería la Franja de Gaza y los grandes

¹⁵⁹ “Artículo I. 2 Transferencia de la Autoridad. En tanto se inaugura el Consejo, las atribuciones y las funciones transferidas al Consejo serán ejercidas por la Autoridad Palestina establecida de conformidad con el Acuerdo de Gaza-Jericó, lo que también tendrá todos los derechos, responsabilidades y obligaciones que habrá de asumir el Consejo a ese respecto. En consecuencia, por la expresión "Consejo" en el presente Acuerdo se entenderá, en tanto se inaugura el Consejo, la Autoridad Palestina.”

Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Washington, D.C., 28 de septiembre de 1995. Disponible online

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_950928_InterimAgreementWestBankGazaStrip%28OsloII%29%28esp%29.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁶⁰ Artículo XI Territorio 1. Ambas partes consideran la Ribera Occidental y la Faja de Gaza como una sola unidad territorial cuya integridad y régimen jurídico se mantendrán durante el período provisional. 2. Ambas partes acuerdan que el territorio de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza se sujete, con excepción de las cuestiones que se examinen en las negociaciones sobre un régimen jurídico permanente, a la jurisdicción del Consejo Palestino de manera escalonada dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la toma de posesión del Consejo con arreglo a lo siguiente: a) El territorio de las zonas pobladas (zonas A y B), incluidas las tierras estatales y de Al Waqf, se someterá a la jurisdicción del Consejo en la primera fase de la retirada; b) Todas las atribuciones y facultades civiles en las zonas A y B, establecidas en el anexo III, incluidas la planificación y la zonificación, se transferirán al Consejo en la primera fase de la retirada; c) En la zona C, en la primera fase de la retirada, Israel transferirá al Consejo las atribuciones y facultades civiles no territoriales establecidas en el anexo III; d) Los despliegues ulteriores de las fuerzas militares israelíes a zonas militares concretas, se harán gradualmente de conformidad con la Declaración de Principios, en tres fases que se iniciarán después de la toma de posesión del Consejo a intervalos de seis meses y concluirán dentro de los 18 meses siguientes a ésta; e) En las fases de despliegue que deben concluir dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la toma de posesión del Consejo, las atribuciones territoriales se transferirán gradualmente a la jurisdicción palestina que se hará cargo del territorio de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, con excepción de las cuestiones que se examinen en las negociaciones sobre un régimen jurídico permanente; f) Las zonas militares concretas a que hace referencia el párrafo 2 del artículo X se determinarán en las fases de despliegue ulteriores dentro del plazo mencionado de los 18 meses siguientes a la fecha de toma de posesión del Consejo y se examinarán en las negociaciones sobre un régimen jurídico permanente. 3. A los efectos del presente Acuerdo y hasta que concluya la primera fase de los despliegues ulteriores: a) Se entenderán por "zona A" las zonas pobladas delimitadas por una línea roja y sombreadas de marrón en el mapa adjunto No. 1; b) Se entenderán por "zona B" las zonas pobladas delimitadas por una línea roja y sombreadas de amarillo en el mapa adjunto No. 1 y la zona edificada de las aldeas enumeradas en el apéndice 6 del anexo I; c) Se entenderán por "zona C" las zonas de la Ribera Occidental distintas de las zonas A y B que, con excepción de las cuestiones que se examinen en las negociaciones sobre un régimen jurídico permanente, se transferirán gradualmente a la jurisdicción palestina con arreglo al presente Acuerdo.

Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Washington, D.C., 28 de septiembre de 1995. Disponible online

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_950928_InterimAgreementWestBankGazaStrip%28OsloII%29%28esp%29.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

núcleos urbanos de Cisjordania (Hebrón, Nablus, Ramallah...etc); el Área B se correspondería con las zonas rurales y pequeñas ciudades y el Área C la conformaban los asentamientos israelíes, zonas militares y las tierras que rodeaban esas zonas.

La jurisdicción¹⁶¹ que la AP ejerce sobre estas zonas quedaba dividida de la siguiente forma:

- a) Área A¹⁶²: La AP ostenta una jurisdicción territorial en esta zona. Esto supone un control físico y administrativo del territorio, incluyendo control sobre asuntos de seguridad interna. Por territorio se entiende la tierra, el subsuelo y aguas territoriales, pero no el espacio electromagnético ni aéreo, así como tampoco el control de las fronteras. Este tipo de jurisdicción incluye también la jurisdicción personal y operativa. La Franja de Gaza, desde la retirada Israelí de 2005, estaría enteramente bajo este tipo de jurisdicción.
- b) Área B: La AP tiene jurisdicción personal y operativa sobre esta área, es decir, un control administrativo sobre la población en asuntos civiles, pero no sobre temas relacionados con seguridad interna ni con asuntos internacionales. Tendría competencias sobre temas relativos a salud, educación, registro de tierras, etc. Algunos autores se han referido a este reparto como asuntos considerados internos para Palestina que no eran de interés para Israel. El control de la seguridad de esta área cae dentro de la jurisdicción israelí.

¹⁶¹ Ludsin, H. *Women and the draft Constitution of Palestine*. Women's Center for Legal Aid and Counselling. 2011, p.37

¹⁶² A pesar de que de manera muy generalizada se aceptase que tras la firma de los acuerdos de Oslo la denominada zona A ya no estaría considerada como parte del territorio ocupado, si revisamos la legislación militar israelí al respecto veremos que hay graves contradicciones y vacíos legales al respecto. La orden militar que respaldaba los acuerdos, conocida como la Proclamación nº 7 (*Proclamation regarding implementation of the Interim Agreement, 1995*) es la ley que hace vinculantes a los acuerdos en el territorio ocupado, pero, no lo hace utilizando los mismos términos que el acuerdo. Por ejemplo, cuando en el sistema militar israelí se habla de la "región" se habla de todo Cisjordania, sin hacer referencia a ninguna división por zonas de jurisdicción. La Proclamación nº 7 no modifica esta definición, refiriéndose por tanto cuando la usa en su articulado a toda la región de Cisjordania tal como se definía antes de los acuerdos de Oslo, incluyendo por tanto las áreas B y C, como el área A, supuestamente bajo jurisdicción de la AP tras los acuerdos. Si nos fijamos en el Art. 7 Aplicación de la Ley:

"La ley y la legislación de seguridad aplicable en la *región* en la fecha de publicación de esta proclamación permanecerán en vigor siempre y cuando no sean cancelados, sustituidos o modificados de acuerdo a las provisiones de esta proclamación o las provisiones del acuerdo interno"

En Weill, S. "The judicial arm of the occupation: the Israeli military courts in the occupied Palestinian territories" *International Review of the Red Cross* Vol. 89 (number 866) 2007 p1-25 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf

- c) Área C: En esta zona, la AP sólo tiene jurisdicción personal sobre las personas palestinas que residen en estas zonas, esto es, jurisdicción relativa a temas civiles. Israel tiene jurisdicción territorial y operativa del Área C, así como completa jurisdicción sobre las personas israelíes que viven en los asentamientos edificados en Área C. La AP no tiene ninguna jurisdicción sobre la población israelí en Cisjordania, en ninguna de sus Áreas, ni aunque cometan un acto de tipo criminal.

Actualmente, un 60% de Cisjordania está catalogada como Área C y dentro de este porcentaje, un 70% se encuentra dentro de las zonas delimitadas como asentamientos israelíes. Un total de 300,000 personas palestinas viven en Área C, bajo jurisdicción enteramente israelí. De entre estas comunidades palestinas que viven en esta área, un 70% no está conectada a la red de pública agua, dependiendo exclusivamente de tanques de agua para su consumo¹⁶³.

La idea de este reparto provisional de áreas y jurisdicciones era que la AP recuperase el control absoluto sobre su territorio, cosa que a día de hoy aún no ha sucedido, por lo que podemos decir que actualmente “la Autoridad Palestina gobierna una población, no un territorio¹⁶⁴” y aún así con grandes limitaciones.

Estas restricciones hacen que la AP cuente con un reducido margen de maniobra para proteger los derechos e intereses de su población ocupada frente a los abusos continuos y sistemáticos de la potencia ocupante. Esto se transforma en una gran debilidad¹⁶⁵ a la hora de aplicar la ley y administrar la justicia en el territorio que provoca una gran pérdida de confianza de la población hacia el sistema palestino como garante de sus derechos.¹⁶⁶

¹⁶³ NNUU doc. “Area C of the West Bank: Key humanitarian concerns. August 2014”. *OCHA Occupied Palestinian Territory*, 2014. Disponible online <https://www.ochaopt.org/content/area-c-west-bank-key-humanitarian-concerns-august-2014> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁶⁴ Ludsin, H. *Women and the draft Constitution of Palestine*, Women’s Center for Legal Aid and Counselling. 2011, p. 38

¹⁶⁵ *ibidem*

¹⁶⁶ *idem* p. 42

A efectos prácticos, esta fragmentación y falta de competencias deja a algunos colectivos en situaciones de completa vulnerabilidad. Por ejemplo, si una mujer cristiana¹⁶⁷ recibe una orden de pago de pensión alimenticia, emitida por un tribunal eclesiástico en Jerusalén (no hay tribunales eclesiásticos cristianos en Cisjordania ni en Gaza) y su marido reside en una zona dentro de las áreas A o B e incumple el pago de la misma ¿quién tiene la autoridad para garantizar el cumplimiento de la ley en este caso? ¿Un tribunal religioso de Jerusalén que no tienen jurisdicción sobre Cisjordania? ¿Los Tribunales de la AP, que tienen jurisdicción personal pero que no operativa ni territorial sobre las áreas B y C?

Las limitaciones jurisdiccionales otorgadas a la AP por los acuerdos de Oslo tienen consecuencias que limitan el ejercicio de los derechos de la población palestina que residen en el territorio ya que crea vacíos de poder y vacíos jurisdiccionales¹⁶⁸ que hasta la fecha, siguen irresueltos.

3.1.1 Estrategias alternativas: Los enfoques de Transformación de Conflictos y de derechos humanos.

El enfoque de los Acuerdos se corresponde con una visión tradicional de la solución de conflictos que presta escasa atención a las relaciones de poder, entendiendo el conflicto únicamente como un problema del *status quo* y orden social. Este enfoque de solución de conflictos desecha una visión más amplia de éstos como procesos catalizadores de cambio o como estrategias de lucha no violenta por el cambio social.¹⁶⁹ Los procesos basados en el enfoque de solución de conflictos suelen estar liderados desde las esferas políticas y militares tanto nacionales como internacionales, impuestos con un enfoque de arriba a abajo y hacen uso de estrategias como las negociaciones, la mediación o el establecimiento de comisiones investigadoras.

¹⁶⁷ Como explicaré con detalle en el siguiente apartado, en el territorio ocupado los temas relativos al Estatuto Personal también se rigen por códigos y tribunales religiosos.

¹⁶⁸ Weill, S. "The judicial arm of the occupation: the Israeli military courts in the occupied Palestinian territories" *International Review of the Red Cross* Vol. 89 (number 866), 2007. Disponible online https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁶⁹ Reiman, C. "Hacia la transformación de conflictos: evaluación de los enfoques recientes de gestión de conflictos." Berghof Handbook for Conflict Transformation. 2000.

Asimismo este enfoque - y aquí está en mi opinión el principal error de aplicación de éste al caso palestino - toma como origen del conflicto un “conflicto prologando de intereses como resultado de intereses incompatibles y/o competencia por recursos escasos”¹⁷⁰. El régimen de violencia estructural contra la población civil palestina, la situación de discriminación y opresión a la que el Estado de Israel somete al pueblo palestino (tanto las personas que habitan en el territorio ocupado, como aquellas que residen dentro de las fronteras de Israel o a la población refugiada) no puede verse reducida a un “conflicto de intereses incompatibles”. Es un análisis reduccionista y obsoleto. A lo largo de este trabajo se presentan numerosos ejemplos de discriminación legal que incluso podrían ser considerados en opinión de numerosos autores, tal como se detalla en el capítulo siguiente, como una situación de crimen de Apartheid contra el pueblo palestino.

Si aceptamos la hipótesis de que la situación de Palestina no se corresponde únicamente con la de un conflicto de intereses, la solución que se propone desde este marco conceptual basada en las lógicas del diálogo y la negociación, tampoco sería la más adecuada¹⁷¹.

Las lógicas de la persuasión y el diálogo promovidas por el proceso de paz de Oslo presentan a las dos partes “como si fueran igualmente culpables y evaden deliberadamente el reconocimiento de la relación colonizador-colonizado. El diálogo no promueve el cambio, sino que refuerza el status quo, y es en efecto en el mejor interés de la parte dialogante israelí, ya que hacen que los israelíes sientan que hace algo, mientras que en realidad no es así”¹⁷².

Como alternativa a este enfoque de solución de conflictos, encontramos el enfoque de transformación de conflictos¹⁷³, basado en la teoría de las necesidades humanas y con una aproximación mucho más holística e integradora del conflicto.

Este enfoque entiende el origen de los conflictos como:

¹⁷⁰ *idem* p. 6

¹⁷¹ LeVine, M y Taraki, L. “Why boycott Israel?” *Al-jazeera*. 2011. Disponible online <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201188976675245.html> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁷² *idem*

¹⁷³ Reiman, C. “Hacia la transformación de conflictos: evaluación de los enfoques recientes de gestión de conflictos.” *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. 2000, p.7.

- Conflictos prolongados como resultado de intereses incompatibles y/o competencia de recursos escasos, en los que los intereses y el reparto de poder pueden ser negociables; y
- Necesidades humanas insatisfechas, en las que éstas necesidades y la identidad de las partes no serían negociables; y
- Estructuras sociales y políticas desiguales y opresivas, en las que la capacitación y el reconocimiento no serían negociables.

Este enfoque reconoce la situación de violencia estructural y régimen de opresión y discriminación sistemática que sufre la población palestina desde hace décadas. Introduce una serie de factores y conceptos que no han sido incorporados a los Acuerdos de Oslo. La negación de estos factores y la no incorporación de los mismos en el enfoque tradicional de solución de conflictos dificultan enormemente la construcción de una paz justa y duradera en Palestina, reforzando como decía antes, el status quo actual.

La falta de análisis de relaciones de poder que se deriva de una aproximación errónea al conflicto, no es lo único que se echa en falta en los acuerdos. Si hacemos una rápida revisión y contamos el número de veces que se repiten las palabras “derechos” y “seguridad”, en el documento de “Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza”, en el que se detallan los pasos a seguir en el proceso de construcción de paz, vemos que la primera de ellas “derechos” se repite 17 veces, frente a las 36 que aparece la segunda “seguridad”¹⁷⁴.

Más allá de este hecho numérico, que puede llegar a ser un tanto anecdótico, la falta de incorporación de la perspectiva de derechos humanos y sus implicaciones han sido discutidas en varios espacios¹⁷⁵. Una de las consecuencias más graves de la falta de incorporación de un enfoque de derechos humanos en los acuerdos es el denunciado por

¹⁷⁴ *Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza*. Washington, D.C., 28 de septiembre de 1995. Disponible online http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_950928_InterimAgreementWestBankGazaStrip%28OsloII%29%28esp%29.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁷⁵ Kaufman, E. and Bisharat, I., “Introducing human rights into conflict resolution: the relevance for the Israeli-Palestinian peace process. *Journal of Human Rights*,” , 2002, p. 71-91

la organización de DDHH *Human Rights Watch*: el uso de los DDHH como herramientas de negociación:

"En los intentos de poner fin al conflicto rara vez se han incorporado los derechos humanos o las normas de DIH, los que podrían ayudar a reducir tales violaciones o proporcionar un marco amplio para la solución negociada. En su lugar, éstos se han dejado al margen de las negociaciones supuestamente en aras de avanzar en una solución política, que por ahora sigue siendo difícil de alcanzar. Por ejemplo, la Declaración de 1993 de Principios sobre un Gobierno Autónomo Provisional, el primer acuerdo de Oslo, no contenía ninguna referencia al lenguaje operativo de protección de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario. En su lugar, se hace sólo referencia en su preámbulo sólo a los "derechos legítimos y políticos mutuos" de las partes. Finalmente, el apoyo público para estos procesos y la relevancia de su contenido, han quedado fuertemente desautorizados por las continuas violaciones de los derechos fundamentales en el terreno"¹⁷⁶

El académico norteamericano Noam Chomsky¹⁷⁷, en un detallado análisis del proceso de paz, afirma que los Acuerdos de Oslo sirven principalmente a los intereses políticos en lugar de a los derechos humanos y aspiraciones legítimas del pueblo palestino. En ese sentido, Chomsky criticó el papel central asignado en los Acuerdos a la Resolución 242¹⁷⁸, cuyo contenido el autor considera claramente "segregacionista", además de no reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Chomsky

¹⁷⁶ Human Rights Watch "The roadmap: Repeating Oslo's Human Rights Mistakes", 2003.

¹⁷⁷ Chomsky N. *Ilusiones de Oriente Medio. ¿Paz en Oriente Medio? Reflexiones sobre justicia y nacionalidad*. Editorial Popular. España. 2003.

¹⁷⁸ La Resolución estipula que estipula que el establecimiento de una paz justa y duradera debe incluir la aplicación de dos principios:

A.- La retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente conflicto; y
B.- La terminación de todas las situaciones de beligerancia y respeto y reconocimiento de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza.

La propuesta fue aceptada en su momento por Egipto y Jordania, así como por Israel que también añadió que las cuestiones de la retirada del territorio ocupado y las relativas a la población refugiada podrían ser resueltas mediante negociaciones directas con los Estados árabes y la conclusión de un tratado de paz global. Según Chomsky, los EE.UU. habrían jugado un papel importante en la interpretación de la resolución con el argumento de que permitía un proceso de retiradas parciales que estaba exclusivamente en manos de Israel y los EE.UU. Siria y la OLP rechazaron la resolución, sobre las bases de que la retirada de los territorios no podría estar vinculado a las futuras concesiones de los países árabes y por la reducción de la cuestión de Palestina a un problema de los refugiados.

Texto de la UNSCR 242 Disponible online

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136> [Consultado 22 mayo 2016]

crítica que había otras resoluciones que incorporaban los derechos del pueblo palestino, como la Resolución 194 que reconoce el derecho a las personas refugiadas al retorno, y que no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de los Acuerdos de Oslo. Estas otras opciones, critica Chomsky, fueron bloqueadas por el Gobierno de los EEUU precisamente por el reconocimiento específico de determinados derechos del pueblo palestino, como el derecho de autodeterminación o el derecho de las personas refugiadas al retorno.¹⁷⁹

Que las obligaciones básicas en virtud del DIH y del DIHD sean objeto de negociación política conlleva que mecanismos de protección existentes para la población civil queden aún más debilitados si cabe, haciendo de las vulneraciones de derechos humanos causa y consecuencia del conflicto.¹⁸⁰

3.1.2 Conceptualización de la seguridad en la era post-Oslo

Como mencionaba en el epígrafe anterior, el concepto de seguridad es uno de los más mencionados a lo largo de los Acuerdos de Oslo. En el preámbulo de la Declaración de Principios de 1995 se reafirma la determinación de los estados de vivir en un “régimen de coexistencia pacífica, dignidad y seguridad mutuas”¹⁸¹. Si bien los acuerdos no han conseguido alcanzar ese régimen de coexistencia pacífica y dignidad del que habla su preámbulo, ¿cómo han modificado la conceptualización de la seguridad los Acuerdos de Oslo? ¿Qué cambios se producen en la era post-Oslo?.

Para responder a estas preguntas, es importante enmarcar el proceso de conceptualización del modelo de seguridad actual y analizar su desarrollo en función de los diferentes contextos socio-políticos por los que ha pasado el territorio palestino ocupado desde la firma de los Acuerdos de Oslo en el 1993 y la Declaración de Principios en el 1995.

¹⁷⁹ Chomsky N. *Ilusiones de Oriente Medio. ¿Paz en Oriente Medio? Reflexiones sobre justicia y nacionalidad*. Editorial Popular. España. 2003.

¹⁸⁰ Parlevliet, M., “Rethinking conflict transformation from a human rights perspective.” Berlin: Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management. 2009

¹⁸¹ Acuerdos de Oslo 1993. Disponible online <http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/48/486&referer=https://es.wikipedia.org/&Lang=ES> Consultado 22 mayo 2016]

Si bien parecía que los Acuerdos iban a suponer un gran cambio en el terreno, los recurrentes cierres de fronteras llevaron a un deterioro aún mayor de las condiciones de vida en Cisjordania y la Franja de Gaza, con el consecuente aumento de la pobreza.

Las violaciones de derechos humanos cometidas en los años siguientes a la firma de los Acuerdos eran excusadas en nombre de la seguridad tanto por Israel como por la AP y la expansión de los asentamientos no paraba de crecer. En este contexto de tensión política y social, el 28 de Septiembre del 2000 Ariel Sharon acompañado de más de mil agentes de seguridad y de la policía israelí entra en el santuario de Haram Al Sharif en la Ciudad Vieja de Jerusalén, templo sagrado para la población musulmana. Este hecho es señalado como el desencadenante de la segunda *intifada*¹⁸². Esta segunda intifada, o levantamiento popular fue perdiendo fuerza - sobretodo tras la muerte de Yasser Arafat, primer presidente de la recién creada AP, en el exilio en Francia - hasta que en 2005 Mahmoud Abbas, sucesor de Arafat al mando de la AP le pone el punto y final en 2005.

Es en esta era post-Arafat, a partir de 2005, cuando tienen lugar los cambios más relevantes en cuanto las políticas y conceptualización del modelo de seguridad palestino. La reforma del sector de seguridad fue una prioridad en la agenda política de Abbas y uno de los pilares de su mandato presidencial¹⁸³.

A diferencia del modelo propuesto por su antecesor en el puesto, Arafat, que no desechaba la idea de utilizar en determinadas ocasiones la fuerza para resistir contra el ejército de Israel¹⁸⁴, Abbas, nuevo Presidente de la AP, planteó una transformación en el modelo de seguridad palestino para orientarlo única y exclusivamente al mantenimiento de la seguridad y estabilidad internas y a la protección de la élite de la AP¹⁸⁵. La

¹⁸² King, M.E. "Palestinian Civil Resistance." en Stephan, MJ. *Civilian jihad. Nonviolent struggle, democratization and governance in the Middle East*. Palgrave Macmillan. USA. 2009, p. 147-148

¹⁸³ International Crisis Group. "Squaring the circle: Palestinian security reform under occupation". *Middle East Report* N° 98 . 2010. Disponible online <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/98%20Squaring%20the%20Circle%20--%20Palestinian%20Security%20Reform%20under%20Occupation.ashx> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁸⁴ Dana, T "The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?" *Jadaliyya*. 2014. Disponible online <http://www.jadaliyya.com/pages/index/18379/the-beginning-of-the-end-of-palestinian-security-c> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁸⁵ *idem*

coordinación en materia de seguridad de la AP con Israel era un requisito *sine qua non* para la consecución de estos objetivos¹⁸⁶.

Con el asesoramiento de expertos americanos y europeos en seguridad, Abbas fue incorporando nuevas medias que paulatinamente fueron llevando a un cambio doctrinal en el enfoque¹⁸⁷ que se materializa con la victoria legislativa de Hamas en Franja de Gaza en el año 2007. El primero de los factores más destacados en este cambio doctrinal lo representa la agenda neoliberal impuesta por el ex-primer ministro Salam Fayyad, que otorgaba un rol central y prioritario a la seguridad, ya que ésta era necesaria para poder generar un nivel de desarrollo empresarial óptimo que incrementara las opciones de inversión. Los cambios en el sistema de seguridad liderados por el gobierno de Fayyad han hecho de éste un sector en gran desarrollo, llegando a destinar hasta un 31% del presupuesto anual de la AP al mismo¹⁸⁸. Asimismo, se llevaron a cabo importante operaciones contra células de Hamas en determinadas partes de Cisjordania, sobre todo en la ciudad de Jenin, en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Israel. El segundo de los factores ha sido el apoyo y colaboración de los EEUU y la introducción de la conocida como “doctrina Dayton”¹⁸⁹. Sólo entre 2007 y 2010, el Gobierno de los EEUU destinó un total de 392 millones de dólares a formaciones y entrenamiento para el personal militar y de seguridad de la AP¹⁹⁰.

¹⁸⁶ International Crisis Group. “Squaring the circle: Palestinian security reform under occupation”. *Middle East Report N° 98*. 2010. Disponible online <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/98%20Squaring%20the%20Circle%20--%20Palestinian%20Security%20Reform%20under%20Occupation.ashx> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁸⁷ Dana, T “The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?” *Jadaliyya*. 2014. Disponible online <http://www.jadaliyya.com/pages/index/18379/the-beginning-of-the-end-of-palestinian-security-c> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁸⁸ Missing Peace, “New US report shows excessive spending on PA security service” 2013. Disponible online <http://missingpeace.eu/en/2013/02/new-us-report-shows-excessive-spending-on-pa-security-services/> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁸⁹ El teniente general Keith Dayton fue Coordinador de Seguridad de Estados Unidos para Israel y la AP y jugó un papel principal en la remodelación de la estructura y conceptualización de las fuerzas de seguridad de la AP. Sus esfuerzos dieron como resultado la formación de un “hombre palestino nuevo”, un agente de seguridad con formación profesional y disciplinado cuya función es la de obedecer sin cuestión las órdenes de seguridad, independientemente de las consecuencias que éstas tengan sobre la población palestina y estando totalmente en el servicio de los nuevos paradigmas de seguridad estadounidenses e israelíes. Dana, T “The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?” *Jadaliyya*. 2014. Disponible online <http://www.jadaliyya.com/pages/index/18379/the-beginning-of-the-end-of-palestinian-security-c> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹⁰ US Government Accountability Office. “U.S. Assistance Is Training and Equipping Security Forces, but the Program Needs to Measure Progress and Faces Logistical Constraints. Highlights.” 2010. Disponible online <http://www.gao.gov/products/GAO-10-505> [Consultado 22 mayo 2016]

No es sorprendente que estas reformas patrocinadas por EEUU, socio tradicional de Israel, tuvieran una excelente acogida por este último, tal como reconoció el anterior Presidente de Israel, Simon Peres, ante la Unión Europea en el 2013¹⁹¹. Estas celebraciones y aplausos al éxito de las reformas en el sistema de seguridad contrastan con las múltiples denuncias de torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en cárceles palestinas a supuestos integrantes de Hamas¹⁹² y represión ejercida en las calles a manifestantes noviolentos.

Estas contradicciones han situado a la cooperación en materia de seguridad entre Israel y Palestina en el punto de mira de muchas de las críticas por parte de la sociedad civil palestina, llegándose a hablar en algunos casos de si esta cooperación no supone de alguna manera “una extensión de la ocupación con otro nombre”¹⁹³

La primacía otorgada por Abbas y Fayyad a la seguridad nacional, estableciéndola como eje central de sus políticas, la justificación de vulneraciones de derechos en su nombre, así como la visión neoliberal intentando disciplinar a la sociedad en favor del mercado¹⁹⁴ son algunos de los factores que muestran como el los procesos y lógicas securitarias también han conseguido apropiarse del panorama político palestino.

3.2 Sistemas legales aplicables a población palestina de Cisjordania y de la Franja de Gaza

Una vez revisado cuál es el impacto de los Acuerdos de Oslo en la protección de derechos del pueblo palestino y en el modelo de seguridad imperante, en este epígrafe

¹⁹¹ Haaretz. “Full text of Peres speech to the European Parliament”. Disponible online <http://www.haaretz.com/israel-news/full-text-of-peres-speech-to-european-parliament-1.508915>

[Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹² International Crisis Group. “Squaring the circle: Palestinian security reform under occupation”. *Middle East Report* N° 98 . 2010. Disponible online <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/98%20Squaring%20the%20Circle%20--%20Palestinian%20Security%20Reform%20under%20Occupation.ashx> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹³ Byrne, A. “Building a police state in Palestine”. *Foreign Policy*. 2011. Disponible online <http://foreignpolicy.com/2011/01/18/building-a-police-state-in-palestine/> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹⁴ Foucault, M. *Nacimiento de la biopolítica. Curso del College de France (1978 – 1979)*. Akal, Madrid. 2009.

voy a analizar los diferentes marcos legales que coexisten en el territorio palestino ocupado. Actualmente el mapa legal de Cisjordania y la Franja de Gaza está compuesto por una amalgama de sistemas. El objetivo de este apartado es de describir cómo funcionan, qué mecanismos tienen y cómo se coordinan entre sí, si es que lo hacen, y qué limitaciones presentan los distintos sistemas a la hora de proteger los derechos de sus habitantes.

Para ello, voy a analizar por un lado los sistemas legales civiles y religiosos propios de la población palestina, la legislación local; por otro, el sistema militar impuesto por el Gobierno del Estado de Israel a la población local palestina derivado de la situación de ocupación militar del territorio y por último, la legislación que se aplica a la población israelí que vive en los asentamientos del territorio ocupado. El objetivo de este capítulo es facilitar un análisis de estos sistemas para poder determinar en el capítulo siguiente si esta coexistencia concurre o no en un crimen de Apartheid contra el pueblo palestino.

3.2.1 El sistema legal palestino

La organización de gobierno que se establece en los Acuerdos de Oslo se corresponde con la de una democracia parlamentaria basada en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y en el compromiso con el Estado de Derecho.

Tras la fundación de la Autoridad Palestina en 1994, el Consejo Legislativo palestino aprueba la Ley Básica Palestina de 2002¹⁹⁵. Este documento sería el marco que establecería las bases de la futura Constitución, que sería redactada una vez que Palestina hubiese adquirido su estatus como Estado. A pesar de que en 1997 el borrador ya estaba listo, Arafat, entonces líder de Al Fatah y presidente de la AP, no la ratificó hasta 2002. El borrador inicial confería demasiados poderes a la figura del presidente y fue modificado en 2003¹⁹⁶, creando la figura de primer ministro ocupada por Mahmoud Abbas inicialmente, elegido por el propio presidente y ratificado por el Parlamento. En

¹⁹⁵ Palestinian Basic Law, 2002. Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2002-basic-law> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹⁶ Palestinian Basic Law 2003 Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law> [Consultado 22 mayo 2016]

2005¹⁹⁷ se modifica nuevamente para establecer la duración y los términos de los mandatos del Primer Ministro y del Consejo Legislativo Palestino.

En cuanto a protección de derechos se refiere, la Ley Básica garantiza el derecho a la igualdad¹⁹⁸, a la libertad religiosa¹⁹⁹ y otros derechos económicos, sociales y culturales²⁰⁰.

A pesar de reconocerse de manera específica el derecho a la libertad religiosa, la religión oficial del Estado es el Islam y los principios de la *Sharia*²⁰¹ permean todo el sistema legal. Esto, como explicaré a continuación tiene un impacto negativo especialmente en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres se refiere, a pesar del reconocimiento por parte de la Ley Básica de la igualdad de derechos y ante la ley entre hombres y mujeres.

El sistema judicial palestino se compone de tres tipos diferentes de tribunales: los tribunales ordinarios gestionados por el Estado, los tribunales religiosos y el sistema informal de mediación²⁰². Como veremos a continuación, cada uno de estos tribunales tienen un peso y funciones específicas dentro de la composición del sistema legal, siendo paradójicamente los tribunales estatales los que menos peso tienen en dicha composición.

I. Tribunales Estatales

Los tribunales estatales se rigen por una legislación que es el resultado de más de cien años de ocupación: imperio otomano, mandato británico, control de Cisjordania por Jordania y Franja de Gaza por Egipto y, además, desde 1967 la ocupación militar israelí. Estos tribunales se dividen, a su vez, en civiles y militares. Estos últimos circunscriben

¹⁹⁷ Palestinian Basic Law 2005 Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2005-amendments> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹⁸ Artículo 9 de la Ley Básica Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2005-amendments> [Consultado 22 mayo 2016]

¹⁹⁹ Artículos 18 y 19 de la Ley Básica Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2005-amendments> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁰⁰ Artículo 10 de la Ley Básica Disponible online <http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2005-amendments> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁰¹ La *sharia* es la ley sagrada del Islam, un cuerpo de derecho y un código de conducta. Sirve de marco legal, sobre todo en asuntos religiosos, en muchos países de tradición musulmana.

²⁰² Ludsin, H. *Women and the draft Constitution of Palestine*, Women's Center for Legal Aid and Counselling. 2011, p. 41-48

su jurisdicción a temas relacionados con asuntos de seguridad nacional y de las fuerzas de seguridad del Estado. Los tribunales militares palestinos fueron creados mediante decreto por Arafat en 1995 y hasta el 2003 actuaron fuera del marco de la Ley Básica. Descritos como “deficientes e injustos”²⁰³ son aquellos que pueden aplicar la pena de muerte, aún vigente en el llamado Código Penal Revolucionario, de 1979.

El sistema estatal goza de escasa credibilidad entre la población palestina. Bisharat²⁰⁴, (Bisharat, 2002) señala cuatro factores como posibles causas de esta pérdida de confianza: 1) institucionales legales anticuadas y confusas; 2) tribunales débiles y sin recursos; 3) profesionales legales desmoralizados y pobremente formados y 4) ausencia de unidad legal entre Cisjordania y Gaza. Bisharat añade que la población no percibe a los tribunales estatales como lugares de poder real, utilizando en su lugar de manera mayoritaria, los sistemas tradicionales de mediación.

II. Tribunales Religiosos

Al igual que en Israel y Jerusalén Este, los temas relacionados con la persona, su capacidad y estatuto legal son jurisdicción de los Tribunales Religiosos²⁰⁵. Estos tribunales tendrían competencias sobre matrimonio, divorcio, custodia, y pensiones. En cuanto a temas de herencia, independientemente de la religión de los sujetos, se tiene como marco de referencia la *sharia* o ley islámica. Las mayores críticas hacia estos tribunales se corresponden con la falta de garantías y trato discriminatorio hacia las mujeres²⁰⁶. Por ejemplo, de acuerdo a los principios de la *sharia*, la palabra de una mujer vale la mitad que la de un hombre en un tribunal, y éstas son asignadas menores compensaciones por lesiones que sus compañeros.

²⁰³ *idem*.

²⁰⁴ Bisharat, G. “Peace and the Political Imperative of Legal Reform in Palestine” *Case W. Res. J. Int'l L. Vol. 31. Issue 2*. 1999. Disponible online: <http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=jil> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁰⁵ Tienen representación las religiones monoteístas: cristiana (con las ramas católica, asiria, ortodoxa y protestante) musulmana y judía (esta última forma parte del sistema legal palestino ya que los Tribunales Rabínicos pertenecen al israelí)

²⁰⁶ Ludsin, H. *Women and the draft Constitution of Palestine*, Women's Center for Legal Aid and Counselling. 2011, p.42

Los tribunales cristianos están todos en Jerusalén, por lo que los miembros de esta comunidad dependen de que Israel les conceda permisos para poder acceder a los tribunales. Esto que dificulta y ralentiza significativamente los procesos judiciales, limitando también el acceso a la justicia de la población cristiana residente en Cisjordania y Gaza.

III. Sistema de mediación tradicional

El sistema de mediación es un sistema informal de justicia comunitaria o de clanes. Se deriva de costumbres anteriores a la *sharia*, aunque incorpora y combina también costumbres más recientes. Como elemento más singular de este tipo de sistemas es que los daños nunca son considerados de manera individual, es decir, los ataques a un individuo se tratan como si hubieran sido al grupo completo y lo mismo con las responsabilidades derivadas de las ofensas, no sólo recaen en quién la comete si no en todo el grupo.

El sistema de mediación tradicional cubre todos los aspectos y ramas del derecho, incluyendo el asesinato. Cabe destacar también que este sistema incluye varias ofensas relacionadas con la conducta de las mujeres, con una aproximación muy similar a la de la *sharia* en este sentido. Considera, por ejemplo, como faltas sumamente graves las faltas contra “la pureza sexual” entendiendo que la “castidad femenina y su pureza deben ser mantenidas para evitar deshorrar a la familia y al clan”²⁰⁷

Los mediadores son siempre hombres y suelen ser personas de prestigio de entre las comunidades. Los hombres de la familia son quienes negocian y llegan a acuerdos – *sulha* - que después asumirá el resto del clan. Estos acuerdos son aceptados como válidos por los tribunales estatales y una vez presentados ante éstos, los cargos y/o procedimientos que hubiese pendientes en el tribunal son retirados.

Pese a que estos sistemas vulneran claramente los derechos de las mujeres palestinas, son el método de resolución de conflictos más utilizado en el territorio palestino ocupado²⁰⁸. Los tribunales estatales no gozan de la confianza de la población, y la única

²⁰⁷ *idem*, p.45

²⁰⁸ *idem* p. 45-48.

otra alternativa que tiene la población palestina es recurrir al sistema judicial de la potencia ocupante, de la desconfían aún más, como es de esperar. En Jerusalén este sistema es la única alternativa al sistema israelí con la que cuenta la población palestina.

Es un sistema que se construye e implementa por y desde la comunidad, por lo que tiene mucha más credibilidad y es mucho más respetado por la población, porque además se percibe como algo propio, en contraposición con los tribunales estatales y el sistema israelí. Además, los procesos suelen ser mucho más rápidos que aquellos del sistema estatal²⁰⁹.

A pesar de esto, este sistema recibe también importantes críticas. Por un lado, y como comentaba antes, la sistemática falta de respeto a los derechos de las mujeres, que no pueden ni tan siquiera presentar quejas dentro de este sistema sin un aval masculino y que aún menos pueden participar como mediadoras en los procesos. Por otro lado, al ser un sistema basado en clanes, la capacidad de influencia y relaciones de poder entre ellos son una limitación del sistema que no se tiene en cuenta en los procesos de mediación, favoreciendo siempre la regla del más fuerte.²¹⁰

3.2.2 El Código Militar Israelí

Desde que Israel ocupa militarmente el territorio palestino de Cisjordania y Gaza en 1967, el sistema militar²¹¹ se suma los sistemas legales vigentes en dichos territorios. Los Tribunales Militares israelíes que operan en el territorio palestino ocupado son responsables de la detención y encarcelamiento de miles de personas palestinas²¹², siguiendo una serie de regulaciones y procesos altamente cuestionables, como trataré de exponer en este apartado.

²⁰⁹ *idem*

²¹⁰ *idem*

²¹¹ Para mayor información en cómo funciona el sistema militar se puede ver el documental “The Law in these parts” de Ra’anan Alexandrowicz. 2012. Disponible online <https://www.thelawfilm.com/eng#!/streaming>

²¹² Yavne, L. “Backyard Proceedings. Implementation of due process rights in the Military Courts in the West Bank.” *Yesh Din*. 2007, p.45 Disponible online http://www.hamoked.org/files/2012/8521_eng.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

Uno de los principales problemas de este sistema es la falta de información disponible sobre el mismo y la falta de transparencia de sus procedimientos. En muchos casos las leyes no son accesibles, no sólo para el público en general, sino que en muchas ocasiones son difícilmente accesibles incluso para los profesionales de la abogacía. Los juicios y audiencias no son públicos y muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado las alarmantes faltas de respeto y adecuación de éstas a la legislación internacional²¹³.

Aunque en este apartado no voy a detallar las posibles vulneraciones de estos tribunales con respecto al DIH o al DIDH, sí me referiré brevemente a su constitución desde el marco del DIH, ya que tratándose de un territorio ocupado éste sería el marco legal de referencia²¹⁴. En este sentido, me centraré menos en los aspectos procedimentales de la garantía de derechos procesales, que explicaré con más detalle en el capítulo siguiente, y analizaré con más profundidad el ámbito de la jurisdicción territorial de estos tribunales militares (TM) en el territorio ocupado.

I. Establecimiento de Tribunales Militares, marco general

En general, el DIH dicta que el sistema legal local debe ser mantenido y respetado por la potencia ocupante²¹⁵. Lo que se pretende conseguir con este principio es que las potencias ocupantes no hagan extensiva su legislación al territorio ocupado, produciendo una anexión de facto del mismo.

²¹³ *idem*

²¹⁴ En este apartado no me referiré al marco del DIDH por ser considerada el DIH como *lex specialis* y prevalecer sobre cualquier otra legislación en general. Ver sobre este tema Weill, S. “The judicial arm of the occupation: the Israeli military courts in the occupied Palestinian territories” *International Review of the Red Cross* Vol. 89 (number 866) 2007. Nota 14. Disponible online https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²¹⁵ IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949. Artículo 64 - Legislación penal. I. Generalidades
Permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo en la medida en que pueda derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones previstas en tal legislación.
Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del territorio ocupado las disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente Convenio, y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la Potencia ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice.

Disponible online <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm> [Consultado 22 mayo 2016]

El artículo 43 de la Convención de la Haya²¹⁶ establece que la potencia ocupante es la última responsable de garantizar la seguridad y el orden en el territorio ocupado. Este mandato debe hacerse respetando la legislación y normas locales, siempre y cuando sea necesario. Por otro lado, el artículo 64 (1) establece dos situaciones excepcionales bajo las cuales la potencia ocupante puede ignorar o contradecir la legislación local, que serían: 1) si la legislación local supone una amenaza para la seguridad o si 2) la ley local supone un obstáculo para la aplicación de la Convención. Los tribunales locales deben seguir funcionando tal y cómo lo hacían hasta antes de la ocupación, con el objetivo de que sean éstos quienes juzguen a la población civil y no un tribunal militar. La potencia ocupante sólo puede interferir en el sistema local de justicia por motivos de seguridad y/o para asegurar una administración efectiva de la justicia. La potencia ocupante, por su parte, puede desarrollar legislación, pero ésta nunca puede estar enfocada ni servir como medio para oprimir a la población ocupada.

El establecimiento de los Tribunales Militares se regula en el Artículo 66 de la IV Convención de Ginebra y debe hacerse siempre de acuerdo a tres principios esenciales:

- 1) Estar correctamente constituidas.
- 2) Estar situadas dentro del territorio ocupado.
- 3) No tener una finalidad política.

Otros documentos relevantes para enmarcar la constitución de Tribunales Militares en el derecho internacional serían el informe²¹⁷ publicado en 2005 por Emmanuel Decaux, Relator especial de la Sub-comisión de Promoción y Protección de derechos humanos, publicó en 2005, que establece una serie de principios rectores de la administración de justicia a través de tribunales militares, con la idea de proteger los derechos procesales de las personas allí juzgadas.

²¹⁶ *Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R) 18-10-1907 Tratado Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades*, CICR, 1996. Disponible online <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customs-war-on-land-5tdm39.htm> [Consultado 22 mayo 2016]

²¹⁷ Decaux, E. "Administration of justice, rule of law and democracy. Issue of the administration of justice through military tribunals" UNESCO. 2005

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, también publicó en 2011 un manual²¹⁸ en el que recogen 20 principios básicos que debían respetar las Tribunales Militares en su rol de administradoras de justicia, siendo algunos de ellos:

Principio No.4: Aplicación del Derecho Humanitario;

Principio No. 5: La jurisdicción de los tribunales militares para juzgar a civiles;

Principio N° 13: El derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial;

Principio No. 15: Garantía de los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo e imparcial.

II. Establecimiento de Tribunales Militares en el territorio palestino ocupado

El 7 de Junio de 1967, el mismo día que Israel toma militarmente los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania se aprueba la *Proclamation No. 2 Proclamation Regarding Regulation of Administration and Law, 1967*²¹⁹ (Proclamación N° 2, Sobre Ley y Administración) que anunciaba la toma de control de la administración y de los poderes sobre el mantenimiento de la seguridad y el orden público en el territorio ocupado. Mediante esta orden el Gobierno Militar asume todos los poderes en el territorio palestino:

“Art. 3 Toma de poderes

(a) toda la autoridad del poder público, la legislación, el nombramiento y de gestión propias de los residentes del área están ahora exclusivamente en mis manos y serán ejercidas únicamente por mí o por cualquier persona designada por mí o que actúe en mi nombre.”²²⁰

En 1970 se aprueba la Orden sobre Directivas de Seguridad, que pretende ser una suerte de código penal militar. Esta Orden ha sufrido más de 90 modificaciones hasta la

²¹⁸ NNUU doc. UNESCO “International Standard, Principles governing the administration of Justisce through Military Tribunals.” DCAF. 2011 Disponible online <http://www.dcaf.ch/Publications/International-Standard-Principles-Governing-the-Administration-of-Justice-Through-Military-Tribunals> [Consultado 22 mayo 2016]

²¹⁹ Proclamation No. 2 Proclamation Regarding Regulation of Administration and Law, 1967. Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil03?lang=en> [Consultado 22 mayo 2016]

²²⁰ *idem* Art. 3

fecha, siendo la última versión disponible la Orden sobre Directivas de Seguridad (Judea y Samaria) n° 378 5727 – 1967, de ahora en adelante la Orden n°378²²¹.

En función de la Orden sobre Directivas de Seguridad de 1967, se establecen Tribunales Militares de primera instancia en los distritos de Jerusalén, Hebrón, Jenin y el Oeste de Nablus, Este de Nablus, Ramala y Jericó. Actualmente, hay dos Tribunales Militares en funcionamiento en Cisjordania: el de Ofer, situado en la base militar de Ofer cerca de Ramala - Tribunal de Judea - y el de Salem – Tribunal de Samaria - situado al norte de Cisjordania en el distrito de Jenin, ambos en área B. El tribunal de Ofer además funciona desde 1989 como Tribunal de Apelaciones y Tribunal de Menores desde 2006. Sus veredictos sirven de guía para los de primera instancia y pueden ser recurridos en el Tribunal Supremo de Israel. Hasta su constitución, no hubo ningún otro tribunal de apelaciones para las decisiones emitidas por los Tribunales Militares de primera instancia²²².

La Orden n°374 establece dos tipos de tribunales de primera instancia presididos por uno o tres jueces en función de la dureza de las penas que pueden imponer: hasta 10 años de penas privativas de libertad para los primeros, ilimitadas para los segundos. En cuanto a la formación y capacitación de los jueces, cabe señalar que solamente desde el año 2004 ha comenzado a ser obligatorio que todos los miembros del tribunal tengan formación legal, anteriormente con que el presidente tuviese esta formación era suficiente²²³.

En 1990 se produce uno de los grandes cambios en el sistema de Tribunales Militares en Cisjordania: la ruptura de su subordinación al Comandante Militar del Ejército de Israel. Hasta ese momento todas las decisiones, sentencias y reglamentos de los TM estaban sujetas a la aprobación o posible rechazo del Comandante Militar. Con el fin de recortar el poder casi ilimitado que ostentaba esta figura, en 1990 se revocan dichos poderes.

²²¹ Order regarding Security Provisions [Consolidated Version] (Judea and Samaria) (No. 1651), 5770-2009. Disponible online

<http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01> [Consultado 22 mayo 2016]

²²² Yavne, L. "Backyard Proceedings. Implementation of due process rights in the Military Courts in the West Bank." *Yesh Din*. 2007, p. 45 Disponible online http://www.hamoked.org/files/2012/8521_eng.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²²³ *idem* p. 47

La subordinación del sistema de TM, incluyendo a sus jueces, a la *Military Advocate General's Corps* (Fiscalía General Militar) en 1967 respondía a una situación concreta en la que había una necesidad de desarrollar rápidamente un sistema legal en un territorio que acababa de ser ocupado²²⁴. Esta solución, cortoplacista, no se correspondía con la situación de ocupación prolongada que se da actualmente en Cisjordania. Durante todo este periodo los jueces de los TM y la fiscalía, han sido parte del mismo organismo: la *Military Advocate General's Corps*. El hecho de que jueces y fiscales formasen parte de un mismo organismo chocaba con el principio de igualdad entre la defensa y la acusación en un juicio por lo que 37 años más tarde, en Abril del 2006, se establece la Unidad de Tribunales Militares y se subordina ésta a los Tribunales Marciales, en los que también se juzga a las tropas del Ejército de Israel²²⁵.

En los últimos años ha habido otra serie de cambios significativo en el sistema, que se corresponde con una creciente extensión del sistema legal israelí al territorio ocupado. El TM de Apelaciones decretó que las sentencias emitidas por estos tribunales debían de estar inspiradas en la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad y se adoptaron e hicieron extensibles al territorio ocupado las cláusulas de arresto del Código Penal israelí y la posibilidad de solicitar al TM de Apelaciones que se desclasificaran pruebas consideradas “confidenciales”²²⁶. Si bien es cierto que estas medidas podrían, en teoría, suponer una mejora de las garantías procesales en los TM, en la práctica no se demuestra ningún cambio significativo, más allá de que pueda tomarse como un ejemplo más de la extensión del sistema legal de la potencia ocupante al territorio del pueblo ocupado, hecho contrario a la legalidad internacional²²⁷.

²²⁴ Yavne, L. “Backyard Proceedings. Implementation of due process rights in the Military Courts in the West Bank.” *Yesh Din*. 2007, p. 30-41. Disponible online http://www.hamoked.org/files/2012/8521_eng.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²²⁵ *idem*

²²⁶ La legislación israelí contempla la posibilidad de que determinadas pruebas no tengan que ser presentadas en un juicio si, habiendo sido certificado por el Primer Ministro o del Ministro de Defensa, estas pruebas pudieran suponer una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. La divulgación de dichas pruebas puede ser requerida por la defensa al Tribunal Supremo de Israel. La ley sobre Presentación de pruebas en Israel puede encontrarse en Evidence Ordinance, 1971. Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/israeli-domestic-legislation/evidence/evidence01#Chapter C: Privileged Evidence> [Consultado 22 mayo 2016]

²²⁷ IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, Artículo 64 Legislación penal. I. Generalidades <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm> [Consultado 22 mayo 2016]

Todas las decisiones de los TM pueden ser recurridas, como apuntaba anteriormente, al Tribunal Supremo de Israel. En un principio, el Tribunal Supremo tenía el mandato de supervisar la legalidad de las actuaciones militares en el territorio ocupado. Sin embargo, desde el año 1950 hasta el 1981 siguió una doctrina de “no justiciabilidad”²²⁸ y no interferencia en casos relacionados con la seguridad del Estado. Es decir, si el gobierno o el ejército de Israel alegaban que las posibles vulneraciones de derechos estaban en modo alguno justificadas por motivos de seguridad, el Supremo no interfería con aquellas decisiones en tanto y cuanto no se consideraba un organismo experto en seguridad; especialidad, por el contrario, del Ejército o Ministerio de Defensa. No será hasta 1981, con la sentencia de Baransa vs. Comandante del Frente Central, cuando el Tribunal cambie de postura, asegurando que era necesario revisar “escrupulosamente” el ejercicio de poder del Tribunal en estos aspectos y evitar auto-limitarse, alejándose en este sentido de la doctrina sentada en el caso de *Liversidge v. Anderson*²²⁹.

Meir Shagmar, nombrado Presidente del Tribunal Supremo en 1971, decidió aceptar a trámite las peticiones de personas palestinas que residían en el territorio recientemente ocupado, en vez de rechazarlas por haber sido presentadas por agentes enemigos o por ser hechos que ocurren fuera del territorio de Israel. Estableció, así, que el Tribunal tenía autoridad para juzgar a “todas aquellas instituciones que llevaran a cabo funciones públicas dentro de la ley”.²³⁰ Esto llevó a juzgar incluso acciones del Ejército de Israel en el Líbano durante la guerra del año 2006.²³¹

La jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Israel en el territorio ocupado ha sido desde sus inicios un asunto muy cuestionado, ya que en muchos casos se entendía

²²⁸ Esta doctrina se establece en la sentencia de *Al Ayubi vs. Ministro de Defensa*, 1950, inspirada a su vez en la jurisprudencia inglesa, *Liversidge v. Anderson*.

En Schmidt, Y. “Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories”. Tesis Doctoral, 2001 p. 20 Disponible online http://www.academia.edu/1967765/Foundations_of_civil_and_political_rights_in_Israel_and_the_occupied_territories [Consultado 22 mayo de 2016]

²²⁹ Cohen-Almagor, R. “Administrative detention in Israel and its employment as means of combating political extremism.” 9 *N.Y. Int'l L. Rev.* 1. 1999, p. 4 Disponible online <http://hcc.haifa.ac.il/~rca/articles/Administrative%20Detention%20in%20Israel.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

²³⁰ Kretzmer, D. “The law of belligerent occupation in the Supreme Court of Israel” *International Review of the Red Cross*. Vol. 94. 2012. Disponible online <https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-885-kretzmer.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

²³¹ Kretzmer, D. “The law of belligerent occupation in the Supreme Court of Israel” *International Review of the Red Cross*. Vol. 94. 2012, p. 209 Disponible online <https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-885-kretzmer.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

que lo que hacía el Tribunal era dar un respaldo legal a las acciones del Ejército, legitimándolas de cara a la población palestina y a la comunidad internacional, dando una apariencia de neutralidad y justicia. En el capítulo anterior se describen varias sentencias del Tribunal que respaldan decisiones políticas difícilmente aceptables desde el DIDH²³².

Un claro ejemplo de este tipo de decisiones es la posición Tribunal ante la Opinión Consultiva de la Corte Penal Internacional²³³ sobre la construcción del Muro y el establecimiento de asentamientos en Cisjordania.

El Tribunal desarrolla una postura en el caso de Alfei Menashe²³⁴ (2005) que se ha convertido en la postura oficial del mismo sobre la Opinión Consultiva hasta ahora. Sin haber llegado a pronunciarse ni a favor ni en contra de la construcción del Muro o de los asentamientos, el Tribunal apela al establecimiento de un juicio de proporcionalidad entre las necesidades militares y de seguridad del Estado de Israel y los derechos y bienestar de la población palestina residente en el territorio ocupado.

En el caso de Alfei Menashe se discute la petición presentada por varias personas palestinas residentes en la zona, representadas por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), que argumentan que la construcción del muro en sus tierras es ilegal y que debe ser desmantelado y construido dentro de los límites establecidos en la Línea Verde. Los demandantes explican también que en las medidas no cumplen con los estándares de proporcionalidad establecidos por el Tribunal Superior de Justicia en el caso de Beit Sourik²³⁵, ya que la construcción del Muro supone un grave perjuicio para los residentes de la zona.

²³² Ver p. 48-49 de este mismo trabajo para sentencias relacionadas con el Derecho a la Propiedad Privada, p.51 para aquellas relacionadas con Debido Proceso y Asesinatos extrajudiciales y p.55 para el Derecho a la Familia. El caso Beth El, analizado dentro de los Derechos de Propiedad Privada también serviría para ilustrar la posición del Tribunal en cuanto al equilibrio entre las necesidades militares y los derechos y bienestar de la población ocupada como personas protegidas.

²³³ Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción del Muro en el territorio ocupado (2004) Disponible online http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf [Consultado online el 20 mayo 2016]

²³⁴ HCJ 7957/04 Mara'abe v. The Prime Minister of Israel. Disponible online http://www.btselem.org/download/hcj7957_04_fence_surrounding_alfei_menashe_ruling.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²³⁵ HCJ 2056/04 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel. Disponible online http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/04/560/020/A28/04020560.A28.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

El Estado de Israel, por su parte, alega que existen motivos de seguridad para la construcción del muro, reconociendo el daño provocado a la población palestina residente en la zona y explicando que se habían llevado a cabo una serie de mejoras para equilibrar, en cierto modo, los daños causados por la construcción del Muro. El jurado de manera unánime acepta la petición de los demandantes, ordenando al Estado de Israel a, en un periodo de tiempo razonable, buscar soluciones alternativas al trazado actual del Muro. Asimismo, afirma que el área en cuestión es un territorio militarmente ocupado y sujeto por tanto al DIH. Sobre esta base el Tribunal argumenta que el comandante de la zona está autorizado a construir un muro para proteger las vidas y seguridad de los colonos israelíes. Además, el Tribunal añade que estas personas israelíes, residentes en los asentamientos del territorio ocupado, son titulares de los derechos constitucionales israelíes, debiendo ser tenidas en cuenta por tanto las Leyes Básicas para garantizar la seguridad, derechos de propiedad, libertad de movimiento y otros derechos disfrutados por cualquier persona que resida en Israel.²³⁶ El comandante militar, por tanto, tendría que tener en cuenta todos estos principios a la hora de tomar decisiones sobre el mantenimiento de la seguridad de la zona. Del mismo modo, tendría que buscar el equilibrio entre la seguridad del Estado y los derechos humanos de la población palestina.

En esta línea, el Tribunal argumenta que la Opinión Consultiva de la Corte Penal Internacional sobre la legalidad del Muro contiene información imprecisa²³⁷, ignorando en muchos casos las necesidades de seguridad del Estado de Israel. El Tribunal asegura que se hace una presentación extensa de las vulneraciones de derechos de la población palestina, pero que no se hace una valoración igualmente exhaustiva de las necesidades de seguridad por parte del Estado de Israel. El Tribunal considera que es necesario evaluar la construcción del Muro de manera individualizada, y no como un todo, tal como se plantea en la Opinión de la Corte.

Si bien en algunos casos, como el este de Alfei Menashe, el de Beit Sourik o el de Bil'in²³⁸ el Tribunal se ha posicionado a favor de los demandantes, en ninguna de estas

²³⁶ HCJ 7957/04 Mara'abe v. The Prime Minister of Israel. par.21. Disponible online http://www.btselem.org/download/hcj7957_04_fence_surrounding_alfei_menashe_ruling.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²³⁷ HCJ 7957/04 Mara'abe v. The Prime Minister of Israel. par.68. Disponible online http://www.btselem.org/download/hcj7957_04_fence_surrounding_alfei_menashe_ruling.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²³⁸ HCJ 8414/05. Disponible online

sentencias ha condenado de manera explícita ni las vulneraciones y ni el alarmante recorte de derechos que para la población palestina suponen la construcción del Muro, ni el régimen de ocupación asociado, según establece la Opinión emitida por la Corte Penal en 2004. Es más, no sólo no lo condena, si no que legitima tales acciones en pos de la seguridad el Estado, igual que sucede con algunas de las otras sentencias reflejadas en el capítulo anterior.

3.3 Sistemas legales aplicables a población israelí.

En este apartado revisaré cuáles son los mecanismos que se establecen para la rendición de cuentas de la población civil israelí que vive en el territorio ocupado. Esta falta de rendición de cuentas facilita un clima de impunidad y complicidad de las fuerzas de seguridad en los crímenes cometidos por colonos en Cisjordania que se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad de la zona y una de las principales fuentes de conflicto entre la población civil palestina autóctona de la zona y la población israelí desplazada al territorio ocupado.

La postura de la comunidad internacional con respecto a la legalidad de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado (Cisjordania y Jerusalén Este) ha alcanzado un alto grado de consenso, por lo que no me voy a detener demasiado en la misma: los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado vulneran la legalidad internacional²³⁹. A pesar de ello, me parece importante destacar la postura y argumentos del Gobierno de Israel en este sentido.

3.3.1 Mecanismos de aplicación de la ley y rendición de cuentas: impunidad, silencio y complicidades.

El marco legal aplicable a la población israelí residente el territorio ocupado es el mismo que se aplica dentro de las fronteras de Israel. Tal como se señala en el capítulo anterior, las personas israelíes que residen en el territorio ocupado son titulares de los mismos derechos constitucionales israelíes que sus conciudadanos que residen dentro de

http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/05/140/084/n25/05084140.n25.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²³⁹ NNUU doc. A/RES/56/61. “Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y en el Golán sirio ocupado.” *Asamblea General de Naciones Unidas* .2002.

las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, estando vigentes por tanto el contenido de las Leyes Básicas para garantizar la seguridad, los derechos de propiedad, libertad de movimiento y cualquier otro derecho disfrutado por cualquier persona que resida en Israel.²⁴⁰

Las autoridades competentes para la aplicación de la ley a la población colona israelí en Cisjordania se dividen en cuatro grupos: 1) Departamento de Policía del Distrito de Judea y Samaria; 2) El Ejército de Israel; 3) La Agencia Israelí de Seguridad y 4) la Administración Civil. De estos cuatro grupos el encargado de lidiar con delitos penales, apertura de investigaciones criminales e incluso de procesar delitos menores es el Departamento de Policía del Distrito de Judea y Samaria (de ahora en adelante, DPJS)²⁴¹.

El distrito de Judea y Samaria, que es tal como Israel se refiere al territorio ocupado de Cisjordania, se divide a su vez en dos grandes sub-distritos: el de Samaria, al Norte y el de Hebrón al Sur. Es el distrito más grande de todos los cubiertos por la policía de Israel. Según datos del Departamento de Policía, en 2013 había unos mil agentes destinados al DPJS, para atender a un total de tres millones de personas: 327,000 israelíes viviendo en 229 asentamientos y 2,632,000 palestinos/as que residen en 510 pueblos.²⁴² Algunos de los agentes que han sido destinados a la DPJS han denunciado la insuficiencia de recursos humanos destinados a la misma, así como la escasa profesionalidad y formación de los agentes. En una entrevista, un policía allí destinado afirmó que la DPJS era un “refugio para oficiales problemáticos”²⁴³

En 2013 se crea una nueva unidad, la *Nationalistic Crime Unit* (Unidad de Crimen Nacionalista, de ahora en adelante NCU) (con el objetivo de luchar contra crímenes ideológicamente motivados cometidos por la población colona sobre la palestina. Según la NCU, los actos que constituyen un crimen de odio nacionalmente motivado serían aquellos “definidos por actos criminales, incluyendo daños a personas o propiedades por

²⁴⁰ HCJ 7957/04 Mara'abe v. The Prime Minister of Israel. par.21. Disponible online http://www.btselem.org/download/hcj7957_04_fence_surrounding_alfei_menashe_ruling.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²⁴¹ Stahi, Z. “Mock enforcement. The failure to enforce the law on Israeli civilians in the West Bank” *Yesh Din*. 2015. Disponible online http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Akifat%20Hok_%20English.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

²⁴² *idem*.

²⁴³ *idem* p.36

un individuo o un grupo (en el que el infractor es un judío [de derechas o de izquierdas], árabe [israelí o palestino] o extranjero) que fueron ejecutados o planeados para influencias asuntos políticos, ideológicos o religiosos [...] Este listado incluye diferentes crímenes: daños corporales, crímenes contra la libertad o la propiedad, amenazas o extorsiones, intimidación, delito contra la propiedad pública y más, cuando dichos crímenes estén motivados por el racismo o el odio tal como lo define el estatuto”²⁴⁴.

La NCU se crea por el incremento de ataques de la población colona a la palestina, aunque de acuerdo a Yesh Din (organización israelí que trabaja en temas relacionados con violencia colona) los resultados no han sido tan buenos como se prometía. En una investigación²⁴⁵ publicada en 2015, como resultado de 10 años de monitoreo de actos de violencia de la población colona contra la palestina, Yesh Din muestra que la eficacia de las unidades policiales israelíes en Cisjordania para proteger los derechos de la población palestina es prácticamente nula. De la muestra de 1,067 casos analizados, un 34% se corresponden con denuncias por parte de la población palestina por violencia física, un 47% por daños a su propiedad (casas, tierras de cultivo, robos, etc), otro 14% se correspondería con denuncias por incautación de tierras palestinas por parte de colonos (a través de alambrados y vallas colocadas en tierras propiedad privada palestina por colonos) y el 5% restante se corresponde con otro tipo de ofensas que no entra en ninguna de las categorías mencionadas.

De los 1,067 casos, se han llevado a cabo y procesado 996 investigaciones completas. Tan sólo 7,4% de las denuncias procesadas (74) han supuesto con una condena para infractor. El resto de casos procesados se desestiman por errores en el procedimiento de investigación, en su gran mayoría (85,3%). Un alarmante número de 605 expedientes fueron cerrados porque la policía fue incapaz de encontrar al sospechoso, y otros 204, por falta de pruebas. Otros 11 expedientes se perdieron y nunca fueron investigados.²⁴⁶

Estos datos demuestran graves deficiencias en los procedimientos de investigación interna de las unidades de policía israelí, dificultando la rendición de cuentas e injusticiabilidad para la población colona que reside en el territorio ocupado y

²⁴⁴ *ibidem*.

²⁴⁵ *ibidem*.

²⁴⁶ *idem* p.36.

creando un ambiente de “todo vale”, que conlleva un detrimento sustancial de los derechos y libertades de la población palestina autóctona. Yesh Din denuncia que incluso en aquellos casos, pocos, en los que las personas infractoras son imputadas por haber cometido algún crimen contra la población palestina, las condenas y procesos de rendición de cuentas son aún menos habituales: sólo 6 de los 57 casos (10,5%) en los que los procesos legales se completaron acabaron con una condena.

La policía israelí tiene la obligación de proteger a la población palestina, como grupo de personas protegidas que viva bajo una ocupación militar. A la vista de los datos está que las unidades policiales no cumplen esta función. Además de los errores procedimentales en la instrucción de los casos y en las investigaciones policiales, el informe publicado por Yesh Din en 2015 señala otra serie de fallos estructurales del sistema policial israelí en Cisjordania a la hora de salvaguardar la seguridad de la población palestina:

- a) Reticencia de la población palestina para presentar quejas y denuncias ante la policía israelí: la población palestina desconfía de la policía israelí a la hora de presentar denuncias por varios motivos, entre ellos los más habituales son la falta de confianza en que las denuncias acaben en sentencias condenatorias, la dificultad para acceder a las dependencias policiales ya que muchas de ellas se encuentran en asentamientos y para acceder tienen que ir escoltados por la policía para prevenir ataques, trato humillante y vejatorio por parte de la policía cuando se acude a denunciar, o miedo a ser investigados – la persona que denuncia o sus familiares – por cualquier otro motivo y arriesgarse a perder por ejemplo permisos de trabajo para desplazarse a Israel. Muchas de las personas entrevistadas por Yesh Din recurrían a un proverbio árabe que puede traducirse como “Si tu enemigo es el juez, ¿a quién acudes para quejarte?”. Una de estas personas entrevistadas relata así su experiencia:

“Hemos presentado muchas quejas a la policía en el pasado, algunas de ellas con acompañamiento de Yesh Din, pero, por desgracia, la situación no ha cambiado, y si lo hizo, fue sólo para peor. Las quejas no detuvieron la violencia de los colonos – sólo la incrementaron. Los colonos están utilizando bombas molotov, cosa que no hacían cuando empezaron a atacar a [...]. Ahora, nuestros niños pequeños sufren de estrés

[...]. No tengo fe en el sistema israelí. Llegué a esa conclusión después de muchas quejas de que llevaban a ninguna parte.”²⁴⁷

- b) Falta de presencia policial en el terreno: Tal como se indicaba al comienzo, hay cuatro cuerpos encargados de garantizar la seguridad en Cisjordania: 1) Departamento de Policía del Distrito de Judea y Samaria (DPJS); 2) El Ejército de Israel; 3) La Agencia Israelí de Seguridad y 4) la Administración Civil. El Fiscal General del Estado den 1998, Elyakim Rubisnten²⁴⁸ definió por entonces las diferentes áreas de responsabilidad y separación de poderes entre ellas.

El DPJS depende del Comisario de Policía y del Ejército, a pesar de no estar oficialmente subordinado a este último depende de él para muchas de las operaciones que se llevan a cabo en Cisjordania y quien tiene más presencia en el terreno. Las unidades de la DPJS tienen que ir acompañadas de una escolta militar cuando realizan investigaciones en el terreno y esto no siempre sucede, por lo que en muchas ocasiones la policía llega tarde o no llega a las escenas del crimen, dificultando así los procesos de recolección de pruebas.

- c) Pasividad y falta de colaboración por parte del Ejército de Israel: Según el procedimiento para aplicación de la ley dictado por el Fiscal General Rubinstein, a pesar de que la policía es la última responsable de la aplicación de la ley, el Ejército no está exento de responsabilidades en esta materia. En la Sección 6 del mencionado procedimiento se establece que “Las disposiciones contenidas en esta sección no deberán interferir con la deber a cargo de las fuerzas del ejército para tomar cualquier acción necesaria para el tratamiento de personas heridas, prevenir la pérdida de vidas, daños físicos o daños a la propiedad, así como detener y detener a los sospechosos que pueden huir de la escena”²⁴⁹ En el protocolo de actuación interna del Ejército también se establece que “Cualquier soldado que sea testigo de un delito cometido por un israelí, contra cualquiera de las personas o los bienes, debe tomar medidas inmediatas para evitar / poner fin a la infracción, y si es necesario, para detener y arrestar a los delincuentes sospechosos, además de documentar y preservar la

²⁴⁷ *idem* p.69.

²⁴⁸ *idem* p.21

²⁴⁹ *idem* p.106

escena”²⁵⁰ En un informe del Controlador del Estado de 2013 se denuncia la falta de cumplimiento de estas directrices, coincidiendo asimismo con los datos recogidos por Yesh Din en su informe. En muchas ocasiones, el Ejército permanece impasible ante los ataques de colonos a población palestina, para evitar problemas con ellos. Los soldados también tienen la obligación de cooperar y testificar en las investigaciones policiales, a pesar de ello, la policía tienen grandes dificultades para encontrar soldados que hayan presenciado algún tipo de incidentes para que presten declaración de los mismos.

- d) Relaciones entre la policía y población civil israelí residente en Cisjordania: La policía mantiene estrechas relaciones con los líderes de la población colona, según la opinión de Yaakov Rahamim, Sub-comandante de Policía en Cisjordania, porque si no no sería posible trabajar de manera exitosa.²⁵¹ A pesar de estas afirmaciones, la practica y acciones del día a día deja una realidad muy distinta en la que la población colona muestra escaso o nulo interés en colaborar con la policía en la prevención del crimen. Es más, algunas de estas personas han tratado de convencer a la policía de que no aplique la ley a la población judía que reside en el territorio ocupado. En el verano del 2013, miembros de la población colona distribuyeron entre el Ejército y la policía un panfleto en el que se podía leer el siguiente texto:

“Está participando en un altercado contra Judíos y están creando "problemas?" No se moleste [...]. Disfrute del hecho de que no te permitan luchar contra ellos, disfrute de que ellos le detengan y que no le dejen pasar. Disfrute de ello, incluso si pinchan una rueda a su jeep. Sí, incluso si le dan una rueda pinchada. Usted no desea llevar a cabo estas misiones con éxito. Usted no quiere hacer daño a Judíos. ¿Y qué si hay Judíos en su camino? Es por su propio bien”²⁵²

Muchos de los policías ignoran o pretender no haber visto incidentes criminales perpetrados por la población colona, bien por miedo a sus amenazas o bien por su propio interés.

²⁵⁰ *idem* p.108

²⁵¹ *idem* p.113

²⁵² *idem* p.115. Cita original de la traducción al inglés “Taking part in an incident against Jews and they’re making “trouble?” Don’t get upset [...]. Enjoy the fact that they’re not letting you fight them, enjoy them holding you up and not letting you get through. Enjoy it even if they give your jeep a flat tire. Yes, even if they give you a flat tire. You don’t want to carry out these missions successfully. You don’t want to hurt Jews. So what if Jews are in your way? It’s for your own good”

- e) Dependencia de las opiniones del asesor legal de Judea y Samaria: En casos relacionados con allanamiento y construcciones ilegales, la policía depende de que la asesoría legal del distrito emita una opinión para que determinar quién ostenta la propiedad de la tierra en cuestión, antes de llevar a cabo ningún tipo de investigación. La agencia que tiene competencias para determinar la propiedad de las tierras es el Directorado de Propiedades Gubernamentales y Abandonas, a través de peticiones procesadas por el Directorado de División de Tierras y la Asesoría Legal. Estas opiniones pueden llegar a tardar meses o incluso años y la policía tiende a cerrar estas investigaciones.
- f) Negativa de la policía a investigar los aspectos criminales de las construcciones ilegales: Las construcciones ilegales tienen mucha relación con otros delitos ideológicamente motivados, como es el caso comentado anteriormente de los *outposts*. La falta de aplicación de la ley en estos casos es una fallo grave del sistema que facilita y permite que actos criminales sigan ocurriendo con total impunidad. En 2014 se cerró una investigación relativa a la construcción de una planta de aguas residuales que servía al asentamiento de Ofra, construida en tierras de propiedad privada de personas palestinas que residían en Ein Yabroud. La planta de aguas residuales no cumplía con los planes urbanísticos de la zona y no contaba con los permisos requeridos. El caso se cerró por “falta de interés público” y en las alegaciones, el juez explica que su decisión se basó en que hasta la fecha no se habían aplicado sanciones legales por este tipo de conductas, y que por tanto, no hubiera sido correcto hacerlo en este caso concreto. Añade también que no hubiera sido correcto sancionar penalmente esta conducta para que sirviera como base para futuras sanciones en este caso concreto, ya que la conducta en cuestión servía a un fin de uso público.²⁵³

Otra de las medidas utilizadas por la policía para aplicar la ley sobre la población civil israelí que reside en Cisjordania es la orden administrativa²⁵⁴, en base a lo establecido en

²⁵³ Según la información facilitada en el informe de Yesh Din, el caso ha sido apelado al Tribunal Superior de Justicia y está aún pendiente.

²⁵⁴ Este uso de la detención administrativa es diferente al aplicado a la población palestina, que veremos con más detalle en el capítulo 4 de este trabajo.

la Orden sobre Directivas de Seguridad.²⁵⁵ Este tipo de órdenes puede restringir el movimiento de algunas personas o su acceso a determinadas áreas. Se emiten por el Comandante General en Cisjordania bajo recomendación de la Agencia de Seguridad Israelí (ASI). La ASI presenta su investigación junto con una recomendación al Comandante General para que éste la firme, quedando sujetas a su juicio. Se emiten sin ningún proceso judicial y en la mayoría de los casos en base a pruebas confidenciales. Estas órdenes pueden ser recurridas en el sistema de justicia militar, pero al ser procedimientos basados en la gran mayoría de los casos en pruebas confidenciales las garantías y derechos de las personas objeto de dichas órdenes están bastante limitadas.

El uso de este tipo de medidas estaría justificado, según las autoridades israelíes, por su función preventiva, más que por su carácter punitivo. A pesar de esto, el extensivo uso que se hace de las mismas es preocupante, ya que parecen ser un sustituto de procesos criminales adecuados que garanticen un debido proceso. Entre 2005 y 2012 se emitieron 149²⁵⁶ órdenes administrativas contra personas israelíes, que se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) Prohibición de entrada a Cisjordania; b) Restricción de acceso a determinadas áreas; c) Supervisión especial, que puede suponer el residir en un área determinada, arresto domiciliario o no salir de su asentamiento.

El uso de órdenes militares ha sido criticado por todos los sectores: desde por aquellos que opinan que este tipo de medidas anti-democráticas no deberían ser utilizadas contra la ciudadanía israelí (esto no necesariamente implica que estén en desacuerdo con que se apliquen a la población palestina) hasta otros sectores, que afirman que el uso de órdenes administrativas supone un obstáculo para la obtención de pruebas y apertura de procesos judiciales que puedan conllevar condenas más duras. Este tipo de órdenes se ha utilizado para atajar muchos ataques de población colona contra población palestina, siendo insuficientes las medidas de protección y compensación a las víctimas que ofrecen dichas órdenes. Autoridades policiales argumentan que es extremadamente difícil obtener información de las personas acusadas durante las investigaciones, y que por tanto, la

²⁵⁵ Order regarding Security Provisions [Incorporated Version] (Judea and Samaria) (No. 1651) 2009, Secs. 296 (c-j), 297 (e-n), 298. Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁵⁶ Stahi, Z. "Mock enforcement. The failure to enforce the law on Israeli civilians in the West Bank" *Yesh Din*. 2015. P. 129. Disponible online http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Akifat%20Hok_%20English.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

opción de la orden administrativa es válida y además, en su opinión, consigue un efecto disuasorio.

Las deficiencias en los procesos e investigaciones policiales tienen un impacto directo en la impunidad de las actividades criminales de la población colona contra la población palestina. Estas deficiencias deben ser enmendadas para poder garantizar los derechos de la población palestina que reside en la zona y para cumplir con las obligaciones que, como potencia ocupante, Israel tiene en la zona.

3.3.2 Los asentamientos y su justificación ¿situación legal?

La Resolución de Naciones Unidas UNSCR 446 del 22 de marzo de 1979, determina que “la política y prácticas de Israel estableciendo asentamientos en los territorios palestinos y en otros territorios árabes no tienen validez legal y constituyen una seria obstrucción para el alcance de una paz comprehensiva, justa y duradera en Oriente Medio”²⁵⁷. En las posteriores Resoluciones de NNUU UNSCR 452²⁵⁸, 465, 471 y 476²⁵⁹, se remarca el argumento de que la construcción de asentamientos en territorio ocupado supone una vulneración de la IV Convención de Ginebra. En la misma línea, el 2004 la Corte Penal Internacional emite una detallada Opinión Consultiva denunciando la legalidad del Muro y su régimen de ocupación asociado. La Unión Europea²⁶⁰, Estados Unidos²⁶¹, un largo listado de organizaciones de derechos humanos²⁶² y un amplio

²⁵⁷ NNUU doc. “Resolución de Naciones Unidas UNSCR 446.” Disponible online <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0370/60/IMG/NR037060.pdf?OpenElement> [Consultado 22 de mayo 2016] (Traducción de la autora)

²⁵⁸ NNUU doc. Resolución 452 del 20 de Julio 1979 “Territories occupied by Israel” Disponible online <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0370/66/IMG/NR037066.pdf?OpenElement> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁵⁹ NNUU doc. Resolución 465 del 1 Marzo 1980; 471 del 5 Junio 1980; y 476 del 30 Junio 1980 “Territories occupied by Israel” Disponibles online <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1980.shtml> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁶⁰ “EU positions on the Middle East peace process”. Disponible online http://eeas.europa.eu/mepp/about/eu-positions/eu_positions_en.htm [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁶¹ US Department of State. “Israel/Palestinians: U.S. Position on Settlements”. 2011. Disponible online <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/175339.htm> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁶² Ver por ejemplo: Amnistía Internacional. “Informe Anual 2015/2016” Disponible online <https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/> [Consultado 22 de mayo 2016]

número de juristas y académicos internacionales²⁶³ han denunciado en repetidas ocasiones la ilegalidad de estas acciones y el impacto negativo de las mismas en cualquier futuro proceso de paz.

En enero del 2012, Benjamin Netanyahu nombra a un comité de juristas y expertos legales para examinar la legalidad de los llamados *outpost* –asentamientos no reconocidos como “legales”²⁶⁴ por el Gobierno de Israel–, así como para determinar si la presencia israelí en Cisjordania podía ser considerada o no como una ocupación.

Contrariamente a la posición expresada por la comunidad internacional, el comité hace una nueva interpretación, peculiar en todo caso, del derecho internacional y afirma que no se puede hablar de una ocupación israelí en el territorio palestino y que las provisiones de la IV Convención de Ginebra con respecto al traspaso de poblaciones no deben ser aplicadas. En las conclusiones²⁶⁵ se cita textualmente:

“Nuestra conclusión básica es que desde el punto de vista del derecho internacional, las leyes clásicas de la "ocupación" tal como se establece en los convenios internacionales pertinentes no pueden considerarse aplicable a las circunstancias únicas y *sui generis* históricas y legales de la presencia de Israel en Judea y Samaria que abarca más de décadas.

Además, las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, relativas a la transferencia de poblaciones, no pueden considerarse aplicables, y nunca fueron destinadas a aplicarse sobre el tipo de actividad de asentamientos llevada a cabo por Israel en Judea y Samaria.

Por lo tanto y de acuerdo con el derecho internacional, los israelíes tienen el derecho legal de establecerse en Judea y Samaria, y en consecuencia, el establecimiento de asentamientos no pueden de por sí ser considerados como ilegal.”

²⁶³ Ver por ejemplo: Langendor, M., Siddique, A. y Finkelstein, N. “Norman Finkelstein: Israel, Settlements and the ICC” *Fair Observer* . 2014. Disponible online http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/norman-finkelstein-israel-settlements-and-the-icc-02734/ [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁶⁴ Tal como queda claramente reflejado en el párrafo anterior, ningún asentamiento israelí construido en el territorio palestino ocupado puede ser considerado como legal de acuerdo al derecho internacional, independientemente de cuál sea la posición del Gobierno de Israel.

²⁶⁵ Israeli Government. “The Levy Commission Report on the Legal Status of Building in Judea and Samaria” pag 73-74. Disponible online <http://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/The-Levy-Commission-Report-on-the-Legal-Status-of-Building-in-Judea-and-Samaria.pdf> [Consultado 22 de mayo 2016]

A pesar de que oficialmente el Gobierno de Israel no ha adoptado oficialmente la postura planteada por el informe Levy, la realidad muestra un cambio de doctrina en este sentido: las embajadas y representaciones consulares de Israel en el exterior publicaron en 2015 un documento reflejando la postura oficial de Israel indicando que Cisjordania y Jerusalén Este no eran un territorio ocupado. El documento también afirmaba que los asentamientos eran legales y que no infringían la legalidad internacional²⁶⁶.

El Tribunal Superior de Justicia de Israel además ha hecho extensible esta legalización en los últimos años varios *outposts*, alegando que en realidad eran barrios o extensiones de asentamientos ya existentes.

El mensaje del Estado de Israel al Tribunal ha sido claro: aunque haya asentamientos que sean declarados ilegales, no van a ser desmantelados; más bien al contrario: si hay asentamientos cuya existencia sea contraria a la ley, se cambiará la ley para que deje de serlo. Un ejemplo de estas políticas es el caso del *outpost* de Amona, el mayor de toda Cisjordania, construido en propiedad privada palestina. En 2014 el Tribunal Supremo ordenó la evacuación del *outpost*²⁶⁷, dando de plazo hasta finales de 2016 para ello. El Gobierno, en vez de acatar la sentencia, ha presentado una propuesta de ley (Conocida como *re-ordering bill*) que se basa en una de las recomendaciones del informe Levy: si se reconoce que el *outpost* se ha construido sobre tierras privadas palestinas, es preferible la solución de ofrecer una compensación a las personas propietarias que la evacuación de los *outposts*. Por tanto, las personas propietarias de las tierras ocupadas por la población colona, se verán obligada a aceptar la compensación económica y renunciar a sus derechos de propiedad²⁶⁸.

²⁶⁶ Sthal, Z. "From Occupation to Annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive authorization of illegal construction in the West Bank" Yesh Din. 2016. Disponible online <http://www.yesh-din.org/en/from-occupation-to-annexation-the-silent-adoption-of-the-levy-report-on-retroactive-authorization-of-illegal-construction-in-the-west-bank> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁶⁷ Levinson, C "High Court Orders Demolition of Largest West Bank Outpost Within Two Years" *Haaretz* (2014) Disponible online <http://www.haaretz.com/israel-news/1.633843> [Consultado 22 mayo 2016]

²⁶⁸ Sthal, Z. "From Occupation to Annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive authorization of illegal construction in the West Bank" Yesh Din. 2016. Disponible online <http://www.yesh-din.org/en/from-occupation-to-annexation-the-silent-adoption-of-the-levy-report-on-retroactive-authorization-of-illegal-construction-in-the-west-bank> [Consultado 22 de mayo 2016]

Tras haber analizado tanto el sistema legal como algunas de las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Israel, podemos concluir que el sistema legal israelí muestra graves deficiencias en cuanto a la protección de derechos de la población palestina que vive en Israel, así como un claro tratamiento discriminatorio contra la misma, tanto desde una perspectiva formal como material.

4 ¿SISTEMAS LEGALES COEXISTENTES O CRIMEN DE APARTHEID?

La situación descrita en el capítulo anterior dibuja un panorama en el que coexisten varios sistemas legales. Esta situación podría corresponderse con el concepto de pluralismo jurídico, que se describe como la existencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo espacio social, una coexistencia de normas que deben ser obedecidas en un mismo territorio que pertenecen a sistemas jurídicos distintos²⁶⁹.

La coexistencia de diferentes sistemas jurídicos derivada de una visión pluralista del derecho no es un problema en sí mismo, es más, podría incluso permitir una mejor percepción de la realidad jurídica que una concepción monista²⁷⁰. Según algunos autores, el fortalecimiento de la idea de pluralismo jurídico tendría una estrecha relación con movimientos sociales que reclaman “reconocimiento y representación ante el Estado, (...) que buscan reorganizar la vida social y redefinir la vida política, que se debe ajustar a las nuevas realidades y a un imperativo de justicia y equidad (soportada en los derechos fundamentales) donde se encuentren espacios de participación comunitaria, tanto en la toma de decisiones y creación del mismo Derecho, para dotarlo de legitimidad y eficacia, redefiniendo el contrato social”²⁷¹

Si asumimos esta definición e implicaciones del concepto de pluralismo jurídico, una situación como la descrita en los capítulos anteriores en la que hay una simultaneidad de sistemas, pero que cuya pluralidad no busca una redefinición de la realidad social y jurídica, ni se ciñe a un imperativo de justicia social, no podría formar parte de esta concepción pluralista del Derecho ni podría ser definida como pluralismo jurídico. ¿Cómo coexisten y se relacionan entonces los diferentes sistemas entre sí?

²⁶⁹ Cabedo Mallol, V. *Pluralismo jurídico y los pueblos indígenas*. Icaria Academia, España. 2012, p. 15

²⁷⁰ Sánchez Castañeda, A. “Orígenes del pluralismo jurídico(1)” *La razón. La gaceta jurídica*. 2012. Disponible online http://www.la-razon.com/index.php?url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Origenes-pluralismo-juridico1_0_1694230639.html [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁷¹ Mendoza García, I. “Pluralidad de sistemas jurídicos y derogación de la norma” 2014, p.6. Tesis doctoral. Disponible online http://www.academia.edu/6762387/Pluralidad_de_sistemas_jur%C3%ADdicos_y_derogaci%C3%B3n_de_la_norma [Consultado 22 de mayo 2016]

En el caso de Israel y Palestina la coexistencia de sistemas se aprecia desde dos ámbitos diferentes: por un lado tenemos la coexistencia de los sistemas civiles y religiosos y por otro los sistemas civiles y militares.

En cuanto a la primera división, referida a la coexistencia de sistemas civiles y religiosos, no sólo hay que abordarlo desde la óptica diferencial entre lo civil y lo religioso, sino desde un trato diferenciado y discriminatorio entre de los múltiples sistemas religiosos que existen en un mismo lugar²⁷².

En los capítulos anteriores se han dado numerosos ejemplos de esta discriminación intergrupar, estableciéndose una superioridad jerárquica de una religión, la judía, sobre el resto y así como de las personas que profesan esta religión judía tienen que tienen un trato significativamente más favorable y disfrutan de más derechos que aquellas que profesan la religión cristiana o musulmana²⁷³.

Esta supremacía de la religión judía, o del uso que se hace de la misma, también se relaciona en cierto modo con el segundo de los ámbitos mencionados anteriormente: la separación entre los sistemas jurídicos civiles y militares. Tal como se detalla en el capítulo primero de este trabajo, la protección del valor judío como elemento central de las políticas de seguridad del Estado de Israel tiene una gran influencia en el desarrollo de las medidas legislativas, así como en el desarrollo del propio sistema jurídico. Estas influencias tienen un impacto profundamente negativo en la protección de los derechos de todo el colectivo de personas que no se identifican con ese valor judío del Estado²⁷⁴.

Así como la existencia de un código militar en Cisjordania y Gaza, y su simultaneidad con los otros sistemas jurídicos existentes en el territorio²⁷⁵, puede verse justificada por la situación de ocupación militar de dicho territorio. Tal como se detalla en el capítulo 3, la conceptualización y aplicación práctica del sistema militar instaurado

²⁷² Ver p.32 para más información los distintos marcos legales religiosos reconocidos en Israel y Palestina

²⁷³ Ver por ejemplo el apartado relativo a la Ley del Retorno, 1950 en p.27.

²⁷⁴ Ver p.10 para profundizar en la problemática que se deriva de situar a la religión como elemento central a proteger dentro de los valores del Estado ver: Gene Sharp, “En torno a la definición de seguridad nacional”, en Aguayo, S. y Bagley, B (ed) *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*, Siglo veintiuno editores, México, 1990.

²⁷⁵ Siendo estos: Los sistemas religiosos (el cristiano con sus distintas confesiones y el musulmán para la población palestina y el judío para la israelí), el sistema de mediación tradicional palestino, sistema civil israelí y sistemas internacionales de DIH y DIDH. Ver capítulo 3 de este trabajo para más detalle.

tampoco se adecuaba a los principios establecidos en la Convención de Ginebra, que establece en su Art. 64 la obligación de respetar la “legislación penal del territorio ocupado, salvo en la medida en que pueda derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones previstas en tal legislación”²⁷⁶

En una situación tal de coexistencia de sistemas, como es la de Israel y Palestina, en la que además, esta simultaneidad facilita el sometimiento de un grupo de la población y su opresión sistemática, vulnerando gravemente el principio de igualdad ante la ley, no sólo no podremos hablar de pluralismo jurídico ni de coexistencia de sistemas legales, la pregunta que debemos plantear abiertamente es ¿podemos hablar de crimen de Apartheid contra el pueblo palestino?

Cada vez son más las voces²⁷⁷ que señalan que lo que ocurre en Israel y Palestina no puede verse reducido a la ocupación militar de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. La situación de la población palestina que reside dentro de las fronteras de Israel, la represión de las voces críticas con el sistema y la negación del derecho al retorno a las más de 6 millones de personas refugiadas suponen graves vulneraciones de los derechos del pueblo palestino, que no se resuelven únicamente poniendo fin a la ocupación militar de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En este último trataré de responder a la preguntada planteada anteriormente de si es posible hablar de un crimen de Apartheid contra el pueblo palestino en base a los criterios establecidos por el DIH y el DIDH.

²⁷⁶ IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, Artículo 64 Legislación penal. I. Generalidades
<https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm>

²⁷⁷ Algunas de las últimas publicaciones académicas sobre el tema se pueden encontrar en: Pappe, I (Ed) *Israel and South Africa, The many faces of Apartheid*. Zed Books, Londres. 2015; o también Jacobs, S. (Ed), Soske, J. (Ed) *Apartheid Israel: The Politics of an Analogy*, Chicago, Haymarket Books, London, Zedbooks. 2015.

4.1 Elementos constitutivos del crimen de Apartheid

El crimen de Apartheid se tipifica en su momento para denunciar y dar respuesta a la situación de discriminación racial de la Sudáfrica de finales del siglo pasado. La palabra *Apartheid* es un término sudafricano que significa separación. A pesar de que, afortunadamente, ya se haya puesto un punto y final a este oscuro periodo de la historia, el Apartheid sigue constituyendo un crimen de lesa humanidad y sigue estando, por tanto, condenado por la legalidad internacional²⁷⁸.

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid²⁷⁹ (1973) (de ahora en adelante la Convención) es el marco legal de referencia en lo que respecta al crimen de apartheid, aunque también existen otros marcos legales complementarios:

- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial²⁸⁰ (1965).
- Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad²⁸¹ (1968).
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional²⁸² (1998).

La Convención define el Apartheid como una serie de *actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente*²⁸³.

²⁷⁸ Dugard, J “Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.” *UN Audiovisual Library of International Law*. 2008. Disponible en http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cspca/cspca_e.pdf [Consultado online el 20 mayo 2016]

²⁷⁹ La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973) Disponible en <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf> [Consultado online el 20 mayo 2016]

²⁸⁰ Art. 3 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx> [Consultado online el 20 mayo 2016]

²⁸¹ Art. 1 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx> [Consultado online el 20 mayo 2016]

²⁸² Art 7 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Disponible en [http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf) [Consultado online el 20 mayo 2016]

²⁸³ La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973) Disponible en <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf> [Consultado online el 20 mayo 2016]

En el artículo II²⁸⁴ se recogen de manera más detallada cuáles son aquellos actos constitutivos del crimen de Apartheid, siendo estos:

“a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:

- I. Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
- II. Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
- III. Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

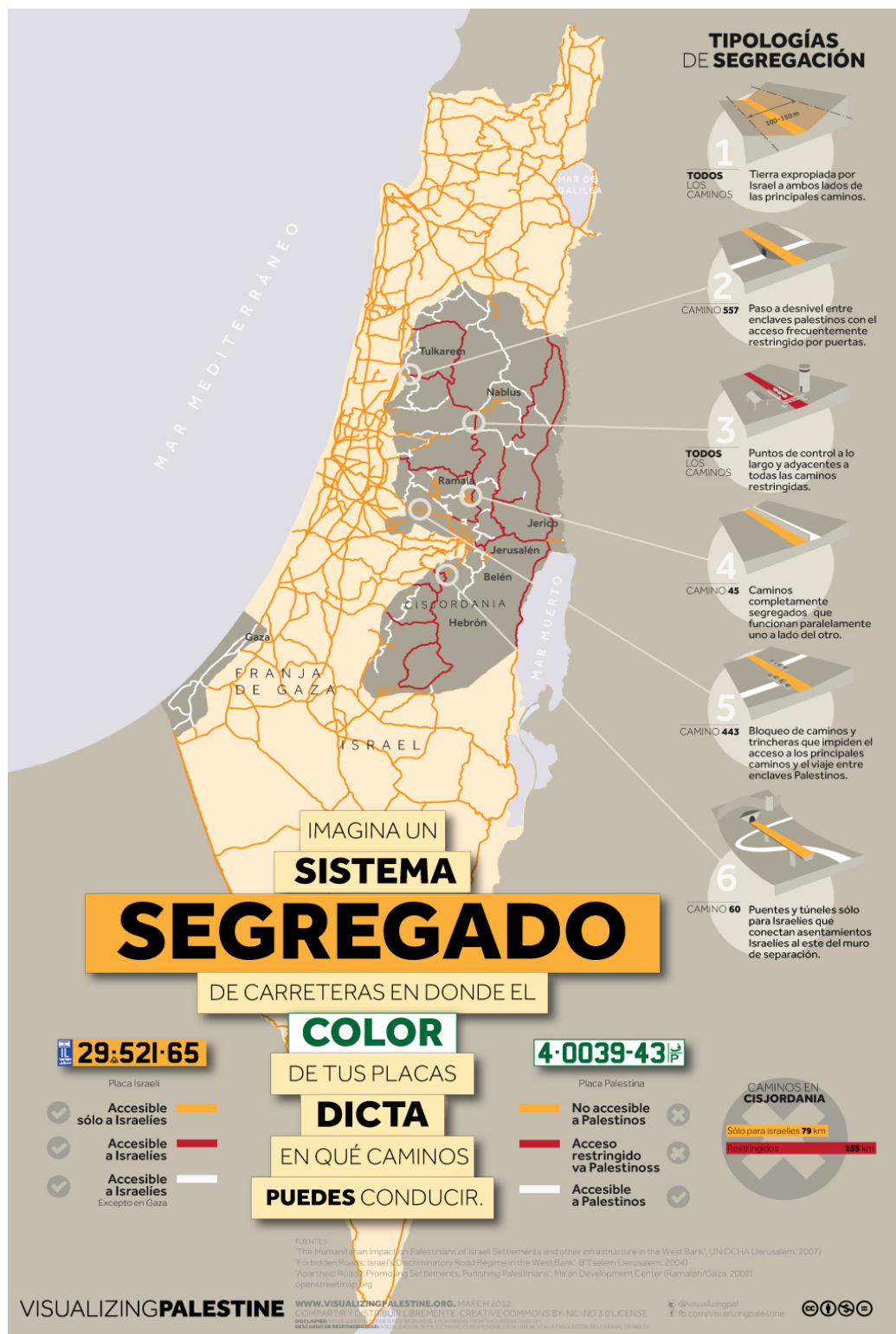
c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales.”

²⁸⁴ *ídem*



Carreteras segregadas²⁸⁵. Fuente: Visualizing Palestine

²⁸⁵ Carreteras Segregadas: Los coches con matrícula palestina no tienen permiso para circular por carreteras israelíes, independientemente del estatus legal o documento de identidad de la persona que lo conduce. La

4.2 Crimen de Apartheid contra el pueblo Palestino: Vulneraciones por parte de Israel de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

En este apartado expondré cómo el sistema represivo y de discriminación promovido por el Gobierno de Israel cumple con todos y cada uno de los criterios establecidos por la Convención para poder hablar de crimen de Apartheid contra el pueblo palestino. Para ello seguiré como índice el desglose de los actos constitutivos del crimen de Apartheid recogidos en el artículo II de la Convención y estableceré una correspondencia entre estos actos y aquellos llevados a cabo por el Gobierno de Israel. Me basaré en ejemplos tomados de la propia legislación interna israelí que complementaré con informes de distintas agencias de NNUU, relatorías especiales u otras organizaciones no gubernamentales expertas en la documentación de vulneraciones de DDHH.

Antes de entrar en el detalle de cada uno de los actos descritos en la convención, me parece importante referirme a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción del Muro en el territorio ocupado²⁸⁶ Aunque no se refieran de manera específica al crimen de Apartheid, las conclusiones principales de la Opinión también ayudan a identificar muchos de los actos descritos en la Convención. Si bien no voy a entrar a analizarla en este espacio, sí me parece relevante señalar cuáles son estas conclusiones. El cuadro resumen elaborado por Cocini y Bondia (2009) presentado en la página siguiente recoge brevemente las principales conclusiones emitidas por la Corte.

infografía representa este sistema de carreteras segregadas en el que el color de la matrícula de tu coche (amarilla para coches israelíes, blanca para palestinos) determina tu libertad de movimiento. Más información sobre la infografía disponible online en <http://visualizingpalestine.org/visuals/segregated-roads-west-bank>

²⁸⁶ Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción del Muro en el territorio ocupado (2004) Disponible online http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf [Consultado online el 20 mayo 2016]

Principales conclusiones que reafirman cual es el derecho aplicable a los Territorios Palestinos Ocupados en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario

- a) El pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación y la construcción del muro menoscaba gravemente el ejercicio de ese derecho;
- b) Israel tiene la obligación legal de aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra en los territorios palestinos ocupados;
- c) Los asentamientos son ilegales porque contravienen el párrafo 6 del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra;
- d) Israel está obligado a aplicar los convenios y convenciones internacionales de derechos humanos en el territorio palestino ocupado y, por consiguiente, su conducta deberá evaluarse a la luz de los convenios y convenciones internacionales de derechos humanos y del Cuarto Convenio de Ginebra;
- e) El régimen vigente en la zona cerrada situada entre el muro y la Línea Verde obstaculiza el derecho a la libertad de circulación garantizado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho al trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
- f) La destrucción de bienes para construir el muro contraviene el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra y no está justificada por motivos de necesidad para las operaciones militares ni de seguridad nacional;
- g) El muro no puede justificarse por motivos de legítima defensa;
- h) La anexión de Jerusalén oriental es ilegal;
- i) La construcción del muro por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y el régimen conexo, son contrarios al derecho internacional; e Israel está obligado por ley a detener la construcción del muro, a desmantelarlo y a reparar los daños causados por su construcción;
- j) Todos los Estados tienen la obligación jurídica de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de hacer que Israel respete el Cuarto Convenio de Ginebra;
- k) Las Naciones Unidas, y en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deberían considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de régimen conexo, "teniendo debidamente en cuenta la presente opinión consultiva.

Resumen tomado del trabajo "Apartheid contra el pueblo palestino"²⁸⁷.

Si nos fijamos en los elementos que según el Grupo de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas caracterizaban al régimen Sudafricano²⁸⁸, y tratamos buscar similitudes con las prácticas que a las que el régimen de discriminación que Israel somete a día de hoy a la población palestina, no tendremos muchas dificultades para hacerlo. En el siguiente cuadro comparativo se detallan algunos ejemplos.

Apartheid Sudafricano 1948 – 1990	versus	Israel – Palestina 2016
“Política de bantustanes”, que creaba zonas reservadas a determinados grupos raciales.	<i>versus</i>	Política de los asentamientos o zonas residenciales sólo judía ²⁸⁹ .
Reglamentos relativos a la circulación de los africanos negros y asiáticos en las zonas urbanas	<i>versus</i>	Actualmente los coches con matrículas palestinas no tienen autorización para circular por carreteras israelíes o sufren grandes restricciones para hacerlo. Además, tienen que pasar por múltiples puestos de control y están expuestos a cierres o bloqueos arbitrarios que restringen gravemente su libertad de movimiento ²⁹⁰ .

²⁸⁸ NNUU doc. E/CN.4/1075 “Human Rights Commission, Study Concerning the Question of Apartheid from the Point of View of International Penal Law.”, 1972, p 51-52.

²⁸⁹ Kosharek, N “Supreme Court Backs Jews-only Housing in Jaffa Neighborhood.” *Haaretz*. 2010 Disponible en <http://www.haaretz.com/israel-news/supreme-court-backs-jews-only-housing-in-jaffa-neighborhood-1.323421> [Consultado online el 5 mayo 2016]

²⁹⁰ NNUU doc. “The Humanitarian aspect on Palestinians of Israeli Settlements and other infrastructure in the West Bank.” OCHA. 2007 Disponible en http://www.ochaopt.org/documents/thehumanitarianimpactofisraeliinfrastucturethewestbank_intro.pdf [Consultado online el 5 mayo 2016]

La política demográfica, que tenía como objetivo reducir el número de la población negra, mientras se favorecía la inmigración blanca

versus

Las leyes mencionadas en el capítulo anterior sobre el Derecho al Retorno de la población judía²⁹¹, y la negación sistemática del mismo derecho a la población palestina, así como la conocida como la ley de ciudadanía²⁹², son claros ejemplos de estas políticas demográficas discriminatorias.

El encarcelamiento y los malos tratos de los dirigentes políticos no blancos y de los presos no blancos en general.

versus

La detención administrativa, el uso de un sistema militar contra población civil palestina con ratios de sentencias condenatorias del 99,9%²⁹³ o las abrumadoras diferencias de garantías procesales de las que disfrutaban unos y otros grupos, son algunos de los ejemplos de la presencia de este elemento en el sistema israelí de hoy en día.

Elaboración propia.

²⁹¹ Ley Derecho al Retorno, *Law of Return*, 5710-1959 Disponible en <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/lawofreturn.htm> [Consultado online el 5 mayo 2016]

²⁹² Ley de Ciudadanía, *Citizenship Law*, 5712-1952 Disponible en <http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/nationalitylaw.htm> [Consultado online el 5 mayo 2016]

²⁹³ Baumgarten-Sharon, N., Stein, Y. Presumed Guilty: Remand in Custody by Military Courts in the West Bank, 2015. Disponible online http://www.btselem.org/download/201506_presumed_guilty_eng.pdf [Consultado online el 5 mayo 2016]

A continuación, voy a desglosar cada uno de los actos descritos en el Art. II de la Convención y proporcionar ejemplos de actos similares perpetrados por el Gobierno de Israel contra la población palestina residente en Israel, en el territorio ocupado de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este y contra la población palestina en el exilio.

4.2.1 El Derecho a la vida y a la libertad de la persona

El artículo II.a de la Convención establece que los siguientes actos son constitutivos del crimen de Apartheid:

“a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:

- I. Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
- II. Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
- III. Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales”

A continuación, expongo qué actos perpetrados por el Gobierno de Israel se corresponden con los definidos en este apartado de la Convención.

4.2.1.1 Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales

Según el informe de 2015/16²⁹⁴ de Amnistía Internacional, un total de 156 personas palestinas habrían sido asesinadas a manos del soldados y policías israelíes entre Octubre del 2015 y Abril del 2016 (124 personas en Cisjordania y Jerusalén Este, 22 en la Franja de Gaza y 10 dentro de Israel)

En el capítulo segundo²⁹⁵ también se describe la posición del Tribunal Superior de Justicia de Israel sobre esta práctica, analizando el caso de *Al Daraj*, exponiendo el rol

²⁹⁴ Amnistía Internacional. “Informe Anual 2015/2016” Disponible online <https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/> [Consultado 22 de mayo 2016]

²⁹⁵ Ver p. 54

legitimador que ejerce este tribunal en casos de asesinatos extrajudiciales a supuestos terroristas y la falta de investigaciones garantistas en este tipo de situaciones.

4.2.1.2 Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Israel ratifica la Convención Contra la Tortura (CAT) en 1991²⁹⁶. A pesar de que a día de hoy el Gobierno de Israel continúa ocupando militarmente el territorio palestino, Israel considera que las disposiciones de la CAT no son aplicables en dicho territorio, por lo que los informes que presenta al Comité de seguimiento se refieren única y exclusivamente a hechos, datos y casos dentro de las fronteras del Estado de Israel. Esta negativa a aplicar las disposiciones establecidas por la Convención ha vuelto a ser marcada como una fuentes principales de preocupación por parte del CAT en su último informe de mayo del 2016²⁹⁷.

Junto con esta recomendación, el Comité insiste en que el uso de la tortura no está justificado bajo ninguna situación, incluyendo las amenazas a la seguridad y en cualquier caso estas provisiones deben ser incorporadas a la legislación israelí de manera específica²⁹⁸.

La sentencia “ H CJ 5100/94 Public Committee Against Torture in Israel v. The State of Israel”²⁹⁹ ilustra de una manera muy clara la posición del Tribunal sobre uso de la tortura en interrogatorios a personas palestinas acusadas de terrorismo. El Servicio General de Seguridad israelí³⁰⁰ (SGS) había sido acusado de aplicar “técnicas físicas de interrogatorio” que constituirían prácticas de tortura y que eran ilegales. La respuesta del Estado fue que este

²⁹⁶ Listado de países signatarios de la Convención Contra la Tortura. Disponible online https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en [Consultado online el 5 mayo 2016]

²⁹⁷ NNUU doc. “Concluding observations on the fifth periodic report of Israel”. Committee against Torture. 2016, par. 7. Disponible online http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ISR/INT_CAT_COC_ISR_23917_E.pdf [Consultado online el 25 mayo 2016]

²⁹⁸ *idem* par. 14 y15.

²⁹⁹ Barak, A. *Israeli Supreme Court, Judgements of the Israeli Supreme Court: fighting terrorism within the Law*, The Supreme Court of Israel, Tel Aviv (s.f.).

³⁰⁰ El SGS es la actual Agencia de Seguridad Israelí, más conocida como *Shin Bet*, por sus siglas en hebreo. Es la Agencia israelí de contra-inteligencia y de servicios de seguridad interna. Más información <https://www.shabak.gov.il/english/Pages/default.aspx>

tipo de técnicas sólo se aplicaban en casos excepcionales en los que había una necesidad urgente de obtener información, conocidos como *ticking bombs*.

En la sentencia se plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de las personas detenidas a no ser sometidas a tortura y la importancia de la obtención de información clave para la protección del Estado.

En su dictamen, sorprendentemente, el Tribunal no entra a cuestionar los métodos utilizados, si no que se centra en determinar si el SGS estaba autorizado para interrogar a los sospechosos. El Tribunal entiende, y así lo recoge la sentencia, que efectivamente el SGS sí está autorizado para llevar a cabo tales interrogatorios y con respecto a la pregunta de si los métodos son o no proporcionales, el Tribunal sólo establece que la aplicación de los mismos en circunstancias excepcionales debe requerir de una autorización expresa.³⁰¹

El PCATI, (Comité Público Contra la Tortura en Israel por sus siglas en inglés) denuncia en el informe sombra³⁰² remitido al CAT que la aplicación de estas “medidas excepcionales” es menos excepcional de lo que debiera, listando una serie de prácticas empleadas habitualmente contra población reclusa palestina, sobre todo durante los interrogatorios, que no están catalogadas como tortura por la legislación israelí pero que si pueden serlo desde la legislación internacional. Muchas de estas prácticas, aunque no todas, se denuncian durante los llamados “interrogatorios militares” o “interrogatorios de necesidad” y son aplicadas sobre la presos palestinos por la Agencia de Seguridad Israelí (ASI o *Shin Bet*) Estas tácticas son descritas de manera eufemística por el Estado como “medidas especiales” e incluyen golpes y violencia física, privación del sueño, posiciones estresantes como la “rana” o la “banana” o abusos sexuales³⁰³. Desde 2001, PCATI ha registrado más de 1,000 quejas por abusos y tortura durante estos interrogatorios. Según los datos³⁰⁴ de PCATI, las personas con más probabilidades estadísticas de ser torturadas son:

³⁰¹ *idem*

³⁰² Public Committee Against Torture in Israel. “Independent report to the UN Committee Against Torture towards the review of the fifth periodic report on Israel” 2016. Disponible online http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNGO%2fISR%2f23475&Lang=en [Consultado online el 25 mayo 2016]

³⁰³ *idem* p. 7

³⁰⁴ Public Committee Against Torture in Israel. “Independent report to the UN Committee Against Torture towards the review of the fifth periodic report on Israel” 2016. Disponible online http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNGO%2fISR%2f23475&Lang=en [Consultado online el 25 mayo 2016]

- Hombres, mujeres o jóvenes palestinos acusados o sospechosos de atentar contra la seguridad el Estado o de incitar a revueltas ilegales.
- Personas palestinas residentes en Israel o sirias en los Altos del Golán
- Solicitantes de asilo eritreos o sudaneses
- Jóvenes etíopes o disidentes políticos, en menor proporción.

Además de estos casos de denuncias de torturas y otros tratos degradantes sufridos por personas palestinas en cárceles israelíes, durante interrogatorios de la ASI o bajo detención, hay otras muchas situaciones del día a día que pueden ser consideradas como atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad del pueblo palestino. A continuación presentaré algunas de ellas.

Las extremas limitaciones del movimiento, provocadas por la construcción del Muro y los más de 543 obstáculos³⁰⁵ (puestos de control permanentes o móviles, bloques de cemento en carreteras...etc.) minan todo el territorio de Cisjordania, así como el sistema de carreteras segregadas tienen un fuerte impacto sobre la población palestina que reside en ese territorio. El Muro construido por Israel Pero el Muro no sólo afecta su libertad de movimiento; también limita drásticamente sus medios de vida. A día de hoy hay 150 comunidades palestinas que tienen sus tierras de cultivo entre el Muro y la línea verde³⁰⁶. Esto provoca un efecto devastador en la economía palestina. Las familias que tienen sus tierras al otro lado del Muro, o entre el Muro y la Línea Verde, dependen de permisos emitidos por Israel para poder cultivar sus tierras. El ratio de aprobación de estos permisos es del 50%, según fuentes de la OCHA.³⁰⁷

Aproximadamente, unas 11,000 personas palestinas viven aisladas del resto de la comunidad y de su entorno social por el Muro. Necesitan de permisos para poder acceder a sus puestos de trabajo, a la escuela o a servicios de salud básicos. Como es de esperar,

³⁰⁵ NNUU doc. "Movement restrictions on West Bank roads tightened" OCHA, Occupied Palestinian Territory, 2016. Disponible online <https://www.ochaopt.org/content/movement-restrictions-west-bank-roads-tightened> [Consultado 22 mayo 2016]

³⁰⁶ El trazado del Muro debía respetar la denominada "Línea Verde", o fronteras del 67, que se corresponden con los límites internacionalmente reconocidos del territorio israelí. Actualmente un 85% del trazado del Muro se encuentra dentro de Cisjordania, es decir, dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas como territorio palestino.

³⁰⁷ NNUU doc. "10 years since the International Criminal Court Advisory Opinion" OCHA, Occupied Palestinian Territory, 2014. Disponible online http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

esto tiene un impacto muy negativo en el desarrollo de la población palestina, no sólo desde un punto de vista económico, también desde un punto de vista psicológico y social.

La reciente reinstauración de las demoliciones punitivas, denunciadas también por NNUU, constituye una forma de castigo colectivo y es un hecho “inherentemente injusto que castiga a personas inocentes por los actos de otras” y constituyen una flagrante vulneración del DIH.³⁰⁸ Estas demoliciones tienen un impacto tremendamente negativo en la población civil, exponiendo a personas inocentes a situaciones de vulnerabilidad extrema.

Estas prácticas promovidas por el Gobierno de Israel en pos de la seguridad como medidas que desalienten futuros actos terroristas muestran este enfoque securitizado de la justicia que se critica en el capítulo 1 de este trabajo. En lugar de promover un enfoque de seguridad humana, que garantice los derechos de todas las personas a vivir sin miedo, libres de miseria y con libertad para decidir sobre su propia vida, se aplican unas políticas del miedo, represivas y punitivas en las que personas inocentes acaban pagando altos precios por crímenes que no han cometido, sin que esto parezca tener ningún impacto positivo en la seguridad del entorno. Además, al aplicarse sólo a población palestina, constituyen una práctica profundamente racista y discriminatoria que vulnera no sólo los derechos individuales de las personas afectadas, si no los derechos colectivos del pueblo palestino como grupo.

4.2.1.3 Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales

La figura de la detención administrativa aplicada a personas palestinas en el territorio ocupado supone una práctica de detención arbitraria, proporcionando un marco legal para que personas palestinas sean encarceladas durante largos periodos sin ningún tipo de acusación ni juicio previo.

Tres herramientas legislativas diferentes regulan esta práctica:

³⁰⁸ Samuel, M. “Punitive House Demolitions in the West Bank: The Hague Regulations, Geneva Convention IV, and a Jus Cogens Bypass.” *6 Berkeley J. Middle E. & Islamic L. 1*. 2014. Disponible online <http://scholarship.law.berkeley.edu/jmeil/vol6/iss1/3> [Consultado 22 mayo 2016]

- En Israel, la Ley de Regulación de Poderes (Detenciones) de Emergencia – (1979)³⁰⁹ (de ahora en adelante la Ley de Emergencia)
- En la Franja de Gaza, la Ley de Combatientes Ilegales – (2005)³¹⁰ y
- En Cisjordania, Orden sobre Directivas de Seguridad [Versión Consolidada] (Judea y Samaria) (No. 1651), (5770-2009)³¹¹ (de ahora en adelante la Orden n° 1651)

A pesar de que todas ellas están en vigor su aplicación varía sustancialmente: la primera de ellas, válida en Israel, rara vez se utiliza, en cambio, las dos últimas, sobre todo la Orden n°1651, son una herramientas bastante cotidianas.

La Ley de Combatientes Ilegales (2005) tiene su origen en una ley aprobada en 2002 mediante la que se permitía al Estado de Israel retener a prisioneros de guerra libaneses encarcelados alegando motivos de seguridad. En el año 2000 Aaron Barak como Presidente del Tribunal Supremo había dictado una sentencia³¹² por la que ordenaba al Estado de Israel a liberar a 13 presos libaneses que habían sido capturados entre 1986 y 1987, puestos desde entonces en detención administrativa por pertenecer a organizaciones hostiles al Estado de Israel y por su participación en actividades terroristas. Desde entonces no se habían presentado cargos criminales contra ellos, permaneciendo en prisión únicamente por esas órdenes administrativas que iban siendo renovadas cada cierto tiempo. En su decisión, Barak argumentaba que Israel no podía mantener a estas personas encarceladas y utilizarlas como “monedas de cambio” sin que se probase que éstas presentaban una amenaza contra la seguridad del Estado, por lo que ordena la liberación de las mismas.

Con el fin de legitimar este tipo de detenciones, se aprueba en el año 2002 la Ley de Combatientes Ilegales. Esta ley define a los combatientes ilegales como personas que participan directa o indirectamente en actos hostiles contra el Estado de Israel, pero que

³⁰⁹ Emergency powers (detention) law, 5739 – 1979. Disponible online http://www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

³¹⁰ Incarceration of Unlawful Combatants Law, 5762-2002 http://www.hamoked.org/files/2011/240_eng.pdf [Consultado 22 mayo 2016]

³¹¹ Chapter I - Administrative Orders (271-315) Order regarding Security Provisions 5770 – 2009. Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01/67-security-provisions-chapter9-271-315> [Consultado 22 mayo 2016]

³¹² Anonymous (Lebanese citizens) v. Minister of Defence, FCrA 7048/97, Supreme Court, 12 April 2000. Disponible online <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/0/3B8E62D1B405B80AC125765100282A0D> [Consultado 22 mayo 2016]

según Israel no pueden ser catalogadas como prisioneros de guerra en base al Derecho Internacional, ni disfrutar por tanto del trato asociado a ese reconocimiento. A pesar de que todos los presos libaneses fueron puestos en libertad en 2004 la ley siguió vigente, pasando a aplicarse a la población palestina de la Franja de Gaza tras el plan de retirada de Israel de la zona en 2005.

La Ley de Combatientes Ilegales establece aún menos garantías si cabe que las otras dos (Ley de Emergencia y Orden nº1651) ya que las personas pueden ser retenidas por periodos de tiempo ilimitados (las órdenes no se limitan a seis meses renovables como en los otros casos), los plazos para la revisión judicial de la orden de detención son de 14 días (en contraposición de los 8 establecidos para Cisjordania y los 2 en Israel) y esta revisión judicial es también es menos frecuente. Además, se establece que la puesta en libertad de una persona considerada como un combatiente ilegal es una amenaza para la seguridad del Estado a no ser que se demuestre lo contrario, recayendo sobre la persona detenida el peso de la prueba y vulnerando el principio de presunción de inocencia. Hasta la fecha 54³¹³ personas han sido detenidas bajo esta ley, la mayoría de ellas coincidiendo con periodos de ataques del ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

La Orden sobre Directivas de Seguridad [Versión Consolidada] (Judea y Samaria) (No. 1651), 5770-2009 (Orden nº 1651) permite al comandante militar de la zona detener a una si existen fundamentos razonables para creer que esta persona “debe ser detenida por motivos relacionados con la seguridad regional o con la seguridad pública”³¹⁴.

Cuando una persona es detenida en Cisjordania, hay un periodo de ocho días para 1) ser enviada a un centro de interrogatorio; 2) ser acusada de algún delito; 3) recibir una orden de detención administrativa o 4) ser liberada. En el caso de que la persona reciba una orden de detención administrativa pueden pasar hasta ocho días más para que la persona sea llevada ante un Tribunal para revisar la decisión en una vista privada, ya que en estos casos, la persona detenida no tiene derecho a un juicio público. Además, el juez también puede admitir pruebas y pronunciarse sobre las mismas sin que la persona

³¹³ Addameer “On Administrative detention” Disponible online http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/administrative_detention [Consultado 22 mayo 2016]

³¹⁴ Art. 271 Orden nº 1651. Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01> [Consultado 22 mayo 2016]

detenida o su representante legal estén presentes o ni tan siquiera conozcan dichas pruebas, si considera que éstas pueden suponer un riesgo para la seguridad pública o regional.³¹⁵ En este juicio se establece el periodo de detención, que no puede ser mayor de seis meses. Pasado el periodo establecido, la persona debe ser llevada de nuevo ante el juez, quien puede poner a la persona en libertad o renovar la orden de detención por el tiempo que estime oportuno.

Las sentencias administrativas no puede ser de más de seis meses, pero pueden renovarse un número ilimitado de veces, por lo que, en la práctica, una persona puede verse encarcelada de por vida sin haber tenido un juicio justo. Ayed Doudeen³¹⁶ lleva desde 2007 encarcelado bajo una orden de detención administrativa, sin que se hayan emitido hasta la fecha cargos en su contra.

Israel argumenta que el uso de la detención administrativa está justificado por la situación de inseguridad permanente en la que se encuentra el país y alega que sólo la utiliza en casos extraordinarios. La realidad es que Israel utiliza la detención administrativa como una alternativa a los procedimientos penales ordinarios, principalmente cuando no disponen de pruebas suficientes para encarcelar a la persona detenida³¹⁷, o para justificar la detención de opositores políticos, como ha sido el caso de la parlamentaria palestina y defensora de derechos humanos Khalida Jarrar³¹⁸, también vice-presidenta de la organización palestina Addameer, que lucha por la defensa de los derechos de los presos y presas políticos palestinos en Israel. Jarrar fue detenida en su domicilio el 2 de Abril de 2015 y encarcelada por una orden administrativa en base a una serie de pruebas secretas que no fueron puestas en conocimiento de los representantes legales de la detenida. Hasta el 15 de abril no se presentaron cargos contra ella, teniendo que esperar ocho meses más, hasta diciembre para tener una sentencia firme contra ella: 15 meses de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Organizaciones como

³¹⁵ Art. 277 Orden nº 1651 Disponible online <http://nolegalfrontiers.org/en/military-orders/mil01> [Consultado 22 mayo 2016]

³¹⁶ Addameer “Administrative detention in the occupied Palestinian territory. A legal analysis Report” Addameer. 2010. Disponible online <http://www.addameer.org/files/Reports/administrative-detention-analysis-report-final.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

³¹⁷ B’tselem “Criticism of administrative detention under the Administrative Detention Order” Disponible online http://www.btselem.org/administrative_detention/criticism_on_the_administrative_detention_order [Consultado 22 mayo 2016]

³¹⁸ Para más información sobre su perfil <http://www.addameer.org/prisoner/khalida-jarrar>

Human Rights Watch³¹⁹ o la Unión Europea³²⁰ denunciaron en su momento la falta de garantías judiciales del proceso al que Khalida Jarrar fue sometida.

Desde 1967 Israel ha detenido a unas 800,000 personas palestinas, un 20% de la población total de Cisjordania. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas son hombres, podríamos decir que el 40% de los palestinos ha pasado por la cárcel en algún momento de sus vidas, muchos de ellos bajo esta figura de la detención administrativa. Las estadísticas muestran una clara relación entre los picos de violencia y el incremento de órdenes de detención administrativa, tal como se muestra en el gráfico elaborado por la organización Israelí B'tselem, lo que hace pensar en un cierto uso de la detención administrativa como método disuasorio, de manera similar al uso de la detención de manifestantes palestinos/as dentro de las fronteras de Israel.³²¹

4.2.2 Imposición de condiciones de existencia que acarren la destrucción física, total o parcial de un grupo racial

El art. II.b de la Convención establece como actos constitutivos del crimen de Apartheid

“La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

El bloqueo de la Franja de Gaza ha sido denunciado por un sin fin de organizaciones de DDHH y agencias de NNUU como una cruel forma de castigo colectivo, así como por una larga lista de académicos y juristas.³²² Un informe publicado

³¹⁹ Van Esvel. B “Dispatches: Israel Locks Up Palestinian Lawmaker” *Human Rights Watch*. 2015. Disponible online <https://www.hrw.org/news/2015/04/09/dispatches-israel-locks-palestinian-lawmaker> [Consultado 22 mayo 2016]

³²⁰ Carta enviada a Federica Mogherini, Representante de la Comisión Europea de Asuntos Exteriores, por parlamentarios/as europeos sobre la situación de Khalida Jarrar. Disponible online <http://samidoun.net/site/wp-content/uploads/2015/04/Letter-to-HRVP-Mogherini-RE-Khalida-Jarrar.pdf> [Consultado 22 mayo 2016]

³²¹ Ver p. 41-46 de este mismo trabajo.

³²² Ver Dugard, J y Reynodls, J. “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory.” *The European Journal of International Law Vol. 24 no. 3*. Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd, 2013; Chomsky, N and Pappé, I. *Gaza in crisis. Reflections on Israel's war against the Palestinians*. Haymarket books. 2011.

por NNUU en Septiembre 2015 alerta de que de seguir en estas condiciones, la Franja será inhabitable en 2020³²³.

Los últimos bombardeos masivos de Israel sobre la Franja de Gaza durante la llamada Operación Margen Protector han tenido un impacto catastrófico en la situación humanitaria de la zona, exacerbando aún más la precaria situación de sus habitantes y afectando drásticamente a mujeres y niñas. Según datos proporcionados por la OCHA³²⁴, en la segunda mitad del 2014 los casos de mortalidad materna y neonatal fueron el doble de los registrados durante el primer semestre del año. La tasa de desempleo de las mujeres en Gaza sobrepasa el 63%, más del doble de la registrada en 2007, antes del bloqueo israelí a la Franja. La precariedad de las condiciones de vida, el hacinamiento de las personas desplazadas internamente como consecuencia de los bombardeos y la pérdida de los escasos medios de producción que la población tenía disponibles están haciendo que cada vez más niñas abandonen los estudios y que la tasa de matrimonios tempranos suba de manera alarmante.

Asimismo, los ataques del ejército de Israel durante llamada operación Plomo Fundido, llevada a cabo entre diciembre de 2008 y enero de 2009 en a Franja de Gaza, acabaron con la vida de 1,417 personas³²⁵ (926 civiles, 255 policías y 236 combatientes) entro los que encontraban también 313 menores y 116 mujeres, según datos recogidos por el PCHR (Centro Palestino de DDHH). La brutalidad de los ataques enmarcadas en un contexto de bloqueo al territorio llevó a plantear la posibilidad de que ésta operación fuese considerada como un acto inhumano como crimen contra la humanidad.³²⁶

Para determinar qué tipo de crimen se estaría cometiendo, Naciones Unidas forma una comisión de investigación, encabezada por el Richard Goldstone para “analizar la

³²³ NNUU doc. “Gaza could become uninhabitable in less than five years in wake of 2014 conflict and ongoing de-development, according to new UNCTAD report” UNCTAD, 2015. Disponible online <http://unctad.org/en/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=260> [Consultado el 22 de mayo 2016]

³²⁴ NNUU doc. “The Gaza Strip: the long term impact of the 2014 hostilities on women and girls” OCHA, *occupied Palestinian territory*. 2015. Disponible online http://www.ochaopt.org/documents/women_factsheet_january2016_english.pdf [Consultado el 22 de mayo 2016]

³²⁵ Listado disponible en <http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/list.pdf> [Consultado el 22 de mayo 2016]

³²⁶ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009. p 72.

responsabilidad internacional y penal de los diferentes actores en el conflicto a raíz de la investigación oficial de NNUU desarrollada en seis meses de entrevistas y estudio de informes”³²⁷ En el informe, conocido como “informe Goldstone”, se señala que las acciones llevadas a cabo por el ejército en el marco de la operación Plomo Fundido,

“no pueden ser completamente evaluadas sin tener en cuenta el contexto y las condiciones de vida existentes en el momento en que se iniciaron. En sus aspectos materiales, las hostilidades militares fueron la culminación de un largo proceso de aislamiento político y económico impuesto por Israel contra la Franja de Gaza, que es descrito generalmente como un bloqueo”³²⁸

La situación del bloqueo es un punto clave para determinar si efectivamente estos ataques pueden constituir un crimen contra la humanidad, ya que ilustra el componente subjetivo de intencionalidad, necesario para identificar un crimen como crimen contra la humanidad. Los ataques a la Franja de Gaza durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009 responden a una “planificación sostenida y consciente de actos inhumanos y persecuciones contra una población civil”. Las restricciones en la libertad de movimiento impuestas por Israel a la población de la Franja, hizo que Gaza se convirtiera durante esos días en

“el único sitio del mundo del que la población civil no podía escapar para salvar su vida durante unos bombardeos indiscriminados y masivos: con la excepción de 220 mujeres casadas con extranjeros, Israel rehusó permitir abandonar la zona de combate durante los 22 días de guerra abierta a la población de Gaza. Todo los pasos hacia zonas seguras estuvieron cerrados: niños, mujeres, inválidos y personas impedidas no tuvieron la operación de solicitar refugio en otros lugares lejos de las operaciones militares, no habiendo lugares seguros en todo el territorio, densamente poblado y sin refugios construidos o naturales”³²⁹

³²⁷ *idem* p. 99

³²⁸ NNUU doc. A/HRC/12/48 “Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict” 2009, par.311. Disponible online <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf> [Consultado el 22 de mayo 2016]

³²⁹ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p.72.

Richard Falk denunció esta conducta como una denegación del refugio, que consistiría en un crimen contra la humanidad³³⁰.

Algunas de las conclusiones del informe Goldstone, recogidas por Capellà, que ilustran cómo Israel durante la operación Plomo Fundido cometió actos orientados a imponer condiciones de existencia que acarren la destrucción física, total o parcial de un grupo racial son:

- a) “El impacto del bloqueo y de las operaciones militares conjuntamente fueron letales para la población civil de Gaza.”³³¹
- b) “Antes y durante la operación militar israelí, la destrucción desproporcionada y la violencia contra los civiles fueron parte de una política deliberada.”³³²
- c) “Israel cometió crímenes de guerra y un crimen contra la humanidad de persecución, además de numerosas violaciones de derechos humanos antes, durante y después de la Operación Plomo Fundido.”³³³

4.2.3 Discriminación racial y recorte de derechos fundamentales

El art. II.c de la Convención establece como actos constitutivos del crimen de Apartheid

“Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y

³³⁰ NNUU doc. A/HRC/10/20 par. 18-24

³³¹ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p.101.

³³² *ibidem*

³³³ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p.102.

de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.”

Como explico en el capítulo 2, actualmente existe más de 50 leyes que discriminan a la población palestina que reside en Israel, restringiendo su participación política, vulnerando sus derechos económicos, sociales y culturales y limitando sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas. Algunos de estos ejemplos son la Ley de Contribuidores al Estado, Ley de Vacunas y ayudas a la infancia, Ley de áreas de prioridad nacional, Ley de la Nakba o la Ley de Perdón o Amnistía.³³⁴

Del mismo modo, la Ley del Retorno discrimina claramente a la población palestina, negando sus derechos a una nacionalidad y a salir de su país y regresar al mismo basándose en motivos raciales y religiosos.³³⁵

4.2.4 Segregación racial

El art. II.c de la Convención establece como actos constitutivos del crimen de Apartheid

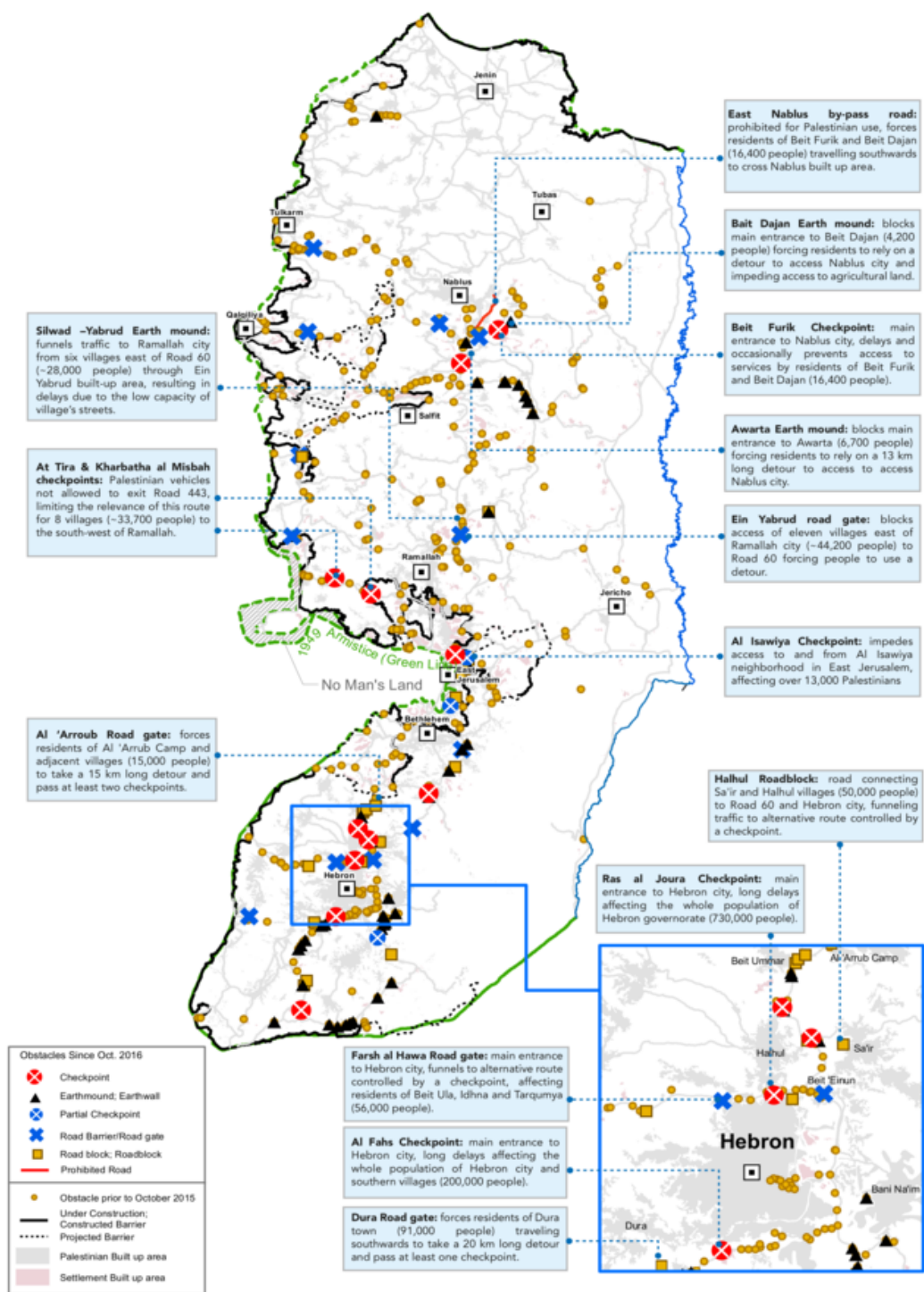
“Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos.”

La construcción de Muro, destinado a separar y aislar a la población palestina, así como las políticas de expansión colonial de los asentamientos están creando una serie de reservas y guetos que ilustran a la perfección la política de los bantustanes de la Sudáfrica del Apartheid.

La Ley de Propiedad de los Ausentes legitima la confiscación de propiedades privadas de la población palestina, aplicándose de manera diferencial a población palestina e israelí tal como se explica en capítulos anteriores de este trabajo.

³³⁴ Ver p. 40-41 de este mismo trabajo.

³³⁵ Ver p.27 de este mismo trabajo.



Mapa de restricción de movimiento en Cisjordania. Diciembre 2015 Fuente OCHA oPt.

Si bien los matrimonios mixtos no están expresamente prohibidos, la inexistencia del matrimonio civil dificulta este tipo de enlaces. Además, la Ley de Ciudadanía de 1952 prohíbe expresamente la reunificación familiar de una pareja en la que uno de los miembros sea un residente de Israel y otro del territorio palestino ocupado, excepto si este miembro es un colono judío residente en algún asentamiento. En 2007 se añade una nueva modificación que restringe también a las personas de Irán, Líbano, Siria e Iraq de solicitar la reagrupación familiar con sus parejas residentes en Israel, incluyendo en 2008 a la población gazatí.³³⁶

4.2.5 Explotación laboral y trabajo forzoso

El art. II.d de la Convención establece como actos constitutivos del crimen de Apartheid

“La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso”

Un informe publicado recientemente por la ONG Human Rights Watch denuncia la explotación de menores palestinos en asentamientos israelíes. A pesar de que la legislación, tanto la internacional como la israelí o la palestina, establecen como edad mínima para trabajar los 15 años, según este informe en los asentamientos es habitual encontrar a menores trabajando desde los 13 años, habiendo algunos casos incluso de niños de 10. Los y las menores trabajan jornadas de 8 horas, 6 o 7 días por semana, por lo que en la mayoría de los casos estos trabajos no son compatibles con los estudios. Todas las personas palestinas, menores y adultas, entrevistadas en el estudio cobran salarios inferiores al salario mínimo establecido por la legislación israelí, que es de aproximadamente unos 5 euros la hora para la población adulta y unos 4 euros para menores de edad. La mayoría de ellos ganaban entre 14 y 16 euros al día, unas tres veces menos de lo legalmente establecido.

³³⁶ Ver p.40-41 de este mismo trabajo para más información sobre estas leyes

Según un estudio³³⁷ realizado por Majid Sbeih en 2011, un 56% de la población palestina que trabaja en asentamientos está expuesta a accidentes laborales y un 32% a violencia psicológica. Este último porcentaje coincide también con el de los trabajadores y trabajadoras que sufren amenazas por parte de sus jefes israelíes de retirada de los permisos de trabajo que necesitan para trabajar en los asentamientos, expedidos por la Administración Civil israelí del gobierno militar en Cisjordania. Este colectivo no tiene derecho a recibir ningún tipo de prestación social ni seguro médico, derechos que si tienen los trabajadores y trabajadoras israelíes.

4.2.6 Persecución de las voces críticas.

El art. II.b de la Convención establece como actos constitutivos del crimen de Apartheid

“La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales”

Si la represión a las voces críticas con el sistema de discriminación israelí estaban patentes dentro de las fronteras de Israel, en Cisjordania alcanza nuevas dimensiones: expresar una opinión crítica con la ocupación no sólo no es un derecho reconocido si no que es un crimen castigado con severas penas de cárcel. En base a lo establecido por la “Orden Militar 101 sobre prohibición de actos de incitación y propaganda hostil”³³⁸ (de ahora en adelante la Orden 101) cualquier tipo de “asamblea, vigilia, marcha o publicación” que pueda tener algún contenido político o que pueda ser interpretado como tal. La Orden 101 define *asamblea* como un

“grupo de 10 o más personas congregadas en un lugar en donde se está dando un discurso político, un discurso que pueda ser interpretado como tal o que estén discutiendo sobre política” sin más. Dado que las familias palestinas suelen ser

³³⁷ Who Profits “Palestinian Wage Workers in Israeli Settlements in the West Bank – Characteristics and Work circumstances.” 2011. Disponible online http://www.whoprofits.org/sites/default/files/palestinian_workers_in_settlements_wp_position_paper.pdf [Consultado el 22 de mayo 2016]

³³⁸ Israel Defense Forces. Order No. 101. Order Regarding Prohibition of Incitement and Hostile Propaganda Actions. Disponible online http://www.btselem.org/download/19670827_order_regarding_prohibition_of_incitement_and_hostile_propaganda.pdf [Consultado el 22 de mayo 2016]

bastante numerosas, una familia de 10 miembros tomando té después de cenar y hablando sobre la situación política de la zona puede estar infringiendo esta orden puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel, llevando las limitaciones al derecho de libertad de expresión hasta un extremo que roza lo absurdo.

La Orden 101 se justifica, como tantas otras medidas por el sempiterno argumento de la seguridad del Estado de Israel.

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege específicamente el derecho a la libertad de expresión:

"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección"

El Pacto reconoce algunas limitaciones en el ejercicio de este derecho, haciendo hincapié en que dichas limitaciones deben estar provistas por la ley, ser proporcionales y necesarias. En aras de la transparencia y claridad y con el fin de evitar recortes injustificados de éste derecho, los Principios de Siracusa³³⁹ elaborados en 1984 definen con mayor concreción algunas de las bases de éstas limitaciones.

Uno de los argumentos más comúnmente esgrimidos es el de la protección de la seguridad nacional. A este respecto, los Principios de Siracusa explican que

"La violación sistemática de los derechos humanos socava la verdadera seguridad nacional y puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Un estado responsable de violaciones no podrá invocar la seguridad nacional como justificación de medidas destinadas a suprimir la oposición de tales violaciones o perpetrar prácticas represivas contra su población"

³³⁹ NNUU doc. E/CN.4/1984/4 "Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights" Art 32. 1984.

Por tanto, en base a estos principios y en el caso de concreto, Israel, como país que vulnera de manera sistemática los derechos de la población palestina, no podría argüir razones de seguridad para reprimir las voces críticas con sus políticas.

Activistas, movimientos sociales, ONGs y defensores y defensoras de los derechos humanos son hoy en día importantes mecanismos de control, vigilancia y denuncia de las vulneraciones de derechos cometidas por el Estado de Israel. Su labor es tan importante como arriesgada, sobretudo para la población palestina de Cisjordania y Gaza.

El sistema militar en general y la Orden 101 en concreto, legitiman la represión y la criminalización del derecho a la protesta en el territorio ocupado. Los Tribunales Militares, contrariamente a lo establecido por el DIH son utilizados con una finalidad política³⁴⁰, constituyendo una potente arma de represión contra el grupo de personas que defienden de manera no violenta los derechos humanos en Palestina.

Cuando en 2002 Israel empieza a construir el Muro en Cisjordania, varias de las localidades palestinas afectadas por su trazado comienzan a organizarse en comités populares para enfrentarse de manera no violenta a las políticas discriminatorias del Gobierno de Israel y tratar de detener la construcción del Muro y la expansión de los asentamientos. Algunas de las acciones de estos comités han tenido una gran repercusión mediática, tanto a nivel local como internacional³⁴¹, consiguiendo impactos directos y relativamente positivos sobre el terreno. En algunas situaciones se ha logrado modificar el trazado del Muro, como en el caso de Bil'in y en todas ellas se ha conseguido otro factor menos tangible quizá a efectos prácticos, pero no por ello menos importante: se ha conseguido alterar y poner en cuestión el discurso de securitización del Gobierno de Israel.

³⁴⁰ Hajjar, L. *Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza*. University of California Press. 2005, pp. 96–131.

³⁴¹ Ver “Demonstrators dressed as Na’vi from Avatar for the weekly demonstration against Israel’s separation barrier, in Bilin” *The Guardian*. 2010. Disponible online <http://www.theguardian.com/world/gallery/2010/feb/14/west-bank-barrier-avatar-protest> [Consultado el 22 de mayo 2016] o Kershner, I. “Palestinians Set Up Tents Where Israel Plans Homes” *The New York Times*. 2013. Disponible online http://www.nytimes.com/2013/01/12/world/middleeast/palestinians-set-up-camp-in-israeli-occupied-west-bank-territory.html?_r=0 [Consultado el 22 de mayo 2016]; o “Nabi Saleh: A tiny village with a big voice”. Amnesty International. 2013. Disponible online <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/tiny-village-big-voice/> [Consultado el 22 de mayo 2016];

Los altos niveles de represión y violencia a los que este tipo de movimientos y defensores y defensoras de DDHH se ven sometidos han sido denunciados por múltiples organismos de NNUU³⁴², así como por decenas de organizaciones tanto locales como internacionales³⁴³.

Frank la Rue, antiguo Relator de Especial Naciones Unidas para la Libertad de Expresión denunció en 2011 que la Orden 101 es utilizada por el ejército de Israel para “restringir el derecho de los palestinos a la libertad de expresión y a la asamblea pacífica”. También criticó la vaguedad de los términos en los que se expresa la ley y la “prohibición de la libertad de expresión por motivos políticos”. Señalaba además que la Orden tiene un margen de discrecionalidad demasiado amplio y que éste facilita situaciones de abuso de la fuerza por parte del ejército de Israel.

Amnistía Internacional publicó en 2015 un informe titulado “Gatillo fácil” que denunciaba el excesivo y desproporcionado uso de la fuerza en manifestaciones noviolentas en Cisjordania. Varias personas han muerto como consecuencia de este uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército de Israel, como han sido los casos de Mustafa Tamimi³⁴⁴ de la localidad de Nabi Saleh, o Bassem Abu Rahme³⁴⁵ de Bil’in. En todos los casos se emprendieron acciones legales contra el ejército de Israel pero ninguna de las demandas ha terminado con una sentencia condenatoria. Todos ellos han sido cerrados por falta de pruebas, a pesar de estar sobradamente documentados con videos, fotos y testimonios de testigos visuales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Israel por presentar a las personas que participan en manifestaciones noviolentas como una amenaza para la seguridad del Estado, la práctica es que estas personas no sólo no pueden ser definidas como una amenaza, como personas de las que necesitamos ser protegidas; sino como un colectivo de defensores y defensoras de DDHH en una situación de vulnerabilidad extrema, como

³⁴² NNUU doc. A/HRC/20/17/Add.2. par. 77 y 78.

³⁴³ Amnistía Internacional. “Gatillo fácil: el uso de la fuerza excesiva por Israel en Cisjordania” Amnistía Internacional, 2014. Disponible online <http://amnistiainternacional.org/publicaciones/209-gatillo-facil-el-uso-de-la-fuerza-excesiva-por-israel-en-cisjordania.html> [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁴⁴ Zonszian, M. “IDF closes probe into killing of Mustafa Tamimi in Nabi Saleh” +972 Magazine. 2012. Disponible online <http://972mag.com/idf-closes-probe-into-2011-killing-of-mustafa-tamimi-in-nabi-saleh/83059/> [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁴⁵ Forensic Architecture, “Reconstructing the death of a Palestinian demonstrator via video analysis.” Disponible online <http://www.forensic-architecture.org/case/bilin/> [Consultado el 22 de mayo 2016].

personas que necesitan ser protegidas.

Otro de los movimientos de resistencia no violentas con mayor número de éxitos recolectados y con un impacto cada vez más notable es la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel³⁴⁶ (BDS). Esta campaña nace en 2005, en el seno de la sociedad civil palestina como una alternativa a la estrategia planteada en los Acuerdos de Oslo. La campaña, tal como su nombre indica, plantea la imposición de boicots económicos, deportivos, académicos, culturales e institucionales a Israel, además de presionar a empresas y organismos para que retiren sus inversiones de Israel y a los gobiernos para que apliquen sanciones al Estado hebreo hasta que éste no cumpla con las demandas de la campaña, siendo éstas:

1. El fin de la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Franja de Gaza, territorios ocupados ilegalmente por Israel en 1967.
2. El derecho al retorno de los 7,5 millones de refugiados y refugiadas palestinas que no pueden volver a Palestina.
3. El reconocimiento de la igualdad de la ciudadanía árabe-palestina dentro de Israel.

Según el informe³⁴⁷ de Inversiones Mundiales publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) la inversión extranjera en Israel habría caído a casi la mitad, en comparación con el año anterior, presentando la figura más baja de la última década. Roni Manos, economista israelí, afirmó durante una entrevista publicada en un conocido periódico israelí que algunos de los factores que habría contribuido al descenso de la inversión extranjera serían la operación Margen Protector en Gaza en el verano de 2014 y las cada vez más numerosas campañas de boicot a Israel.

Estas presiones no han pasado desapercibidas para el Gobierno de Netanyahu. En 2011 la *Knesset* aprueba la conocida como “Ley Anti-boicot”³⁴⁸ que contempla la

³⁴⁶ Página web <http://boicotisrael.net/>

³⁴⁷ NNUU doc. “World investment report 2015: reforming international investment governance” *United Nations Conference on Trade and Development*. Geneva. United Nations. 2015.

³⁴⁸ Law Preventing Harm to the State of Israel by Means of Boycott – 2011 Disponible online <http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2011/07/Boycott-Law-Final-Version-ENG-120711.pdf> [Consultado el 22 de mayo 2016].

imposición de sanciones a organizaciones o individuos que llamen a cualquier tipo de boicot contra el Estado de Israel o contra los asentamientos en el territorio ocupado. La ley fue recurrida por varias organizaciones de DDHH argumentando que “impone sanciones civiles y administrativas desproporcionadas, contrarias a los principios legalmente aceptados, por declaraciones políticas. La ley tiene como objetivo silenciar expresiones de protesta en contra de las políticas del gobierno en áreas bajo su control y por tanto restringe de manera inconstitucional los medios democráticos disponibles para que una minoría exprese su oposición a las políticas del gobierno”³⁴⁹ La petición fue rechazada en abril del 2015 por el Tribunal Supremo de Israel³⁵⁰. Un año después, en abril del 2016 Jerusalén acogió la primera conferencia anti-boicot, organizada por el Gobierno de Israel. En el marco de esta conferencia, Yisrael Katz, Ministro de Transporte, Inteligencia y Energía Atómica ha hecho una llamada a la “eliminación selectiva de civiles” líderes de la campaña BDS.

Omar Barghouti, defensor de derechos humanos palestino y cofundador de la campaña de BDS fue notificado en mayo del 2016 por las autoridades israelíes de que su permiso de viaje no sería renovado, añadiendo que este podría ser el primer paso para revocar su estatus de residente permanente en Jerusalén. Amnistía Internacional³⁵¹ y *Frontline Defenders*³⁵² han denunciado estas amenazas y prácticas intimidatorias contra Defensores/as de DDHH.

En Diciembre del 2015, otra propuesta de ley pasó la primera ronda de votaciones en la *Knesset* para ser aprobada: la “Ley de Transparencia”, también conocida como la “Ley de ONGs”. Entre otras propuestas, la nueva ley promovida por la Ministra de Justicia Ayalet Shaked, pretende obligar a aquellas organizaciones consideradas “políticas” que reciban más un 51% financiación de gobiernos o agencias extranjeras a:

³⁴⁹ Uri Avnery et al. v. Knesset et al., 2015. Concerning the constitutionality of the law preventing harm to the State of Israel by means of boycott: summary of the decision. Disponible online [http://www.adalah.org/uploads/Boycott decision apri 2015 english summary.pdf](http://www.adalah.org/uploads/Boycott%20decision%20apri%202015%20english%20summary.pdf) [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁵⁰ *idem*.

³⁵¹ NNUU doc. “Stop unacceptable harassment of human rights defenders in Occupied Palestinian Territory – UN experts”. 2015. Disponible online <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16906&LangID=E> [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁵² Frontline Defenders “Case story: Omar Barghouti”. Disponible online <https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-omar-barghouti> [Consultado el 22 de mayo 2016].

- "a) Informar de que la mayoría de sus fondos provienen de entidades gubernamentales extranjeras, incluyendo los nombres de las entidades en todas las publicaciones dirigidas al público o a disposición del público, en cualquier medio visual que permita la incorporación del texto, en cualquier apelación por escrito a un empleado público o representante público y en todos los informe escritos y distribuidos al público.
- b) Reflejar en el acta de todas las reuniones que dispongan de las mismas, que la mayoría de su financiación proviene de entidades gubernamentales extranjeras, incluyendo los nombres de los países, en cualquier reunión pública con los representantes públicos.
- c) Los representantes de las organizaciones sujetas a la aplicación de la ley se considerarán como grupos de presión (lobby) de entidades extranjeras. La Sección 68 (a) de la Ley *Knesset* les será aplicable y serán obligados a llevar una etiqueta de identificación especial señalando que son representantes de organizaciones que se financian principalmente a través de organismos oficiales extranjeros".

No cumplir con estas obligaciones podría conducir a multas de más de 29.000 multas NILS (alrededor de € 6,700) por cada violación; por ejemplo, que no lleve la etiqueta en la *Knesset* que implicaría una multa de más de 6.700 €, no informar adecuadamente de la financiación extranjera otro 6.700 € ... etc.

Estas prácticas suponen una clara vulneración de los derechos del pueblo palestino, además de un incumplimiento del Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre libertad de expresión y del Derecho Internacional de los Derechos humanos.

¿Podemos ahora, responder a la pregunta planteada al comienzo del capítulo sobre la posibilidad de que el Estado de Israel cometa un crimen de Apartheid sobre el pueblo palestino? He dado numerosos ejemplos de vulneraciones de derechos fundamentales, derecho a la vida, a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión, de persecución de las voces críticas con el sistema, pero, ¿podemos hablar de que todas estas vulneraciones de derechos forman parte de un sistema de opresión sistemática intencionada que pretende establecer y mantener el dominio de un grupo racial sobre otro?

John Dugard³⁵³, antiguo Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, sostiene que sí es posible inferir esa “intención o finalidad” pese a las negativas de Israel al respecto.

Dugard y Reynolds³⁵⁴, en un artículo publicado en 2013 concluyen que los pilares que identificaban al Apartheid sudafricano (la demarcación de distintos grupos raciales y primacía de unos sobre otros, las políticas de fragmentación territorial y el sistema de dominación racial y opresión sistemática) se reproducen hoy en Palestina de manera generalizada

“En base a la naturaleza institucionalizada y sistemática de dominación racial que existe, hay fuertes argumentos para concluir que un sistema de Apartheid ha sido desarrollado en el territorio Palestino ocupado. Las prácticas de Israel en el territorio ocupado no son sólo una reminiscencia de – y en algunos casos peor que – el Apartheid tal como existía en Sudáfrica, pero son un incumplimiento de la prohibición legal de Apartheid”

El jurado del Tribunal Russel³⁵⁵ formado por personalidades como Stéphane Hessel, Mairead Corrigan Maguire o el magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo de España Jose Antonio Martín Pallín, considera que considera que

“Ciertas prácticas israelíes equivalen a persecución en tanto que ‘crimen de lesa humanidad’ según la definición establecida en el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Israel no es parte pero cuyo carácter consuetudinario ya ha sido subrayado por el Tribunal Russel para Palestina (conclusiones de Londres, §§ 5.3.2, 6.9). Se ha demostrado que los hechos en cuestión reúnen los elementos materiales, el elemento mental y el criterio contextual del crimen de persecución. Como ya se ha mencionado, la persecución implica la denegación intencional y grave de los derechos fundamentales de los

³⁵³ NNUU doc. A/HRC/4/17, “Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.” 2007, par. 50.

³⁵⁴ Dugard, J y Reynolds, J. “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory.” *The European Journal of International Law Vol. 24 no. 3*. Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd, 2013.

³⁵⁵ Para más información sobre el Tribunal y sus objetivos ver <http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/> [Consultado el 22 de mayo 2016].

miembros de un grupo identificable en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil”³⁵⁶ añadiendo que “El apartheid y la persecución constituyen actos atribuibles a Israel e implican su responsabilidad jurídica internacional (Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional [CDI] sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 2001, art. 1 y 2). Israel debe cesar sus actos de apartheid y sus políticas de persecución, y ofrecer las debidas garantías de no repetición (ibid., art. 30)”³⁵⁷

Establecer que muchas de las vulneraciones de derechos cometidas por el ejército de Israel no sólo constituyen crímenes de guerra sino crímenes contra la humanidad es especialmente relevante para la conceptualización de la situación que se vive hoy en día en el territorio palestino ocupado. Pasar de hablar de crímenes cometidos en un contexto de ocupación a hablar de crímenes contra la humanidad permite hablar de ataques ilegales, permite salir del debate de la proporcionalidad de los ataques o del derecho de Israel a la legítima defensa³⁵⁸.

Los crímenes contra la humanidad requieren de un elemento subjetivo “el conocimiento del autor sobre el contexto en el que comete el crimen”³⁵⁹, con dos componentes: una parte positiva, la intencionalidad de cometer la conducta y otra parte negativa, la no realización del acto por motivos puramente personales desvinculados del contexto.³⁶⁰

³⁵⁶ Tribunal Russel Sobre Palestina. Conclusiones de la sesión de Sudáfrica. 2011, par. 5.65. Disponible online <http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/wp-content/uploads/2011/11/Conclusiones-de-la-sesi%C3%B3n-de-Sud%C3%A1frica-Texto-completo-en-espa%C3%B1ol.pdf> [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁵⁷ Tribunal Russel Sobre Palestina. Conclusiones de la sesión de Sudáfrica. 2011, par. 6.1. Disponible online <http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/wp-content/uploads/2011/11/Conclusiones-de-la-sesi%C3%B3n-de-Sud%C3%A1frica-Texto-completo-en-espa%C3%B1ol.pdf> [Consultado el 22 de mayo 2016].

³⁵⁸ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p.73.

³⁵⁹ Capellà i Roig, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p.98

³⁶⁰ *ibidem*.

Si bien Dugard ya respondía, como indicaba anteriormente a la intencionalidad de las conductas del Estado de Israel, la situación de ocupación prolongada del territorio palestino, la violencia estructural generada por un entramado legal complejo, opaco y discriminatorio en su naturaleza tal como se ha descrito en capítulos anteriores del presente trabajo, o la persecución de las voces críticas y criminalización de la protesta, son algunos de los ejemplos que muestran cómo las vulneraciones de derechos cometidas por el Estado de Israel, lejos de ser incidentes aislados, responden a una estrategia preconcebida que pretende establecer y mantener ése sistema de dominación y opresión que difícilmente puede ser llevada a cabo de manera aleatoria sin un elemento claro de intencionalidad.

5 CONCLUSIONES

1. Israel utiliza el argumento de la seguridad para recortar derechos, legitimar políticas autoritarias y disciplinarias y para reprimir cualquier voz crítica con las posturas gubernamentales. Estas políticas discriminan de manera tanto directa como indirecta a la población palestina que vive en Israel, a la que vive en el territorio ocupado incluyendo a Jerusalén Este, y a la población refugiada que vive en el exilio.
2. Israel introduce de manera sistemática en las cuestiones de índole social, política o económica una lógica securitaria. De esta manera, puede adoptar medidas excepcionales que permiten cerrar en cierto modo el debate político sobre las mismas. El concepto de securitización ilustra de una manera muy clara este tipo de procesos en los que cualquier fenómeno, grupo o conducta pueden constituir una amenaza contra la seguridad mediante una construcción discursiva activa, por actores con capacidad para ello.
3. Este proceso de securitización está estrechamente relacionado con el estado de emergencia permanente en el que vive Israel desde su creación. Esta securitización de la política, la sociedad y la justicia en Israel permite el traspaso de cuestiones económicas, sociales o culturales de una esfera política normal a una esfera de excepcionalidad, de emergencia ante una amenaza inminente. Esto permite, como es el caso del estado de emergencia permanente, la adopción de una serie de medidas más restrictivas y coercitivas con el fin de garantizar la seguridad nacional.
4. La introducción del valor judío como elemento central de protección se traduce en una discriminación de todos aquellos grupos que no comparten este valor y es incompatible con un Estado que se defina a sí mismo como democrático y de derecho.
5. La influencia del valor judío del Estado de Israel en el desarrollo legislativo y la securitización de la justicia hacen que el sistema legal que se aplica en Israel sea profundamente discriminatorio contra la población palestina. Existe una

discriminación tanto formal como material hacia las personas palestinas que residen dentro del territorio israelí.

6. El rol del Tribunal Supremo de Israel es altamente cuestionable como órgano garante de derechos fundamentales de la población palestina, tanto de la que habita en Israel como de aquella que habita en el territorio ocupado. El hecho de que el Tribunal tenga jurisdicción sobre las acciones que el ejército de Israel lleva a cabo en el territorio ocupado no garantiza que haya mecanismos de rendición de cuentas en casos de vulneraciones de derechos. Una vez más, la securitización de los procesos judiciales justifica y legitima vulneraciones de derechos en aras de la seguridad del Estado y de la protección de sus valores.
7. El enfoque de solución de conflictos propuesto en los Acuerdos de Oslo, centrado únicamente en el fin de la ocupación militar de Palestina tiene que ser revisado y actualizado. La grave vulneración de derechos que sufre a día de hoy el pueblo palestino no puede reducirse única y exclusivamente a una ocupación militar. Los enfoques y las soluciones propuestas deben tener en cuenta la desigual relación de poder entre los grupos y evitar estrategias centradas en la negociación y el diálogo entre las partes, ya que éstas tienden a equiparar responsabilidades y sufrimientos. Es necesario apostar por una estrategia de transformación de conflictos que incida y altere las relaciones de poder existentes; una estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, en la que éstos no sean una moneda de cambio sino un imperativo legalmente vinculante. Las lógicas de la presión, las sanciones y la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas, representadas en el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) deben ser incorporadas en cualquier estrategia futura si realmente se quiere conseguir una paz justa y duradera en Israel y Palestina.
8. La fragmentación territorial del territorio palestino derivada de los Acuerdos de Oslo ha llevado a una fragmentación legal formando un mapa de “guetos legales” y construyendo una serie de muros invisibles que hacen difícil, si no imposible, la construcción de un sistema jurídico que proteja de manera eficaz los derechos de la población palestina.

9. La escasa confianza de la población en los sistemas jurídicos estatales palestinos o israelíes, en el caso de la población palestina de Jerusalén Este, hace que el sistema más utilizado sea un sistema de mediación tradicional basado en principios religiosos que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, por lo que este grupo se sitúa en una situación de vulnerabilidad cruzada extremadamente peligrosa.
10. La ocupación militar y las limitaciones de movimiento impuestas a la población palestina restringen gravemente el acceso a la justicia a la población palestina que vive en el territorio ocupado.
11. El sistema militar que se aplica a la población civil palestina del territorio ocupado viola gravemente los derechos humanos. Es un sistema abusivo y arbitrario, profundamente opaco y que vulnera de manera sistemática el derecho al debido proceso de las personas palestinas. Además, los mecanismos de rendición de cuentas son escasos e ineficaces. La mayoría de denuncias que se presentan contra el ejército de Israel u otros cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado acaban archivadas por falta de pruebas o son desestimadas. Por el contrario, la altísima tasa de condenas, 99'9%, a personas palestinas en los Tribunales Militares por delitos relacionados con la seguridad del Estado de Israel (entendiendo por seguridad desde delitos de sangre hasta multas de tráfico) plantea dudas más que razonables sobre la imparcialidad del sistema.
12. El sistema militar israelí que se aplica a la población civil en el territorio ocupado está diseñado para mantener un sistema de opresión y discriminación contra la población palestina, que vulnera flagrantemente sus derechos más básicos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
13. La aplicación del sistema legal israelí a la población colona que vive en el territorio ocupado supone una extensión del sistema legal del ocupante al territorio ocupado e incumple la legalidad internacional.
14. El diseño y la estructura del sistema legal en Israel, que cuenta con más de 50 Supremo como ente legitimador de muchas de las vulneraciones de derechos, el

sistema militar que se aplica a la población civil en Cisjordania y la prolongada situación de ocupación militar, el inhumano bloqueo a la Franja de Gaza; todos estos factores, sumados a la opresión a las voces críticas y a la represión del derecho a la protesta, no son vulneraciones de derechos aislada ni casuales. Todos estos factores se derivan de un régimen de opresión y discriminación sistemática de carácter claramente intencionado cuyo objetivo es el de mantener un sistema de dominación sobre el pueblo palestino.

15. El Estado de Israel es, en base a los criterios expuestos anteriormente, responsable de un crimen de Apartheid contra el pueblo palestino. La impunidad de los crímenes y vulneraciones sólo perpetúa el *status quo*. La falta de acciones legales que tengan un carácter sancionador y vinculante contra el Estado de Israel contribuye a que estas vulneraciones se sigan cometiendo, alejando cada vez una solución de paz, digna, justa y duradera para el pueblo palestino.

6 BIBLIOGRAFÍA

- ALEXY, R. “Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, traducción de Carlos Bernal Pulido, *REDC*, núm. 66, 2002.
- BARAK, A. “Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary.” *Electronic Journal of Comparative Law*, vol 6.1.
- BARAK, A. *Israeli Supreme Court, Judgements of the Israeli Supreme Court: fighting terrorism within the Law*, The Supreme Court of Israel, Tel Aviv (s.f.).
- BARBOZA, A. “Democracia y derechos humanos en la teoría política de Norberto Bobbio” Co-herencia No. 2 Vol, 2005.
- BISHARAT, G. “Peace and the Political Imperative of Legal Reform in Palestine” *Case W. Res. J. Int’l L. Vol. 31. Issue 2*, 1999.
- BOBBIO, N. *El futuro de la democracia*. Fondo de la Cultural Económica. S.A de C.V. México, 1986.
- CABEDO MALLOL, V. *Pluralismo jurídico y los pueblos indígenas*. Icaria Academia, España, 2012.
- CAPELLÀ I ROIG, M. “De los asesinatos selectivos de 2002 a los ataques contra Gaza de 2008: ¿Un crimen contra la humanidad anunciado?” en Escudero, R. y Pérez González, C. *La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi, Madrid, 2009, p.65-105.
- COCINI, L. y BONDIA, D. “Apartheid against the Palestinian People”. *Amb Palestina al Cor*, 2009.
- COHEN-ALMAGOR, R. “Administrative detention in Israel and its employment as means of combating political extremism.” *9 N.Y. Int’l L. Rev.*, 1999.
- CHOMSKY, N. *Ilusiones de Oriente Medio. ¿Paz en Oriente Medio? Reflexiones sobre justicia y nacionalidad*. Editorial Popular, España, 2003.
- CHOMSKY, N and PAPPÉ, I. *Gaza in crisis. Reflections on Israel’s war against the Palestinians*, Haymarket books, 2011.
- DECAUX, E. “Administration of justice, rule of law and democracy. Issue of the administration of justice through military tribunals” UNESCO, 2005
- DIECKHOFF, A. *The Invention of a Nation: Zionist Thought and the Making of Modern Israel*, Columbia University Press, 2003.
- DUGARD, J “Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.” *UN Audiovisual Library of International Law*, 2008.
- DUGARD, J y REYNOLDS, J. “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory.” *The European Journal of International Law Vol. 24 no. 3* . Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd, 2013.
- DUGARD, J y REYNOLDS, J. “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory.” *The European Journal of International Law Vol. 24 no. 3* . Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd, 2013.
- ESCUDERO ALDAY, R., “La seguridad humana: una propuesta conceptual”, en Escudero, R. (ed), *Segregados y recluidos: los palestinos y las amenazas a su seguridad*, Catarata, Madrid, 2008.
- ESCUDERO ALDAY, R. “Los tribunales israelíes y la cultura de la legalidad.” en Escudero, R. y Pérez González, C (ed.) *La Responsabilidad penal por crímenes de guerra: el caso de Palestina*. Aranzadi. Madrid. 2009, p. 167-201
- FOUCAULT, M. *Nacimiento de la biopolítica. Curso del College de France (1978 – 1979)*. Akal, Madrid, 2009.

- GALTUNG, J. "Violence, peace and peace research" *Journal of Peace Research*, Vol. 6 No. 3. 1969, pp. 167-191.
- SHARP, G. "En torno a la definición de seguridad nacional", en Aguayo, S. y Bagley, B (ed) *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana*, Siglo veintiuno editores, México, 1990.
- HAJJAR, L. *Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza*. University of California Press. 2005, pp. 96–131.
- HALABI, U. "Israeli Laws and Judicial System as tools for accomplishing political objectives in Jerusalem. Main stages in consolidating Israeli control over Jerusalem contrary to International Law." *The Civic Coalition for Defending Palestinian's Rights in Jerusalem*, 2007-
- IGLESIAS, L., "Seguridad nacional y estrategia. La protección de los intereses y valores de España en un mundo globalizado", *Escenarios Actuales*, nº 3, 2013.
- International Crisis Group. "Squaring the circle: Palestinian security reform under occupation". *Middle East Report* N° 98 , 2010.
- JACOBS, S. (Ed), Soske, J. (Ed) *Apartheid Israel: The Politics of an Analogy*, Chicago, Haymarket Books, London, Zedbooks, 2015.
- KAUFMAN, E. and BISHARAT, I., "Introducing human rights into conflict resolution: the relevance for the Israeli-Palestinian peace process. *Journal of Human Rights*," , 2002, p. 71-91.
- KELSEN, H. *Peace through Law*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944.
- KING, M.E. "Palestinian Civil Resistance against Israeli occupation." en Stephan, MJ. *Civilian jihad. Nonviolent struggle, democratization and governance in the Middle East*. Palgrave Macmillan. USA. 2009, p. 131-157.
- KRETZMER, D. "The law of belligerent occupation in the Supreme Court of Israel" *International Review of the Red Cross*. Vol. 94, 2012.
- LUDSIN, H. *Women and the draft Constitution of Palestine*. Women's Center for Legal Aid and Counselling. 2011, p.35-48.
- MENDOZA GARCÍA, I. "Pluralidad de sistemas jurídicos y derogación de la norma" Tesis doctoral, 2014.
- PAPPÉ, I (Ed) *Israel and South Africa, The many faces of Apartheid*. Zed Books, Londres, 2015.
- PARLEVLIET, M., "Rethinking conflict transformation from a human rights perspective." Berlin: Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, 2009.
- REIMAN, C. "Hacia la transformación de conflictos: evaluación de los enfoques recientes de gestión de conflictos." Berghof Handbook for Conflict Transformation, 2000.
- REYNOLDS, J. "Intenet to regularise: The Israeli Supreme Court and the Normalisation of Emergency" *Adalah's newsletter*, ". Vol. 104, 2013.
- ROADSTRUM MOFFET, M. *Perpetual Emergency: a legal analysis of the British Defence Regulations, 1945 in the occupied territories*, Al Haq, 1989.
- ROSENNE, S. "Estructura del sistema jurídico y constitucional del Estado de Israel." Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, (s.f).
- SAMUEL, M. "Punitive House Demolitions in the West Bank: The Hague Regulations, Geneva Convention IV, and a Jus Cogens Bypass." *6 Berkeley J. Middle E. & Islamic L.* 1., 2014.
- SÁNCHEZ CASTAÑEDA, A. "Orígenes del pluralismo jurídico(1)" *La razón. La gaceta jurídica*, 2012.

- SÁNCHEZ, A y SELICK, P. "Human Rights as a tool for conflict transformation: The case of BDS movement and local unarmed popular resistance." Sin publicar, cortesía de las autoras.
- SCHMIDT, Y. *Foundation of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories*, Tesis doctoral ,2001.
- SHABTAI, S. "Israel's National Security Concept: New Basic Terms in the Military-Security Sphere Strategic Assessment". *Volume 13 No. 2. August*, 2010.
- SHEHADA, R. *Occupier's Law. Israel and the West bank*, Institute for Palestine Studies, Washington DC, Revised Edition, 1988.
- TAMIR, M. and SNYDER, M. "Update: a guide to legal research in Israel." Hauser Global Law School Program, 2011.
- THOMAS, C. *In Search of Security: The Third World in International Relations*, Lynne Rienner, Boulder Colorado, 1987.
- WEILL, S. "The judicial arm of the occupation: the Israeli military courts in the occupied Palestinian territories" *International Review of the Red Cross* Vol. 89 (number 866), 2007.